

The background of the entire page is a complex abstract composition. It features large, overlapping geometric shapes in a vibrant red and a dark, textured black. A diagonal band of a grainy, black-and-white photograph of a dense crowd of people runs from the middle-left towards the bottom-right. The text is positioned in the lower-left area, set against the dark textured background.

**El programa de
Corriente Roja para la
revolución socialista en
el Estado español**

El programa de Corriente Roja para la revolución socialista en el Estado español

Esta publicación es producto de un trabajo colectivo y resultado de años de debate en el que ha participado toda la militancia de Corriente Roja y han colaborado también algunos y algunas camaradas internacionales de la Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional.

Diseño y maquetación elaborados por la Comisión de Comunicación de Corriente Roja.

Contacto:

info@corrienteroja.net
(+34) 685 64 92 74

Web:

www.corrienteroja.net

Redes sociales:

@corrienteroja

Estas páginas están dedicadas a todos los pueblos que luchan contra el imperialismo en todas sus formas. En especial, nos acordamos del pueblo palestino, que lucha contra el genocidio perpetrado por Israel, y de la resistencia ucraniana, que en febrero de 2024 se cumplen dos años de la invasión militar de Putin.

A todos los compañeros y compañeras que nos han precedido y que fueron capaces de no sucumbir para que Corriente Roja sea hoy el partido que es.

A los y las trabajadoras que, con sus luchas, -que hemos sentido como propias- nos han enseñado tantísimo.



Índice

Prólogo.....	11
I. Introducción	16
II. La cuestión ecológica	28
Algunos elementos que muestran que la catástrofe ecológica ya se ha instalado entre nosotros/as.	29
El impacto desigual de la catástrofe ecológica: hay víctimas y responsables	31
La respuesta del capitalismo imperialista a la catástrofe ecológica que ha creado: el fraude de las cumbres climáticas	33
La imposibilidad de la transición verde bajo el capitalismo	34
El fraude de la transición verde de la UE y en el Estado español	36
La guerra de Ucrania agrava todavía más las cosas	37
La catástrofe climática es expresión de la barbarie y elemento central de la quiebra histórica del capitalismo.....	38
Acabar con la dominación capitalista en cada país y a escala mundial, reconstruir la economía sobre bases socialistas y restablecer el metabolismo con la naturaleza	40
III. Un programa para hacer frente a la emergencia socioeconómica y ambiental y abrir camino al socialismo	44
La crisis deja al desnudo un capitalismo periférico y dependiente.	45
Reorganización general de la economía, en base a las necesidades sociales y la sostenibilidad ambiental.	46
Nacionalización de las industrias estratégicas bajo control de la clase trabajadora.....	48
Por unos salarios dignos, por su actualización obligatoria y automática según el IPC	51

Combatir el desempleo, reducir la jornada sin reducir el salario	51
Derogación de las reformas laborales de 2010, 2012 y 2021.	51
Regularización de la población inmigrante indocumentada en territorio estatal.....	52
Sanidad, educación y pensiones públicas.....	53
Ningún desahucio sin alternativa habitacional adecuada, por un parque público de viviendas de alquiler social.....	55
Expropiar la banca y estatizar el sistema de crédito.....	58
La cuestión agraria	59
No al pago de la deuda.....	60
IV. El Régimen del 78. Un régimen marcado por la herencia del franquismo.	62
El atraso histórico del Estado español.....	63
La Constitución del 78, fruto de un engaño.....	64
Lo llaman democracia y no lo es.....	68
V. La cuestión nacional	72
El Estado español, una “cárcel de pueblos”.....	73
La cuestión nacional, el régimen franquista y el fraude de la Transición	74
El resurgir del movimiento independentista catalán	74
La lucha por los derechos nacionales de los pueblos y las lecciones del referéndum catalán.....	75
La defensa de las lenguas propias, una tarea democrática básica.....	78
El derecho a la autodeterminación en Galiza.....	80
VI. Por una Asamblea Constituyente libre y soberana	82
Una Constituyente libre y soberana deberá levantarse sobre el respeto del derecho a la autodeterminación y acometer la depuración de jueces y mandos militares y policiales reaccionarios	86
VII. Enfrentar los aparatos de represión del Estado.....	88
El ejército	89
Las fuerzas policiales	91

VIII. La ultraderecha y el fascismo.....	92
IX. El Estado español, un país imperialista de segunda.....	98
Las garras del Ibex 35 en América Latina	97
El Estado español, peón sumiso de la OTAN, brazo armado del imperialismo.....	99
¡Alto al negocio armamentista!	100
Los enclaves militares de Ceuta y Melilla, frontera sur de la UE ante la presión migratoria.....	101
El Sahara es de los saharauis	102
X. La respuesta marxista a las opresiones	104
Explotación y opresión en el marxismo.....	105
El marxismo y las diferentes teorías sobre la opresión	108
XI. Paso a la mujer trabajadora	112
¡Por nuestros derechos laborales!	113
La violencia machista sigue sin ser una prioridad pública	115
¡No a la doble jornada laboral!	116
XII. Paso a la juventud.....	118
¡Empleo estable con salarios dignos y derechos políticos!	119
¡Educación 100% pública y de calidad!	120
¡Por un movimiento estudiantil masivo y democrático!	121
¡Por nuestra emancipación y por derechos políticos para la juventud!.....	122
¡Libre acceso al ocio, la naturaleza y la cultura!.....	122
Una juventud en vanguardia de la lucha por una revolución socialista.....	123
XIII. La lucha LGBTI.....	124
XIV. Contra el racismo y la xenofobia	128
XV. La inevitable batalla contra el reformismo.....	134
Qué era ayer y qué es hoy el “reformismo”.....	136
Reformistas ayer y hoy directamente partidos burgueses	138
Los reformistas de hoy: reformistas sin reformas	140
Las organizaciones que se encuentran entre el reformismo y la revolución	142

XVI. El trabajo en los sindicatos y la lucha por la organización independiente de la clase trabajadora	144
El papel actual de los sindicatos	145
La diáspora sindical y el sindicalismo alternativo.....	147
La lucha por reconstruir los Sindicatos de clase y la organización independiente de la clase obrera, gobierne quien gobierne	148
La lucha por transformar los sindicatos en órganos de los sectores más explotados y precarizados de la clase obrera	150
El Frente único (FU) y la unidad de acción	152
El Partido revolucionario y el trabajo en los sindicatos	154
XVII. Por un gobierno de la clase trabajadora.....	156
XVIII. ¡No a la Europa del capital! ¡Por los Estados Unidos Socialistas de Europa!.....	162
La UE, un conglomerado imperialista europeo dominado por Alemania y Francia	164
La crisis de 2007-2008 mostró la verdadera cara de la UE	165
La UE no se volvió “social y solidaria” tras la pandemia	166
La UE y la guerra de Ucrania	167
La batalla por los Estados Unidos Socialistas de Europa da sentido a la lucha contra la UE y una perspectiva revolucionaria a la lucha en cada país	168
XIX. Construir el Partido Revolucionario en el Estado español y una Internacional	170
¿Qué partido y para qué?.....	172
La participación en las elecciones y en las instituciones parlamentarias está al servicio de la lucha extraparlamentaria, la difusión del programa y la construcción del partido revolucionario	174
¡Súmate a construir Corriente Roja y la LIT-Ci!.....	174



Prólogo

(...) “No se pueden formular los intereses de clase de otro modo que por medio de un programa, como tampoco se puede defender un programa de otro modo que creando un partido.”

León Trotsky, “El ultimatismo burocrático”,
en *La lucha contra el fascismo en Alemania*,
ob. cit., pp. 111-112.

En el momento en que cerramos este programa, la lucha de clases a nivel mundial está marcada por dos grandes hechos. En primer lugar, la guerra de invasión de Rusia a Ucrania y, en segundo lugar, el endurecimiento del genocidio que vive el pueblo palestino desde hace ya décadas.

La invasión rusa a Ucrania empezó en febrero de 2022 y si aún hoy está al orden del día es por la heroica resistencia obrera que ha dificultado enormemente el avance de las tropas rusas. Esta guerra de agresión nacional ha sido

aprovechada por los gobiernos occidentales para poner en marcha una brutal carrera armamentista, a la par que enviaban, mal y tarde, chatarra a Ucrania. La han utilizado, también, para agravar sus ataques a las condiciones de vida de la clase trabajadora mediante una inflación desbocada que se ha llevado por delante salarios y pensiones.

Mientras prosigue la invasión rusa, nos golpea la monstruosa operación de genocidio y limpieza étnica de Israel contra el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania. Si el estado colonialista israelí puede emplearse con esta saña genocida es por el apoyo y la complicidad militar, económica y diplomática que recibe de los gobiernos de Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea (UE), incluido el español, que mientras pregona la “solución” de los dos estados, sigue vendiendo armas a Israel. El grado de destrucción y degeneración moral del Estado sionista alcanza niveles extremos de barbarie, solo comparables a los de los nazis en el gueto de Varsovia.

No obstante, si el Estado asesino de Israel cuenta con la complicidad de los gobiernos europeos, el pueblo palestino cuenta con la solidaridad de millones de trabajadores/as y jóvenes en todo el mundo, como han demostrado las masivas manifestaciones exigiendo el alto al fuego en Gaza y por una Palestina libre.

En el Estado español se confirma la reedición del gobierno “más progresista de la historia”, con Pedro Sánchez y Yolanda Díaz a la cabeza. Si hoy el PSOE representa la carta más segura del IBEX y la Troika, es por haber reconducido a la vía muerta de las instituciones las distintas crisis abiertas desde el 2008, logrando además la cooptación total de Podemos al Régimen del 78. Un gobierno que se ha caracterizado por su choque entre su discurso de avance y progreso y la realidad de la clase trabajadora: inflación, empobrecimiento, desahucios, temporalidad, paro y un largo etcétera que nada tiene que ver con el discurso triunfalista que pregonan sus campañas de autobombo.

La agudización de la crisis del orden capitalista provoca, inevitablemente, choques y polarización entre los Estados y las clases sociales, pero también divisiones dentro de éstas.

Aparecen sectores burgueses que apuestan por soluciones autoritarias y medidas ultraliberales de choque. Entretanto, otros sectores burgueses, temiendo el choque directo con el movimiento obrero y popular, se muestran partidarios de la “paz social y el diálogo”. Se forma, así, un “campo burgués reaccionario” y un “campo burgués progresista” en el que se integran también la izquierda oficial y las burocracias sindicales.

Esto es lo que está ocurriendo actualmente con la investidura de Pedro Sánchez. Por un lado, tenemos el “campo reaccionario” de la derecha y la extrema derecha, que representa una parte sustancial de los aparatos del Estado posfranquista y a los sectores más retrógrados de la patronal, y por otro lado está el “campo progresista”, liderado por el PSOE, que constituye el ala izquierda del régimen monárquico y, además, se autoproclama como el dique de contención del fascismo.

En esta polarización, sin embargo, lo que falta es un campo propio de la clase trabajadora, con su programa y sus banderas. La clase obrera no tiene que ser el furgón de cola de ningún campo, ya se llame progresista o reaccionario, pues su tarea es la autoorganización y la defensa y conquista de sus propias reivindicaciones, y, si tenemos que combatir la derecha codo con codo con el “campo burgués progresista”, lo haremos con nuestra propia política y con independencia de clase, y no permitiremos ser reclamo electoral de ningún partido.

Este programa está al servicio de construir ese campo independiente de la clase trabajadora y sus aliados.

No podemos olvidarnos de mencionar que en mayo de 2022 se cumplían 10 años de Corriente Roja como sección en el Estado español de la LIT-Ci. Estos 10 años, no obstante, recogen muchos más años de experiencia y tienen origen en organizaciones como el PST, que en 1976 y en plena efervescencia política de la Transición defendía las posiciones del marxismo revolucionario.

Partidos como el PST y el PRT están en nuestro ADN revolucionario y han nutrido de experiencia estos 10 años de

intervención en la lucha de clases. Entendemos este programa no solo como el resultado del trabajo de este tiempo, sino también como el legado de nuestros antecesores.

Somos bien conscientes de que en esta lucha no estamos solos y solas. Este programa es, ante todo, una guía para la acción, que se irá construyendo, modificando y enriqueciendo al calor de la lucha de clases y los cambios de la realidad.

Como decía Trotsky, la crisis de la humanidad es la crisis de la dirección revolucionaria, y la realidad es que es una necesidad imperiosa construir esa dirección, un partido con el que llevar a cabo una revolución política y social que nos permita acabar con la opresión y la explotación y construir el socialismo, y este partido no puede tener otra perspectiva que la de ser mundial, porque para acabar con el capitalismo definitivamente tenemos que hacerlo en todas las partes del mundo, y porque la clase obrera es una y es internacional, por ello construimos la Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional.

Este programa es un llamado a activistas y gente que lucha, a quienes creen firmemente que otro mundo es posible, a quienes quieren escribir un nuevo capítulo en la historia de la emancipación de la clase trabajadora. Os llamamos a construir juntos ese partido.

Somos conscientes de que el capitalismo golpea nuestras vidas y genera desasosiego y resignación, pero también creemos que es en las adversidades donde se tiene que redoblar nuestro compromiso con la revolución y el socialismo. Nos negamos a normalizar la barbarie y también a renunciar al optimismo revolucionario, a dejar de creer en el potencial de la clase trabajadora como liberadora de la humanidad.

Para poner fin a este régimen heredero del franquismo, para acabar con la explotación capitalista y toda forma de opresión, para defender la vida y el planeta mismo, te invitamos a construir Corriente Roja y la Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional.

Noviembre de 2023







Introducción

Presentamos aquí el programa de Corriente Roja. Un esfuerzo colectivo en el que ha participado el conjunto de nuestra militancia y en el que, con la ayuda de nuestra organización internacional, la LIT-Ci, intentamos elaborar el programa para la revolución socialista en el Estado español.

El programa es también un llamamiento a todos los luchadores y luchadoras que, como nosotras, están buscando una salida colectiva a la crisis presente. Un llamamiento a compartirlo, enriquecerlo y convertirlo en una guía para la acción revolucionaria de la clase trabajadora y la juventud del Estado español. Es por eso que sabemos que no es un programa cerrado, pues deberá probarse a la luz de la lucha de clases e ir actualizándose, tanto para enmendar sus errores como para responder mejor a la realidad, que es cambiante.

Para nosotras y nosotros, militantes del marxismo revolucionario, el programa tiene una enorme importancia. Representa la comprensión común que tenemos de las tareas que debe encarar la clase

trabajadora en su camino hacia la conquista del poder. Es una base firme sobre la que construir el partido revolucionario y el fundamento de toda nuestra propaganda revolucionaria.

“Un programa sólo es sólido cuando su texto está ligado a la experiencia revolucionaria del partido, a las enseñanzas de las luchas que se han convertido en la carne y la sangre de sus cuadros”¹ - León Trotsky

Un programa que se sustenta en la experiencia histórica del movimiento obrero

Nuestro programa no es una improvisación del momento. Se apoya en nuestra propia experiencia como organización política pero, sobre todo, en la experiencia histórica del movimiento obrero internacional y del Estado español, en sus triunfos y sus fracasos. Triunfos como la Revolución rusa de 1917, donde por primera vez la clase trabajadora organizada, dirigida por el partido bolchevique, se apropió del poder y construyó un estado de los trabajadores, al estilo de la Comuna de París. Fracasos como la contrarrevolución estalinista que, unos años más tarde, ahogó en sangre la revolución bolchevique; o como la victoria nazi de 1933 en Alemania, antesala de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial.

Nuestro programa tiene su base teórica en el Manifiesto comunista de Marx y Engels, los cuatro primeros Congresos de la Tercera Internacional, la Teoría de la Revolución Permanente y el Programa de Transición formulado por Trotsky.

Se sustenta en la riquísima experiencia de la guerra y la revolución española de 1936-1939, un grandioso movimiento que se distinguió por las colectivizaciones, las milicias obreras o el Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya. Un movimiento que fue aplastado en sangre por Franco, una vez que había sido traicionado y derrotado políticamente por sus dirigentes oficiales.

E, igualmente, bebe de las lecciones extraídas en la lucha de la clase trabajadora y las nacionalidades oprimidas contra el franquismo y durante la Transición. Un franquismo que pudo ser derrocado del mismo modo que lo fue la dictadura salazarista en Portugal en 1974, pero que no lo fue porque quienes dirigían el movimiento (PCE y PSOE) lo traicionaron para pactar la Transición con los franquistas.



De arriba abajo: Destrucción de la Columna Vendôme durante la Comuna de París (1871); manifestantes rusos en la Avenida Nevski durante la Revolución de febrero (1917); Reemplazo republicano destinado al frente de Teruel (1938).

Un programa que parte de la historia de España, la naturaleza del régimen y el lugar del capitalismo español en el orden mundial

Este programa se asienta en una comprensión del lugar de España en la historia, que pasó de ser el "imperio en el que no se ponía el sol" de los siglos XVI y XVII, a la abierta decadencia en el momento en que emergían nuevos imperios que se repartían el mundo a finales del siglo XIX. España llegó tarde a la revolución burguesa (en realidad nunca llegó) y a la era imperialista, convertida en una potencia de segunda fila a la sombra de las potencias dominantes.

Este papel de segundón del capitalismo español va también asociado a la Transición española. Esta no fue solo la transición política del franquismo al régimen monárquico, que incluía la amnistía de los crímenes del franquismo y la salvaguarda de sus principales aparatos estatales. Era un paquete global que abarcaba también la transición económica, con la preservación de los grandes intereses económicos de la oligarquía, la privatización de las empresas públicas y una ofensiva inversora imperialista en Latinoamérica. Todo ello en el cuadro del ingreso en la UE. También formaba parte de la transición, junto a la entrada en la UE, la reubicación del Estado español en el cuadro internacional, con el ingreso en la OTAN (manteniendo al mismo tiempo los acuerdos bilaterales con EEUU).

El movimiento que desencadenó el 15M tenía un lema central que ahora parece olvidado: "le llaman democracia y no lo es". Y es que el régimen monárquico surgido de la Transición está lejos de la "democracia plena" de la que hablan PP, PSOE y también UP-Sumar. Pero este régimen hunde sus raíces en el franquismo, con quien no rompió, con consecuencias que se expresan en todos los ámbitos de nuestras vidas. La brutal actuación del Estado contra el movimiento independentista catalán es la muestra más nítida de un régimen para quien la unidad forzada de España es seña central de identidad. El permanente

escándalo del aparato judicial, plagado y dominado por jueces postfranquistas, nos muestra cada día la cara y el origen del régimen.



Un programa que se sintetiza en la consigna "Socialismo o barbarie"

La disyuntiva entre socialismo o barbarie que defendió Rosa Luxemburgo tiene más actualidad que nunca en el pasado y tiene su reflejo en el programa. Elementos de barbarie se han instalado ya en nuestras vidas y se acentúan cada vez más: la precarización generalizada de las condiciones de trabajo y de vida, la inflación disparada, el desempleo y la destrucción de los servicios públicos, el empobrecimiento de millones, incluidos países enteros; migraciones forzadas, racismo y xenofobia; opresión creciente y nuevas formas de violencia sobre las mujeres y el colectivo LGTBI; la emergencia climática que nos golpea de frente, dejando en evidencia el fraude de la "transición verde" capitalista y llevándonos a situaciones sin retorno; la guerra brutal de agresión nacional de Rusia contra Ucrania, la carrera armamentista y el militarismo, las guerras "olvidadas" de África y Asia y las políticas genocidas como la de Israel contra el pueblo palestino; la represión y los ataques a las libertades y derechos democráticos en los cuatro puntos del globo, autoritarismo, ascenso mundial de la ultraderecha.

Es una combinación aterradora que se asienta sobre un orden mundial en profunda crisis. La lucha por el socialismo es hoy la lucha para detener este curso de barbarie, reparar los destrozos y reconstruir la sociedad al servicio de la inmensa mayoría y del reequilibrio con la naturaleza. Vivimos unos tiempos en que la lucha por reformas no se puede separar de la lucha por la revolución. No se puede separar porque el capital se cierra en banda a cualquier reforma progresiva y cuando logramos, después de mucho luchar, alguna mejora importante, nos la desnaturalizan y siempre está en peligro. Porque toda reforma sería, que cambie de verdad las condiciones de vida del pueblo, atenta contra los intereses básicos de este capitalismo depredador. Porque nos quitan con la mano derecha lo que, forzados, no dan con la izquierda.

Por eso, la lucha por las reformas sólo es realmente efectiva como parte de la lucha por un cambio radical, es decir, por la expropiación del gran capital, la reorganización general de la economía y su planificación democrática desde el punto de vista social y ambiental, por una revolución socialista que ponga el poder en manos de la clase trabajadora democráticamente organizada. Mientras tanto, estamos condenados/as a resistir, retroceder y, si conseguimos alguna mejora, tenerla siempre en precario.



Una combinación de reivindicaciones económicas y sociales básicas, reivindicaciones democráticas, medioambientales, transitorias y socialistas

El viejo reformismo dividía el programa en dos partes radicalmente separadas. De un lado estaba el programa mínimo, que servía para el día a día, de otro el programa máximo, que solo servía para hacer propaganda del socialismo los domingos. No había vínculo alguno entre el programa mínimo y el programa máximo. Pero justo lo que ahora necesitamos es un programa que haga un puente entre ambos: que, partiendo de las reivindicaciones más sentidas y más inmediatas de la clase trabajadora, de su conciencia actual, la conduzca a la lucha por el poder.

El programa, así, integra las reivindicaciones más básicas, como la lucha por la estabilidad laboral, el salario y el empleo. Reivindicaciones que, si la movilización alcanza gran masividad, nos llevan a luchar por la escala móvil de salarios o la escala móvil de horas de trabajo, necesarias para resolver el problema globalmente y que cuestionan las bases mismas del capitalismo, por eso son reivindicaciones transicionales, es decir, reivindicaciones puente, cuya conquista va asociada a la lucha por el poder.

El programa recoge la lucha por las libertades democráticas, de enorme importancia cuando nos enfrentamos al régimen monárquico surgido de la Transición, que es la última expresión de un estado donde la burguesía ha sido históricamente incapaz de resolver tareas democráticas elementales como la separación Iglesia-Estado, la educación laica, el derecho a decidir de las nacionalidades o la reforma agraria. Un estado cuya respuesta a los levantamientos populares a lo largo de la historia ha sido la represión sangrienta, que en 1936 se convirtió en una guerra social de exterminio. La última muestra de la naturaleza de este estado fue su reacción furibunda, con el rey Felipe VI a la cabeza, contra el referéndum catalán del 1 de octubre de 2017. El régimen del 78 es el gran instrumento en manos de la oligarquía financiera

española (Ibex 35) para ejercer su dominación. Acabar con él es, por eso mismo, clave para la lucha por la revolución socialista.

Una parte muy importante del programa es la lucha contra las opresiones. Ya hemos mencionado la opresión sobre las nacionalidades, a las que el estado niega su legítimo derecho democrático a decidir. Junto a ello, toma una importancia enorme la lucha por la igualdad de las mujeres y contra toda opresión y discriminación del colectivo LGTBI. Ocurre lo mismo con la lucha contra el racismo y la xenofobia, que la burguesía utiliza para sobreexplotar y dividir a nuestra clase. Pero si la burguesía utiliza las opresiones para dividirnos, la lucha contra ellas ha de ser fundamental para unirnos como clase frente al capital y sus gobiernos.

La emergencia climática y ambiental ha alcanzado tal punto de gravedad que la respuesta que exige dar se ha convertido en una parte esencial del programa de la clase trabajadora, cuyo protagonismo necesitamos en esta lucha. No hay respuesta al problema social sin responder al problema ecológico y viceversa, porque ambas son inseparables. No hay posibilidad de detener la marcha a la catástrofe sin reorganizar la economía de arriba abajo y eso no es posible sin expropiar a los grandes capitalistas al servicio de la inmensa mayoría y restablecer el metabolismo con la naturaleza.

El programa tiene un punto culminante en la lucha por un Gobierno de la clase trabajadora o, lo que es lo mismo, en la toma del poder por parte de los trabajadores y trabajadoras. Un gobierno que no tiene nada que ver con los gobiernos al uso, cuya base de apoyo son el aparato policial, judicial y militar y un parlamento cuya misión es dar una apariencia de democracia al dominio del gran capital.

El Gobierno de la clase trabajadora debe sustentarse en la autoorganización del pueblo trabajador, en sus organismos democráticos, en el pueblo armado. Es el instrumento para avanzar en la construcción socialista, junto con los otros pueblos de Europa y del mundo. Este Gobierno de la clase trabajadora encarna lo que los y las marxistas hemos defendido siempre: la dictadura revolucionaria del proletariado,

que no es otra cosa que el máximo de democracia para el pueblo trabajador, que ejerce el poder, y la represión contra una pequeña minoría contrarrevolucionaria que se niega a renunciar a sus privilegios y al derecho capitalista de la propiedad de los medios de producción. Justo todo lo contrario de las dictaduras de Stalin o del régimen chino o cubano, que han ensuciado el nombre del socialismo. Tampoco tiene nada que ver con el chavismo, el régimen de la boliburguesía disfrazado de socialismo del siglo XXI.



No hay programa sin partido

La defensa de este programa es inseparable de la construcción del partido revolucionario que lo aplique y que, en el curso de la lucha de clases, se convierta en un partido con influencia de masas que tenga condiciones de luchar por la victoria socialista. La construcción de ese partido es la razón de ser de Corriente Roja. Un partido centralista democrático, en el que la dirección no puede pasar por encima de la base militante.

No somos unos recién llegados. Representamos una larga tradición revolucionaria, la de aquellos que, frente a la degradación de la socialdemocracia y del stalinismo, lucharon y dieron sus vidas para mantener la herencia de Marx y Engels, de Rosa Luxemburgo, de Lenin y de Trotsky.

En la Rusia de Lenin la revolución triunfó porque había un partido bolchevique que no capituló, se enfrentó al gobierno "progresista" de Kerensky y combatió hasta el final por el poder de los soviets. En la Revolución española de 1936-39 no faltó una enorme combatividad, lo que falló fue el partido que se pusiera al frente para luchar por el poder, lo que dio como resultado la victoria genocida de Franco. Un pueblo puede ir muy lejos en su lucha, pero no logrará triunfar sobre el enemigo de clase, sin una dirección revolucionaria.

Algunos nos critican de anticuados por no renunciar a lo mejor de la tradición revolucionaria del movimiento obrero. Pero su modelo fue el gobierno de Tsipras en Grecia que traicionó al pueblo griego, o el régimen cleptómano de Chávez y Maduro y ahora, de nuevo, Lula, al frente de un gobierno de coalición con el gran capital brasileño. Otros, renuncian a la tradición en nombre del posmodernismo individualista.

Por nuestra parte, seguimos comprometidos con la clase trabajadora, no renunciamos a la tradición revolucionaria y seguimos combatiendo por el programa revolucionario y la construcción del partido y la Internacional, que permitan la victoria de nuestra clase.



Notas:

¹ Leon Trotsky en ¿Y ahora? - Problemas vitales del proletariado alemán (1932). Escrito el 25 de enero de 1932, fue publicado originalmente en ruso en Berlín, 1932, bajo el título de La revolución alemana y la burocracia stalinista.





La cuestión ecológica

Algunos elementos que muestran que la catástrofe ecológica ya se ha instalado entre nosotros/as

Un cóctel siniestro marca la actualidad: crisis climática, extinción masiva de la biodiversidad, escasez de agua, daños en los ecosistemas y contaminación. Esto se combina con el declive de las reservas de los combustibles fósiles y los recursos minerales. Si no logramos frenar radicalmente el curso mortal del capitalismo y arrancarle el poder, la catástrofe ecológica amenazaré las condiciones de existencia de la civilización humana.

El Estado español es especialmente vulnerable a la crisis climática. Un ejemplo es la desecación del parque de Doñana, patrimonio de la humanidad, a consecuencia del clima y de la gestión criminal de sus acuíferos, extenuados por el turismo veraniego y la agricultura intensiva. Avanza la erosión del suelo y el proceso de desertificación (cuyo riesgo alcanza al 74% del suelo español), la pérdida de suelo fértil, el envenenamiento del suelo por la agricultura industrial, la falta de recursos hídricos y la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. El 70% de los ecosistemas españoles presentan estados de conservación desfavorables. El abandono del medio rural, en plena crisis climática, convierte las

zonas forestales en verdaderos polvorines, agravando los incendios forestales.

En Europa, el aumento de la temperatura global con respecto a la era preindustrial (1850) ha alcanzado ya los 2,2°C, pero el aumento en los polos es mucho mayor. La capa de hielo de Groenlandia se derrite a una velocidad superior de la que señalaban los modelos matemáticos, dando paso a un ascenso irreversible del nivel del mar y al colapso de las grandes corrientes marinas. En la Antártida, el colapso del glaciar Thwaites, del tamaño de la península de Florida, implicaría una elevación catastrófica del nivel del mar de 1 a 3 metros.

Asistimos al deshielo de vastas extensiones de la tundra siberiana, con el riesgo de liberar enormes cantidades de gas metano (*permafrost*). Esto tendría un inmenso impacto, ya que este gas, origina un efecto invernadero mucho más potente que el CO₂, que provocará, a su vez, grandes efectos cascada. Otro punto de no retorno (*tipping point*) potencialmente catastrófico que se acerca sería el deshielo total del Ártico durante el verano.²

² El IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) viene alertando del riesgo “alto” de alcanzar dichos puntos de no retorno a partir de un aumento de la temperatura global de 2°C. Según algunas investigaciones, una elevación de la temperatura a 1,5°C provocará múltiples nuevos cambios irreversibles, con efectos cascada fuera de control. Según las previsiones de Climate Action Tracker, vamos a un aumento de 2,4°C en 2050 (1,5°C en 2030), que con las nuevas promesas del COP 26 de Glasgow podrían quedar teóricamente en 1,8°C, lo que sería catastrófico, teniendo en cuenta además que los gobiernos y grandes corporaciones no están cumpliendo sus promesas, ni con las recomendaciones del IPCC de reducir las “emisiones netas del 50% en 2030, del 100% en 2050 y negativas el resto del siglo. Un artículo en la prestigiosa revista PNAS cuyo título es “Climate Endgame” (final de juego climático) señala: “El calentamiento global podría acabar siendo “catastrófico” para la humanidad si los aumentos de temperatura son peores de lo que muchos modelos actuales predicen o si el calentamiento provoca una cascada de eventos que aún no han sido evaluados suficientemente, o ambas cosas”. Esto incluye, desde una pérdida del 10% de la población mundial, hasta una eventual extinción de la humanidad.

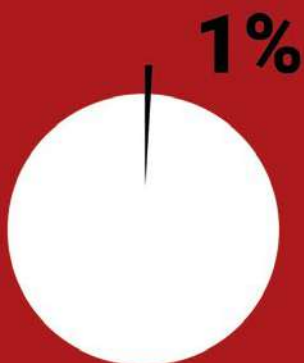
El impacto desigual de la catástrofe ecológica: hay víctimas y responsables

Los gobiernos, los medios de comunicación y la academia nos presentan la catástrofe ambiental como una responsabilidad de la “humanidad”, donde las soluciones son responsabilidad de cada individuo: “recicla, cierra el grifo, no malgastes...” Plantear las cosas de esa manera es un auténtico fraude.

Los responsables de la catástrofe ambiental no son la gente trabajadora ordinaria que vive o malvive de su salario o pensión, de ayudas sociales o del trabajo informal. Más aún, si nos referimos a los “países pobres” semicoloniales, los mayores afectados por la emergencia ecológica. Un ejemplo de eso son las migraciones ecológicas a causa de sequías, incendios, inundaciones, etc.

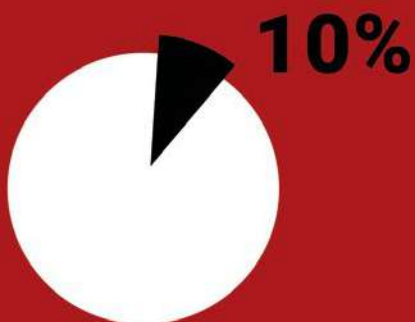
Los grandes responsables y beneficiarios de la catástrofe ecológica son las grandes corporaciones energéticas, mineras, industriales y tecnológicas, los grandes bancos y fondos de inversión y los gobiernos que los representan. Como amos del mundo, sus decisiones determinan el futuro del planeta. Desde el punto de vista individual, los grandes contaminadores son una minoría rica y muy rica. Quienes viven en las condiciones más humildes son quienes menos contaminan, al tiempo que son quienes más sufren. Estudios científicos como el de Tim Gore, señalan que para limitar el calentamiento climático a +1.5°C, el 1% más rico de la población mundial deberá reducir sus emisiones en un 97%. El 10%, en un 90%. El siguiente 40% deberá limitarlas en un 57%. El 50% restante, sin embargo, podría multiplicar sus emisiones por 2.33. Estas o similares cifras corresponden a un consenso científico general.

La lucha ecologista es lucha de clases y anti imperialista. La justicia ecológica es inseparable de la justicia social. La lucha por el socialismo es la lucha por recuperar el planeta de manos de las grandes corporaciones y sus gobiernos que ponen en cuestión nuestra propia supervivencia.



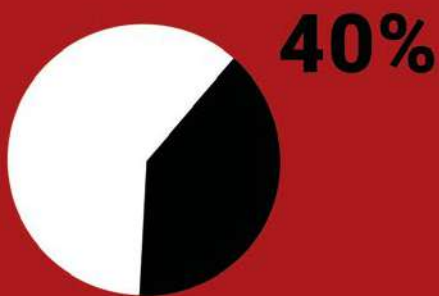
-97% 

A white icon of a factory with three smokestacks emitting smoke, set against a red background.



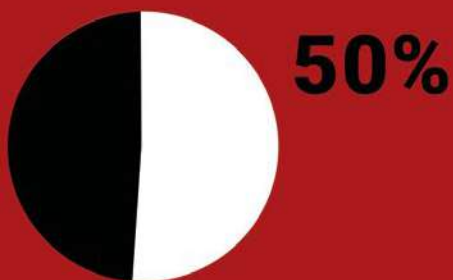
-90% 

A white icon of a factory with three smokestacks emitting smoke, set against a red background.



-57% 

A white icon of a factory with three smokestacks emitting smoke, set against a red background.



x2.33 

A white icon of an upward-pointing arrow with a zigzag line, set against a red background.

La respuesta del capitalismo imperialista a la catástrofe ecológica que ha creado: el fraude de las cumbres climáticas

Los gobiernos del mundo llevan décadas realizando fastuosas cumbres climáticas sin ningún resultado práctico, la emergencia climática ha seguido agravándose. Los gobiernos hablan de reducir la emisión de CO₂ o de metano, pero sin establecer cuotas, ni controles ni sanciones por incumplimiento.

No hay compromiso para reducir subvenciones a los combustibles fósiles mientras las energías renovables son consideradas un añadido para suplir las carencias de los combustibles fósiles. El “mercado de emisiones de carbono” es un fraude completo que sirve para saltarse la reducción de emisiones de CO₂.



La imposibilidad de la transición verde bajo el capitalismo

Ante el agotamiento de los combustibles fósiles y el agravamiento de los problemas ambientales, algunos gobiernos se presentan como defensores del “*green new deal*” o del “capitalismo verde”. Promocionan la idea de hacer frente a la emergencia climática y adaptarse a la “sostenibilidad”, haciendo que la “economía verde” sea más rentable que la “contaminante”. En este relato, los gobiernos regularían y aportarían dinero público para las inversiones sostenibles no rentables de los grandes grupos privados, impulsando así la transición a una economía “verde”.

Pero a las grandes corporaciones multinacionales ávidas de ganancias, les resulta imposible cambiar su matriz energética, basada en los combustibles fósiles (más del 80% de la energía primaria). Mantener el crecimiento del PIB mientras se sustituye la energía fósil por renovables, reduciendo además las emisiones de efecto invernadero, es lisa y llanamente imposible.

La preocupación de los grandes capitalistas y sus gobiernos no es la catástrofe ecológica que ellos han creado, sino que los combustibles fósiles han entrado en un proceso de agotamiento irreversible en el que sus costes de extracción y transporte son cada vez mayores y su tasa de retorno energético (TRE), (la energía resultante después de restar la que se ha consumido en su extracción y transporte)- es cada vez más pobre.

Las energías renovables, dependientes de los combustibles fósiles, no pueden sustituir globalmente a la energía fósil. Poseen límites difícilmente franqueables: solo se utilizan para producir electricidad (que es únicamente el 20% de la energía consumida), son poco densas, de difícil almacenamiento y transporte. No se pueden generar en cualquier lugar ni su producción es continua.

Únicamente pueden compensar parcialmente el descenso de las energías fósiles cuya sustitución a gran escala,

requeriría décadas de nuevas inversiones y la utilización masiva de unos materiales (cobalto, litio, cobre, plata...) cada vez más escasos, que han entrado, a su vez, en un proceso de agotamiento. Tampoco los biocombustibles, el hidrógeno “verde” o la nuclear son alternativas capaces de sustituir globalmente a los combustibles fósiles.

Bajo el capitalismo, el desarrollo de las renovables va contra la población autóctona y los ecosistemas de los lugares donde se desarrolla, y no va a llevar a ninguna sostenibilidad si no va acompañada de la reducción del gasto energético, algo imposible bajo la lógica del capital imperialista.



El fraude de la transición verde de la UE y en el Estado español

La UE y los gobiernos, incluido el “gobierno más progresista de la historia”, se presentan

como los campeones del capitalismo “verde”. Sus grandes proyectos son el hidrógeno verde, la extensión de energías renovables o el coche eléctrico, cuyo objetivo, más allá de la propaganda, no es la transición a la sostenibilidad sino el mantenimiento de las ganancias de las grandes empresas capitalistas, en un contexto de declive de los combustibles fósiles.

Su fórmula es la de siempre: cargar sobre nuestras espaldas el aumento de los costes energéticos y poner a disposición de los grandes capitalistas ingentes cantidades de dinero público que, al final, como siempre, paga el pueblo trabajador.

Buena parte de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos que le corresponden al Estado español (a cambio -no se olvide- de nuevos retrocesos en pensiones, derechos laborales, servicios públicos...) va a manos de oligopolios eléctricos como Endesa, Naturgy e Iberdrola (segunda, tercera y séptima empresas más contaminantes) para construir enormes parques eólicos y fotovoltaicos no sostenibles y con un enorme impacto medioambiental. Un ejemplo es el H2Med que es un proyecto para construir el primer corredor de hidrógeno verde de la UE, financiado con fondos europeos, que estaría al servicio de atender

³ Según un reciente estudio de la Agencia Estatal de Meteorología, el incremento de las temperaturas y la disminución de las lluvias ha hecho que el clima árido en España se haya duplicado desde los años 50 del siglo pasado, avanzando a un ritmo de 1.500 km² al año. Esto implica una menor disponibilidad de recursos hídricos, por lo que el consumo de agua, masivo para los proyectos de hidrógeno verde podría entrar en competencia con el consumo agrícola y humano en algunas regiones de España en época de sequía.

no las necesidades energéticas del Estado español, sino las necesidades de la industria alemana. Algo completamente irracional.

Otra parte relevante va a parar a las grandes empresas automovilísticas, con Seat-Volkswagen a la cabeza, destinadas al coche eléctrico que tampoco es sostenible. Sustituir el actual parque de automóviles de combustión por uno eléctrico resulta una empresa imposible, incluso desde el punto de vista capitalista.

La guerra de Ucrania agrava todavía más las cosas

Ya antes de la invasión de Putin, la UE declaró que el gas y la nuclear pasaban a ser consideradas energías limpias; que podían, por tanto, contar con las ayudas de los fondos europeos y de financiación privilegiada para la transición verde.

La guerra de Ucrania ha acelerado la crisis energética y ecológica. El rearme general de los países y bloques imperialista, acentúan el cambio climático y dejan negro sobre blanco que la máquina de la acumulación capitalista no puede detenerse. La réplica de la UE a los problemas de suministro energético agravados por la guerra (y cuya causa estructural es el agotamiento de los combustibles fósiles) ha sido dejar de lado sus promesas y dar nuevo impulso a las energías fósiles, entre ellas el carbón, así como alargar la vida útil de las centrales nucleares.

En EE. UU., Biden ha otorgado nuevas concesiones de fracking para producir gas licuado y dominar el mercado europeo, a pesar de que este sistema de extracción implica enormes daños ambientales y la emisión de grandes cantidades de metano a la atmósfera. China, por su parte, ha aumentado de manera sustancial el consumo de carbón para la producción eléctrica.

La catástrofe climática es expresión de la barbarie y elemento central de la quiebra histórica del capitalismo

El crecimiento capitalista se está produciendo a costa de la destrucción de la naturaleza y la profundización de la desigualdad entre personas y países, de la precariedad laboral y social y de la miseria de sectores crecientes de la población. El desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo se ha convertido en desarrollo de fuerzas destructivas, de la naturaleza y de las personas. El sistema capitalista-imperialista, basado en la sed insaciable de ganancia y la acumulación incesante de capital, no puede ser reformado. La catástrofe climática es expresión de la barbarie y constituye un elemento central de la quiebra histórica del capitalismo.

Las corrientes ecologistas radicales suelen decantarse por el “decrecentismo”, que parte del hecho evidente de que no es posible detener la catástrofe climática y la degradación ambiental sin reducir de manera drástica e inmediata las emisiones. Es indiscutible que no existe actualmente alternativa tecnológica o energética que permita producir lo mismo o más, contaminando menos; ni es posible que exista en el corto plazo en el que sería necesario.

Compartimos con los decrecentistas la necesidad de reducir el consumo energético y de materiales en los países imperialistas y en los sectores opulentos de la sociedad—así como la denuncia del consumismo y del productivismo o, lo que es lo mismo, los aumentos de la “eficiencia productiva” movidos por la sed de ganancia capitalista, ajenos a la satisfacción de las necesidades humanas y al respeto a la naturaleza. El crecimiento económico no es más que el nombre dado por los economistas y periodistas burgueses al proceso de acumulación capitalista, que lleva implícito un aumento continuo del consumo de materia y energía.

Pero hay que dejar claro que esa reducción no vendrá ni de las empresas ni de los gobiernos capitalistas, como ya hemos visto. A la vez, las salidas propuestas por muchos

de las corrientes decrecentistas, soluciones individuales o de pequeñas colectividades de consumo ético, economía social o comunidades autogestionadas, no conseguirán esa reducción. No es posible lograr el decrecimiento en una sociedad capitalista que sólo puede existir mediante la expansión permanente de la producción y el consumo al servicio de la acumulación de capital y la maximización de las ganancias, en beneficio de una ínfima minoría de la población. La única manera de resolver la crisis medioambiental, es una revolución socialista a escala internacional, que acabe con la dominación imperialista, expropie a las grandes corporaciones y dé el poder a la clase trabajadora para poder planificar democrática y ecológicamente la producción y el consumo en cada país y a escala mundial.

Nuestra diferencia con el decrecentismo es, por tanto, táctica, estratégica y de programa. El decrecentismo (aun asumiendo que existen distintas corrientes) no tiene como objetivo cambiar las relaciones sociales de producción capitalistas, detener el proceso de acumulación del capital y reorganizar radicalmente la economía sobre nuevas bases. Las medidas que propugnan a lo sumo disminuirían el crecimiento capitalista a tasas de los años 1960 y 1970. Su propuesta es un “decrecimiento de la acumulación” del capital que, en verdad, es una fantasía que cree que es posible volver atrás la rueda de la historia.

También combatimos el productivismo o “prometeísmo tecnológico” defendido por ciertos sectores de la izquierda, que hunde sus raíces en el productivismo estalinista. Tras la revolución rusa -al contrario de la época en que Lenin estuvo al mando y donde se tomaron medidas avanzadas de protección de la naturaleza -la sangrienta contrarrevolución política de Stalin impuso una planificación burocrática de la economía, una grosera ideología productivista y un industrialismo que provocó enormes destrozos ecológicos.

El estalinismo renunció a la revolución internacional y, en el marco del “socialismo en un solo país” y la consiguiente coexistencia pacífica con el imperialismo, entró en una carrera irracional para superarlo económicamente mediante

el estajanovismo laboral y ambiental. Los países sometidos a regímenes estalinistas fueron responsables de una gran contaminación y desastres ambientales, empezando por la URSS. Son ejemplo catástrofes como la de Chernóbil o la desecación del Mar de Aral, en Asia Central.

El socialismo que defendemos deberá hacer frente a las inevitables consecuencias del cambio climático en curso y sobre la base de los límites ecológicos del planeta, llevar a cabo una profunda revolución de las fuerzas productivas que, como dijo Marx, “prepare el camino para una sociedad comunista de productores libremente asociados” que regule de manera racional el metabolismo entre sociedad y naturaleza.

Acabar con la dominación capitalista en cada país y a escala mundial, reconstruir la economía sobre bases socialistas y restablecer el metabolismo con la naturaleza



Hay un sector del ecologismo radical que coincide con burocratas sindicales y con la izquierda oficialista en afirmar que la lucha contra el cambio climático y por la conservación ambiental es algo ajeno a la clase trabajadora. Pero es ésta quien está sufriendo de lleno la catástrofe ambiental y está gravemente amenazada de pérdidas de empleo masivas, mientras sufre un creciente deterioro de sus condiciones de vida.

La clase trabajadora es la que produce los medios de vida y la riqueza del mundo y, por tanto, la única que puede reorganizar la economía al servicio de las necesidades humanas y de la sostenibilidad de la naturaleza. Pero bajo el capitalismo, la clase obrera no decide qué produce, cuándo, cuánto ni para qué. Para ello precisa, junto con sus aliados, tomar el poder en sus manos. La lucha ecológica no es algo

aparte sino parte consustancial de la revolución obrera. Sin una revolución que expropié a los grandes capitalistas y se extienda al mundo, estamos condenados al colapso ambiental.

Nuestra propuesta parte de las luchas concretas de la clase trabajadora y contra la destrucción ambiental y apunta hacia una **economía socialista, bajo control obrero con democracia**, que tiene como premisa la toma del poder por la clase trabajadora y sus aliados. Para ello es necesario ganar a la clase obrera y, en particular a la clase obrera industrial, para este programa, buscando siempre el vínculo entre este programa y sus intereses inmediatos.

La toma del poder y la revolución socialista es también condición para **poner la ciencia, la investigación y la técnica bajo control de la clase trabajadora**, al servicio de las necesidades humanas y de la **recuperación del equilibrio con la naturaleza**.

La **reducción drástica del consumo de las energías fósiles y de la energía nuclear** es una urgencia inaplazable frente al cambio climático, junto con un verdadero plan de transición para su sustitución por energías renovables, de acuerdo con las poblaciones afectadas.

Hay que acabar con la obsolescencia programada, la publicidad, el despilfarro de materiales y alimentos o los productos de un solo uso. Eliminar los sectores de producción capitalista que solo responde a la sed de ganancia, como la colosal industria del armamento (ahora en plena expansión) o la de bienes de lujo para superricos.

La banca y la gran industria, empezando por los oligopolios energéticos, deben ser expropiadas y puestas bajo control de la clase trabajadora. La estructura económica del país ha de ser profundamente alterada: no podemos depender del turismo masivo, que es completamente incompatible con cualquier política verde. Ni de la industria del automóvil, la aviación o la agricultura de esquilación.

La agricultura y ganadería industrial o las megapiscifactorías son enormemente contaminantes y deben ser **reconvertidas de manera radical según criterios ecológicos**. Hay que acabar con el uso disparatado e irracional de los

recursos hídricos, que aumenta sin control cada año. Esto incluye **medidas drásticas para reducir el regadío, los campos de golf o las urbanizaciones de lujo.**

La defensa del medio ambiente debe ir íntimamente unida a la defensa del empleo, que debe ser garantizado. Hay que reducir globalmente la jornada laboral sin pérdida de salario, hasta alcanzar el pleno empleo.

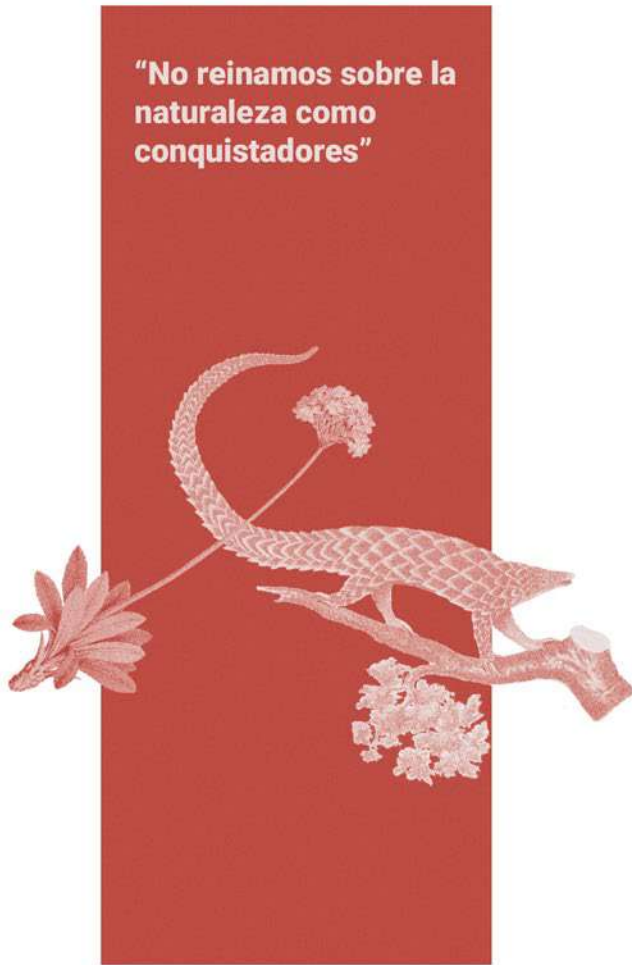
Hay que **reequilibrar profundamente la relación entre las ciudades**, en particular las grandes ciudades -verdaderos agujeros negros medioambientales- **y el medio rural**, cada vez más desatendido y despoblado. No puede haber una sociedad ecológicamente sana sin resolver este enorme problema provocado por el capitalismo.

La política de grandes infraestructuras tendrá una moratoria inmediata, evaluando las nuevas propuestas bajo estrictos criterios ambientales y de necesidad social. Se promoverá la rehabilitación de viviendas populares y el consiguiente ahorro energético. Se destruirán o restaurarán infraestructuras inservibles o al servicio exclusivo de las minorías más ricas. Hay que restaurar el territorio hoy degradado y reservar una parte cualitativamente mayor para la conservación.

La movilidad debe estar apoyada en el transporte público, no en el vehículo privado particular. Hay que aumentar y mejorar el transporte público, haciéndolo accesible a toda la población y gratuito. Priorizar la marcha a pie o en bicicleta en las ciudades y el tren convencional entre territorios, en detrimento del coche y de los vuelos

Sabemos que, si triunfamos, **tendremos que gestionar el desastre ecológico capitalista** por mucho tiempo. Pero una vez destruyamos las bases económicas y sociales del capitalismo podremos **avanzar en la construcción de un nuevo sistema socialista**, con un nuevo modo de vida en el que, cubiertas las necesidades materiales, **seremos más ricos en tiempo libre, en relaciones sociales, en calidad de vida, en deporte, ciencia, naturaleza, arte, cultura. Un sistema donde primará el “ser” sobre el “tener”.**





Friedrich Engels en *Dialéctica de la naturaleza* (1883)





Un programa para hacer frente a la emergencia socioeconómica y ambiental y abrir camino al socialismo

La crisis deja al desnudo un capitalismo periférico y dependiente

La crisis de la Covid-19 irrumpió en medio de una onda depresiva mundial que dura desde 2008. En este contexto, la onda recesiva disparada por la pandemia, que se asocia con la crisis energética y un fuerte proceso inflacionario, va a ser profunda y duradera.

Esta crisis global desnuda la naturaleza decadente del capitalismo español: un país imperialista de segunda fila con ínfulas de grandeza, que contrastan con su carácter periférico y subordinado. Un capitalismo económica y tecnológicamente dependiente, sustentado en la pequeña empresa, los bajos salarios, trabajos precarios, un desempleo crónico y un peso desorbitado de sectores como el turismo. Alzándose sobre estas bases, se levanta una trama dominada por multinacionales extranjeras, asociadas con los oligopolios españoles del Ibex 35 (bancos, constructoras, energéticas, telecomunicaciones, turismo...), buena parte de los cuales provienen de las privatizaciones de Felipe González y Aznar.

Ese "modelo productivo" es consecuencia de la opción estratégica del gran capital español, que culminó con la entrada en la UE (entonces CEE) en 1986. Dicha entrada fue la otra cara de la transición política. De la mano de Felipe González, vino acompañada del desmantelamiento de sectores fundamentales de la infraestructura industrial del país (construcción naval, siderurgia, minería, textil, electrónica de consumo, bienes de equipo...).

Las "ayudas europeas" fueron la contrapartida para convertir la economía española en un gran mercado para las exportaciones alemanas y francesas y en un destino turístico. Lo hicieron arrasando costas y ciudades y promoviendo una monstruosa red de carreteras, vías de alta velocidad y una irracional red de aeropuertos (algunos ni siquiera entraron en funcionamiento), en un proceso plagado de corrupción.

Al compás de este proceso, la banca y las constructoras medraron y fueron internacionalizando sus negocios. La entrada posterior en el euro, que significó una descomunal y enmascarada alza de precios, profundizó el sometimiento de la economía española a las grandes potencias europeas, en particular a Alemania, mientras los bancos y grandes empresas del Ibex 35 podían invertir en América Latina con una moneda fuerte, por encima de la fortaleza económica del país.

Reorganización general de la economía, en base a las necesidades sociales y la sostenibilidad ambiental. Nacionalización de las industrias estratégicas bajo control de la clase trabajadora

Los últimos cierres de Alcoa en Galiza y Nissan en Barcelona son la viva muestra de la dependencia exterior de la industria

española y -dicho sea de paso- de la sumisión de los gobiernos a las multinacionales. La automoción es la principal especialización industrial del país y, al mismo tiempo, una de las industrias que necesita con mayor urgencia y profundidad una reorganización general ante la crisis climática. Sin embargo, todas las factorías automovilísticas, sin excepción, pertenecen a multinacionales extranjeras, principalmente francesas y alemanas.

Los capitalistas, gobiernos y políticos a su servicio y medios afines, culparon del encarecimiento de los bienes energéticos –es decir, gas natural, electricidad y derivados del petróleo, como los carburantes-, a la guerra de Ucrania. Por este camino, terminaron culpabilizando de la inflación a la heroica resistencia obrera y popular ucraniana, contra la invasión de Putin e intentaron justificar una rápida “paz y negociación” entre Ucrania y Putin, aunque fuese a costa de amputar al pueblo ucraniano agredido parte de su territorio.

Pero los verdaderos culpables del alto coste de los combustibles, el gas y la electricidad son las grandes multinacionales energéticas. ¡Los bienes de primera necesidad no pueden seguir en manos de una minoría oligopólica! Deben estar **bajo control social de la mayoría para poder determinar su uso en función de un plan al servicio de las necesidades sociales y ambientales!**

La nacionalización de las empresas estratégicas (bancos, energéticas, industriales, tecnológicas y comerciales) y su control por parte de la clase trabajadora, comunidades y consumidores/as, es imprescindible para poner en marcha un plan global que reorganice la economía (industria, servicios, agricultura y ganadería) al servicio de las necesidades de la población y la sostenibilidad ambiental. Esto incluye un **plan general de transición energética urgente**, no como las medidas tomadas hasta el momento por los gobiernos españoles, orientadas hacia la galería y supeditadas a los intereses de los oligopolios eléctricos e industriales. Una medida inmediata de este plan es la **nacionalización de la red eléctrica y el establecimiento del monopolio estatal de la producción, distribución y comercialización de la electricidad.**

La crisis de la pandemia mostró que es posible reorientar la producción industrial. Las grandes empresas que amenacen con despidos, cierres o deslocalizaciones, deben ser nacionalizadas y puestas bajo control de los trabajadores y trabajadoras, como parte de un plan de conjunto. **El control de la producción y la administración de las empresas por parte de la clase trabajadora** es un instrumento decisivo para garantizar condiciones salariales dignas y el respeto de los derechos laborales, impedir gestiones fraudulentas, deslocalizaciones y despidos. Son, al mismo tiempo, un medio privilegiado para que los trabajadores y trabajadoras se formen en la administración de las empresas.

Por unos salarios dignos, por su actualización obligatoria y automática según el IPC

Son muchas las reivindicaciones que surgen de una situación marcada por la inflación desbocada y el trabajo precario, pero hay dos que son centrales: salarios dignos y trabajo estable. Desde 1982 el valor real de los salarios españoles ha ido descendiendo de manera continuada, con especial intensidad a partir de 2007-2008. Según estadísticas oficiales, el salario real hoy es 5% más bajo que hace 20 años. En verdad, no solo la disminución real es todavía mayor sino que la diferencia entre los salarios de la clase trabajadora veterana y los de la juventud es un auténtico escándalo, consecuencia de la generalización de la precariedad laboral.

El Estado español es el país de la OCDE donde la clase trabajadora ha perdido más poder adquisitivo. En 2022, la subida salarial pactada por la burocracia sindical era de un 2,6%, cuatro veces menos que la inflación oficial. Además, CCOO y UGT también firmaron un incremento salarial del

8% (con un 1,5% de adiciones posibles) para los trabajadores y trabajadoras de la administración pública ¡hasta 2025!

La bajada de salarios se lleva a cabo de diversas maneras: una es por el proceso inflacionario que devora su poder adquisitivo, muy especialmente entre la clase trabajadora con sueldos más bajos. Otra es la bajada directa que la patronal suele argumentar diciendo que es “necesaria para mantener el empleo”. Eso sin contar con el no pago directo de una parte de la jornada de trabajo, como ocurre con el 49% de las horas extras. Pero el mecanismo de bajada salarial más extendido es por medio de la reforma laboral que Yolanda Díaz presentó en el año 2022, que el gobierno PSOE-UP presentó como un nuevo “paradigma progresista”: la generalización de los contratos a tiempo parcial y de trabajos fijos discontinuos. En realidad, estos últimos se han convertido en los nuevos contratos temporales y 7 de cada 10 contratos indefinidos duran menos de un año.

La lucha por salarios dignos exige imponer por ley, frente a la inflación, la escala móvil de salarios, con revisión automática acorde con el IPC. La clase trabajadora no tiene por qué pagar la inflación a su costa. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en este marco de precariedad está muy lejos de hacer honor a su nombre y ser el mínimo que cualquier trabajador o trabajadora recibe y más lejos aún de cubrir las necesidades más básicas. Hacemos nuestra la exigencia del sindicalismo de clase y combativo de que el SMI sea fijado ya en 1.700 euros brutos/mes (1.350€ netos).

El IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples) que fue introducido por el gobierno de Rodríguez Zapatero como referencia para solicitar las ayudas sociales, tiene que ser derogado y que sea el SMI el criterio para establecer estas ayudas. El IPREM está fijado hoy en 20€/día (600€ mensuales) mientras el SMI actual (noviembre de 2023) en 1.080€ al mes. Los trabajos feminizados precarios con salarios ínfimos, las subcontratas y ETTs y el trabajo de “becarios” y “voluntarios” son procedimientos que encubren la sobreexplotación y el trato discriminatorio. También las dobles escalas salariales, que no afectan únicamente a la

juventud, sino también a miles de trabajadores y trabajadoras que han sido despedidos/as y que, al incorporarse al mercado laboral a edades avanzadas, son discriminados/as por esto. La lucha por un salario digno y contra la desigualdad tiene en la defensa de **A igual trabajo, igual salario**, una bandera de toda la clase obrera. Exigimos medidas efectivas para aplicar este principio, sancionando severamente su incumplimiento y también protocolos de actuación contra la discriminación de género o por orientación sexual.



Combatir el desempleo, reducir la jornada sin reducir el salario

El combate al desempleo provocado por la crisis capitalista así como la reorganización general de la economía, necesaria para la sostenibilidad ambiental, exigen una reducción drástica de la jornada de trabajo y el reparto del empleo existente sin disminuir el salario, en camino hacia la implantación de la escala móvil de las horas de trabajo, es decir, el reparto del trabajo existente entre el conjunto de la mano de obra disponible. En paralelo, necesitamos una socialización cada vez mayor del trabajo doméstico y de cuidados, con el fin de eliminar la doble jornada de trabajo gratuita que recae, fundamentalmente, sobre las mujeres y que se ha visto agravada durante la pandemia.

La medida presentada a bombo y platillos como “histórica” por el Gobierno PSOE-UP, el llamado Ingreso Mínimo Vital, se ha mostrado en apenas unos meses como una nueva medida de escaparate y un nuevo fiasco. Cuando el desempleo tiene naturaleza estructural para millones, lo que necesitamos es un subsidio de desempleo universalizado mientras no se ofrezca una alternativa de trabajo a la persona desempleada.

Derogación de las reformas laborales de 2010, 2012 y 2021

La defensa de un salario digno y un empleo estable exigen **derogar las reformas laborales de Zapatero (2010), Rajoy (2012) y Sánchez-Yolanda Díaz (2021)**, esta última aprobada con el apoyo expreso de la burocracia de CCOO y UGT). Esta derogación es necesaria para: poner freno a la arbitrariedad patronal y garantizar el derecho real a la negociación

colectiva; acabar con la generalización de los contratos a tiempo parcial y fijos discontinuos; prohibir que las subidas del SMI queden absorbidas por complementos salariales; poner fin a esa sangría del empleo que patronal, gobierno y la burocracia de CCOO-UGT acuerdan a cada paso, vía EREs y ERTes. O, como en el caso de los 800.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública en fraude de ley, a través de un ERE encubierto.

Estas reformas laborales son las más destacadas de un aluvión de más de 50 reformas laborales que se vinieron sucediendo desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980 y que son la base del retroceso de la clase obrera en condiciones y derechos. Se hace necesario exigir un **NUEVO ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS** que recupere derechos como, entre otros, que sea el trabajador/a quien decida si readmisión o indemnización cuando el despido es declarado improcedente; la indemnización de 45 días por año trabajado; los salarios de tramitación... ¡Prohibición por ley de los despidos en las empresas con beneficios y readmisión obligatoria de los trabajadores y trabajadoras en caso de DESPIDO IMPROCEDENTE!

Así mismo se hace imprescindible, para garantizar el derecho real a la huelga, el suprimir los servicios mínimos. La huelga es un derecho que solo puede ser regulado por las y los propios huelguistas. En la tradición obrera, los servicios mínimos eran dictados por los propios huelguistas, manteniendo los servicios mínimos imprescindibles para preservar la salud y la vida de las personas.

Regularización de la población inmigrante indocumentada en territorio estatal

A finales de 2019 se estimaba que entre 390.000 y 470.000 personas estaban viviendo en territorio estatal de forma ilegal. El Estado español, con un sesgo racista, niega el

permiso de residencia a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras para justificar su superexplotación. Es urgente su regularización para equiparar sus derechos a los del resto de la clase trabajadora. **¡Cierre inmediato de todos los CIEs y CETIs y derogación de la Ley de Extranjería!**

Sanidad, educación y pensiones públicas

Servicios públicos vitales como la sanidad, la educación y las pensiones son una fuente de negocios para los fondos de inversión, multinacionales, bancos o la Iglesia. Cuando la crisis de 2007-2008, los gobiernos del PSOE y PP -así como el resto de la UE- los recortaron salvajemente, mientras privatizaban o traspasaban grandes sumas de dinero público a las empresas privadas bajo la fórmula de “conciertos público-privados” o “propiedad pública-gestión privada”. Pero la sanidad, como la educación o las pensiones públicas, **son derechos conquistados** que conforman el salario social y el salario diferido.

Hay que seguir luchando por una sanidad y educación integrales y 100% públicas. Ni un euro a la privada. Hay que integrar todos los sectores sanitarios en el sistema público de salud (residencias, salud mental, odontología, oftalmología, laboratorios...etc). **¡Exigimos refuerzo del presupuesto sanitario para hospitales**, con más camas y unidades de terapia intensiva! **¡Refuerzo de la Atención Primaria** y estabilidad, condiciones de trabajo y salarios dignos para el personal sanitario! **¡Derogación de la Ley 15/97! ¡Expropiación de los recursos de la sanidad privada y los servicios socio-sanitarios en manos de la Iglesia**, para su integración en la red pública! **¡Remunicipalización de los servicios sociosanitarios privatizados! ¡Control popular de la Sanidad!**

El derecho a una asistencia sanitaria pública y gratuita ha de ser universal, es por ello que rechazamos cualquier discriminación en la atención sanitaria a las personas

trabajadoras migrantes o refugiadas.

Del mismo modo hay que integrar los centros educativos privados y concertados en una **red de escuelas públicas, laicas, gratuitas y de calidad**. Condición para la recuperación del sector público es el aumento de plantillas en la educación y sanidad, garantizando trabajo estable y los salarios dignos, negados ambos hasta la infamia en estos años y en especial durante la pandemia. **¡Fuera la Iglesia católica de la Educación pública!**

Ahora que los gobiernos occidentales nos dicen que la Covid-19 se ha convertido en una enfermedad endémica como la gripe, olvidan que continentes enteros como África siguen azotados por esta y otras pandemias. **¡Exigimos la liberalización sin indemnización de todas las patentes de vacunas y medicamentos. ¡Expropiación de los laboratorios privados** para poner la investigación médica al servicio del combate de todas las enfermedades y de la salud de la población.

Las sucesivas reformas de las pensiones, ampliando los años de cotización, aumentando los años del período de cálculo, alargando la edad de jubilación y estableciendo normas de “sostenibilidad”, han ido mermando las pensiones y ampliando una enorme brecha de desigualdad. El 60% de las pensiones no alcanzan el SMI, a lo que se suma la brecha de género y multitud de pensiones de viudedad que son de miseria.

La importante cantidad de dinero que moviliza la Seguridad Social en pensiones (solo las contributivas representan el 11,8% del PIB) es la base para que bancos, fondos de inversión y aseguradoras hagan de su privatización un objetivo prioritario. En su forma de fondos de pensiones y ahora de entidades de previsión social voluntaria (EPSV), cuentan con el apoyo de la burocracia sindical (en especial, aunque no solo, CCOO y UGT), parte de un negocio compartido con los bancos.

Decimos NO al Pacto de Toledo. Defendemos un **Sistema Público de Pensiones garantizado por los Presupuestos Generales del Estado**, el establecimiento de la **pensión**

mínima en 1.700€ y la revalorización automática de las mismas según el IPC real. Todas estas exigencias son -como reclaman las movilizaciones de las y los pensionistas- la base frente a la rapiña financiera. Estas reivindicaciones exigen la **derogación de las reformas de pensiones** de estos años, volver a la jubilación a los 65 años e ir camino a la **reducción a los 60 años.**

La satisfacción de las necesidades sociales exige un giro radical del sistema fiscal español, un coladero para las grandes empresas y patrimonios y una carga muy pesada para los asalariados así como para los sectores intermedios, que soportan el peso de los impuestos sobre la renta y el de los indirectos como el IVA. Un sistema fiscal justo debe apoyarse en el principio de que quien más tiene más paga, en el castigo ejemplar a los grandes evasores y la sustitución del IVA por impuestos directos sobre la renta y el patrimonio.

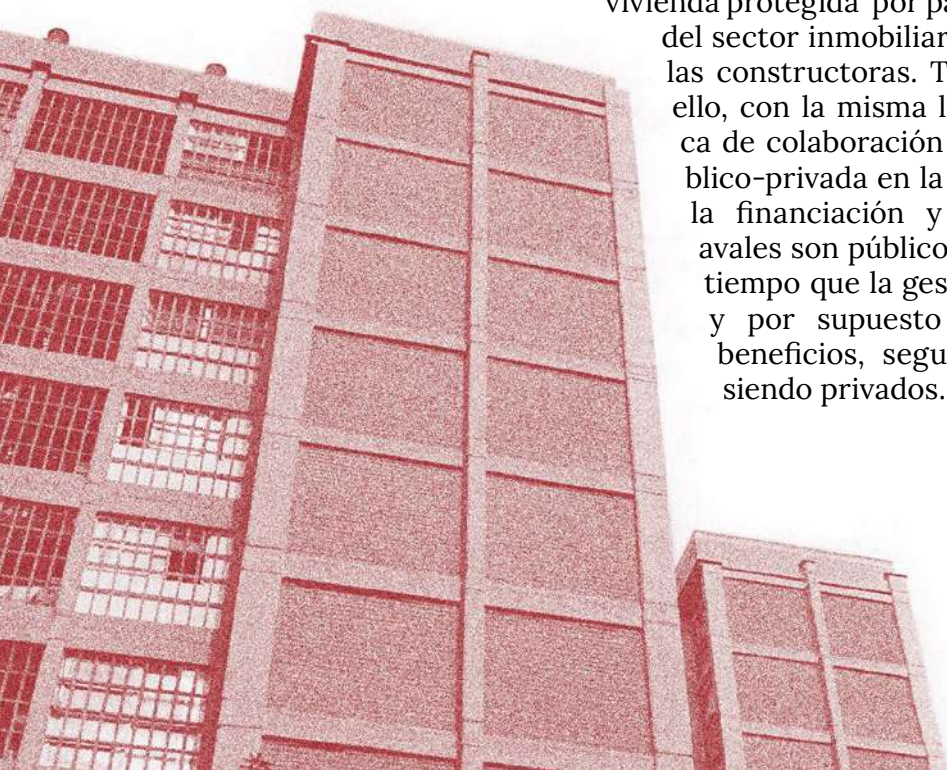
Ningún desahucio sin alternativa habitacional adecuada, por un parque público de viviendas de alquiler social

El boom inmobiliario (1997-2007) convirtió la economía española en un paraíso para los especuladores. La vivienda se ha convertido en una fuente de especulación y riqueza para unos y dependencia para la inmensa mayoría de las familias, que le dedican una parte más que sustancial de sus salarios, mientras condena a millones de jóvenes y familias que han sido desahuciadas, a migrar o a tener que vivir forzosamente en casa de sus familiares. Los desahucios se siguen sucediendo por decenas de miles, mientras el panorama tras el boom incluye alrededor de tres millones de viviendas vacías. Entretanto, los fondos buitres y los bancos, incluida la SAREB (creada con dinero público), se han convertido en las principales inmobiliarias.

Después de tres años de demora por parte del gobierno de coalición, en mayo de 2023 se aprobó la primera Ley de vivienda de la democracia, en el Congreso. Una ley cuya única medida progresiva que va sin trampas, es que acaba con la estafa millonaria que permitía a las inmobiliarias cobrar a los inquilinos por el servicio que dan a los caseros. Pero que es un parche, por cuanto se centra solo en el alquiler y no prohíbe los desahucios, tan sólo los alarga y posee numerosos coladeros por los que las medidas aprobadas podrán incumplirse, incluyendo el control de los precios de alquiler.

Su verdadero objetivo no es atender las necesidades sociales en materia de vivienda sino engañar a los sectores empobrecidos de la clase trabajadora con falsas promesas al tiempo que mantener el apoyo electoral de una base social, de pequeños y medianos propietarios, que han hecho del rentismo una forma de vida. Esta Ley además, forma parte de un plan más amplio, cuyos pilares ya se han puesto en marcha, cuyo propósito es allanar el camino para legitimar un nuevo ciclo constructor de

vivienda protegida por parte del sector inmobiliario y las constructoras. Todo ello, con la misma lógica de colaboración público-privada en la que la financiación y los avales son públicos, al tiempo que la gestión y por supuesto los beneficios, seguirán siendo privados.



Una política social de vivienda exige, en primer lugar, aplicar el **plan de choque** que reclaman los movimientos por una vivienda digna y contra los desahucios: **Prohibición efectiva de todo desahucio** que afecte a personas con bajos ingresos que carezcan de alternativa habitacional; **renovación obligatoria de los contratos de alquiler social** sin que eso suponga que la Administración complemente el pago del alquiler de esas viviendas sociales, al alquiler que ya paga el inquilino por ellas.

El plan de choque que nosotros defendemos para el acceso a la vivienda, estaría además apoyado, al menos, en estos tres ejes:

1) **Confiscación de los pisos vacíos** de bancos y fondos de inversión, que incluya las viviendas de la SAREB.

2) **Devolución de todo el desembolso que supuso el rescate bancario** ya sea en forma de vivienda o en dinero contante y sonante.

3) Una **carga impositiva mucho mayor a todos los que especulan con sus viviendas**, empezando por las grandes sociedades, bancos y fondos de inversión. Se trataría de **conseguir los recursos necesarios para crear con todo ello un parque público de viviendas**, digno de tal nombre.



Expropiar la banca y estatizar el sistema de crédito

La banca española, junto con las grandes constructoras y energéticas, forman las dinastías empresariales de un capitalismo español que hunde sus raíces en el franquismo. A este grupo se sumaron, durante el mandato de Felipe González (PSOE) y Aznar (PP), las grandes empresas nacidas de las grandes privatizaciones (Endesa, Repsol, Telefónica, Iberia...), pronto internacionalizadas, en particular hacia América Latina, con el apoyo de los sucesivos gobiernos.

Durante la crisis del 2008, cuando explotó el boom inmobiliario, los gobiernos de Zapatero y Rajoy rescataron con dinero público los bancos y cajas en quiebra, luego ofrecidos a precio de saldo a la gran banca, que ahora monopoliza el sistema bancario español. El saldo final de aquel rescate supera, oficialmente, los 60.000 millones.

Es imposible que ningún gobierno pueda dar paso alguno en serio para reorganizar la economía sin arrancar las palancas de mando de las garras de la banca. Solo expropiando esta y creando un sistema único de inversión y crédito, controlado por los trabajadores/as y usuarios/as, podremos contar con los medios para una planificación económica al servicio de la población y la sostenibilidad ambiental.

La expropiación de los bancos debe afectar a los grandes accionistas, no a los pequeños ahorradores ni a sus depósitos, que deben ser perfectamente protegidos. No como en la crisis de las preferentes, en la que los pequeños ahorradores fueron saqueados por los bancos, ni como en los desahucios hipotecarios. La banca estatal única debe cancelar los préstamos impagables de la población empobrecida y garantizar créditos baratos y apoyo a los agricultores y comerciantes modestos y a los pequeños empresarios.

La cuestión agraria

Durante años, con mayor o menor intensidad, los y las jornaleras andaluzas han venido denunciando la situación de miseria que viven en el campo. También han sido miles los agricultores y ganaderos que estos años se han echado a la calle para denunciar “los desequilibrios de la cadena agroalimentaria”, es decir, que los precios en origen sean en muchos casos inferiores a los costes de producción, mientras se lucran los intermediarios y las grandes cadenas comerciales.

Al mismo tiempo, la agricultura “industrial” y las “macrogranjas”, ecológicamente insostenibles, devastan los territorios mientras las provincias del interior se vacían. Disminuyen las explotaciones agrícolas y ganaderas, pero aumenta su tamaño, al tiempo que la agricultura y la ganadería se vuelven “industriales” y aparecen las llamadas “empresas integradoras” (vinculadas a fondos de inversión y de capital riesgo).

Es la lógica capitalista de concentración de la riqueza, en la que la cadena agroalimentaria (insumos, producción, distribución, comercialización) va quedando en manos de grandes grupos capitalistas, entre ellos Mercadona, Carrefour, Lidl, Eroski, Ebro o Nestlé...Mientras tanto, la UE y los gobiernos liberalizan el comercio en relación a Mercosur, Marruecos o Sudáfrica. No se puede dar respuesta a la crisis del campo sin arremeter contra los latifundistas, las “empresas integradoras”, las grandes empresas de ganadería industrial, los oligopolios comerciales y la UE que los protege.

Hay que acabar con el escandaloso reparto de las ayudas de la PAC comunitaria, al servicio de la gran propiedad y la gran industria agroalimentaria (la cuantía de las ayudas agrícolas está, por ejemplo, basada en el tamaño de la propiedad y no en los cultivos). Hay que prohibir y castigar severamente la venta a pérdidas que las grandes cadenas de distribución imponen a pequeños y medianos agricultores.

Hay que establecer un organismo público que garantice el monopolio estatal de la distribución, fijando los precios de origen y finales. Dicho organismo debe estar bajo control de la clase trabajadora del campo, pequeños productores y consumidores. Hay que poner en marcha un plan para clausurar las macrogranjas, limitar la agricultura industrial, reorientarla hacia una agricultura sostenible y de proximidad y recuperar el cultivo de tierras fértiles abandonadas.

En el Estado español nunca se realizó una reforma agraria que modificara sustancialmente la estructura de propiedad de la tierra y la pusiera al servicio de los trabajadores de la tierra y de los agricultores y ganaderos modestos. Una de las primeras medidas de esa reforma agraria pendiente debe ser expropiar los grandes latifundios para que pasen a ser explotados colectivamente por la clase trabajadora agrícola, bajo criterios de sostenibilidad ambiental.

No al pago de la deuda

La crisis ha disparado de nuevo la deuda pública. En julio de 2022 era de casi 1,5 billones, más del 117% del PIB, lo que coloca al Estado español entre los países más endeudados de la UE (y del mundo). Actualmente, un tercio de esta deuda está en manos del Banco Central Europeo (BCE) mientras los fondos de inversión, aseguradoras y bancos aguardan su momento para tomar el relevo, conforme suben los tipos de interés.

Dentro de la deuda española con la UE hay todavía pendientes de devolución 28.000 millones del rescate de Rajoy en 2012, con el que la banca española en quiebra pagó a los bancos alemanes y franceses los préstamos que estos les habían hecho, con los que alimentaron la especulación inmobiliaria.

La deuda pública española tiene su origen en la corrupción de sus gobernantes (asociada a obras del AVE, autopistas ruinosas, aeropuertos sin aviones y obras faraónicas); en el rescate de los bancos atrapados por el estallido de la burbuja inmobiliaria; en un sistema fiscal estructuralmente deficitario en el que las grandes empresas y fortunas campan a sus anchas; en los grandes gastos estatales sin justificación social alguna, como los 2.500 millones dedicados en 2023 a la industria armamentística (que en verdad son bastantes más, enmascarados en otras partidas presupuestarias); en las ayudas millonarias a las empresas; en los gastos desorbitados de los altos funcionarios y cargos políticos, entre los cuales el presupuesto de la Casa Real y los privilegios de diputados y senadores, así como caprichos como la organización de la última cumbre de la OTAN, que, según el gobierno costó 50 millones.

En 2011, PSOE y el PP promovieron conjuntamente una reforma exprés del artículo 135 de la “intocable” Constitución, convirtiendo el pago de la deuda pública en la “prioridad absoluta” del Estado. Por supuesto, la deuda pública siempre la acaba pagando el pueblo trabajador, el cual, sin embargo, no ha tenido ninguna responsabilidad en contraerla. El no pago de esa deuda pública es una condición necesaria para romper la cadena de sumisión a la UE y al capital financiero, para financiar un plan de reorganización de la economía al servicio de la clase obrera y el pueblo.





IV

El régimen del 78. Un régimen marcado por la herencia del franquismo

El atraso histórico del Estado español

Aunque el Estado español, como parte de la UE, forma hoy parte del “club” privilegiado de las potencias imperialistas, es, en verdad, un imperialismo de tercera división. Una ubicación que le viene de lejos.

A finales del siglo XIX las grandes potencias coloniales se acabaron de repartir el mundo y el decadente imperio español perdió sus últimas colonias (Cuba, Filipinas y Guam). Antes, ya había llegado tarde a la cita histórica con la revolución industrial y la revolución burguesa, que fue incapaz de concretar. La transformación capitalista española se hizo a lo largo del siglo XIX, con la aristocracia terrateniente al mando del estado.

La Segunda República fue incapaz de resolver los graves problemas que aquejaban a España: no realizó una verdadera reforma agraria, ni acabó con el poder de la Iglesia, ni limpió el ejército de reaccionarios, negó la autodeterminación a las nacionalidades oprimidas y no dio libertad al Marruecos español.

El triunfo de la insurrección militar-fascista que el gran capital español organizó para aplastar el movimiento revolucionario que la Segunda República no lograba someter, dio

paso a una dictadura genocida, sostenida por las potencias triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial, en particular EE. UU. El franquismo, sin embargo, quedó marginado de la división internacional del trabajo que se estableció en la Europa de la posguerra.

Sólo a partir del plan de estabilización de 1959, aprovechando los bajos salarios y la brutal dictadura, EE. UU. y las potencias europeas comenzaron a localizar determinadas industrias en territorio español. En este cuadro, el franquismo, lejos de solucionar los problemas pendientes en la Segunda República, los acabó exacerbando y volvieron a resurgir con fuerza durante su declive.

La Constitución del 78, fruto de un engaño

El «régimen del 78» hace referencia a la Constitución aprobada en ese año, en la que cristalizó el largo proceso de la llamada Transición puesto en marcha a la muerte del dictador. La Transición no fue, de ninguna manera, el proceso idílico que nos han vendido y nos siguen vendiendo los partidos del régimen, en el cual Juan Carlos, el rey designado por Franco, ayudado por Suárez, jefe del Movimiento Nacional franquista, “trajeron la democracia”. Fue, por el contrario, un período de durísimas luchas obreras, estudiantiles y populares, con centenas de muertos y heridos, miles de detenidos, torturados y encarcelados. ¡Lejos de ser modélica y pacífica, fue una transición sangrienta!

A partir de la revolución portuguesa de abril de 1974, el régimen franquista entró en abierta descomposición, provocando una profunda división en sus filas sobre cómo enfren-
tar el ascenso revolucionario que se había abierto en el país y se había vuelto imparable tras la muerte de Franco en 1975. Un sector del franquismo, mayoritario, consciente de que sin hacer algunos cambios sería imposible resguardar sus inte-

reses, se reconvirtió en «demócrata», agrupándolos alrededor de Suárez y la UCD, mientras otro se encastillaba en el búnker franquista.

El proyecto de los franquistas “demócratas”, apoyado por el grueso de la gran burguesía española y avalado por Juan Carlos, era establecer gradualmente y de manera controlada una “democracia” limitada, que preservara lo esencial de los aparatos estatales del franquismo, y que fuera aceptada por la UE (entonces CEE). Había que evitar a toda costa que se desatara una revolución como en Portugal. La “obra de ingeniería” de la Transición se inició a la muerte de Franco, con la aprobación por las Cortes franquistas de una ley de “reforma política”, sometida luego a referéndum sin respetar ninguna condición democrática, con los partidos políticos ilegalizados y sin libertad de expresión.

Si la reforma del franquismo triunfó no fue por los méritos de Juan Carlos y Suárez sino por el papel desempeñado por la dirección del PSOE (Felipe González) y, sobre todo, la del Partido Comunista de España (PCE), entonces la gran fuerza hegemónica en el movimiento obrero, junto a los dirigentes de CC.OO y UGT, bajo su control político.

Carrillo y González, apoyándose en el inmenso prestigio del que gozaban sus partidos, hasta entonces ilegalizados y reprimidos por la dictadura, se volcaron para impedir el derrocamiento revolucionario del régimen franquista en descomposición, que estuvo al alcance de la mano en, al menos, dos ocasiones. Cuando la matanza de Vitoria en marzo de 1976 y tras el asesinato de los abogados laboristas de Atocha en enero de 1977. El pacto histórico entre los franquistas reconvertidos, PSOE y PCE y las direcciones nacionalistas catalana y vasca, se materializó en la Constitución de 1978.

Esta aseguraba la continuidad de los principales aparatos de estado franquistas (ejército, fuerzas policiales y aparato judicial), al tiempo que la Ley de Amnistía garantizaba la impunidad por los crímenes del franquismo. Negaba el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades consagrando la unidad forzada española, ahora bajo formato autonómico. Preservaba íntegramente los intereses de la

oligarquía capitalista, enriquecida a la sombra del franquismo, y mantenía los privilegios de la Iglesia católica. El restablecimiento de la monarquía borbónica y el reconocimiento como rey de Juan Carlos, con inmunidad para robar a manos llenas, formaba parte del “lote” y legitimaba la designación de Franco en 1969⁴.

La constitución fue elaborada de forma que su reforma es prácticamente imposible. Cualquier reforma de sus puntos sustanciales, debe ser aprobada por las 3/5 partes del Congreso y del Senado, tras lo cual se disolverán. Las nuevas cortes deberán ratificar la decisión y estudiar la reforma, que deberá ser aprobada, de nuevo, por las 3/5 partes del Congreso y del Senado, siendo después puesta a referéndum. Los requisitos son menores que en el resto de artículos.

La Constitución se ha reformado en este tiempo dos veces: una para entrar en la UE, con el tratado de Maastricht, y otra para garantizar que el pago de la deuda pública sea prioritario por encima de las necesidades sociales, modificando el artículo 135 a espaldas del pueblo. En la base de ambas reformas hubo unanimidad entre PSOE y PP.

El PSOE, el PCE y las direcciones nacionalistas catalana y vasca, firmaron el pacto de “lealtad constitucional” a cambio de un lugar al sol, al lado de los herederos del franquismo, en unas nuevas instituciones parlamentarias tuteladas, elegidas bajo una ley electoral antidemocrática que aún persiste. Justificaron su apoyo a la Constitución en nombre de que reconocía formalmente derechos democráticos que el pueblo ya había conquistado en la calle, ocultando que se perpetuaban los aparatos franquistas y amnistiaban sus crímenes. Sólo la colaboración de la izquierda oficial y las direcciones nacionalistas, el engaño y la desmovilización de la clase trabajadora, las nacionalidades y el pueblo, permitió la nueva restauración monárquica y su legitimación ante la población.

⁴ En su autobiografía autorizada, cuando fue preguntado por el temor de la familia Franco con lo que pudiera pasarles, Juan Carlos contestó sin vacilar: “¿Miedo? ¿Miedo de qué? Los Franco sabían, porque yo se lo había repetido hasta la saciedad, que mi primera preocupación en cuanto estuviera a la cabeza del estado sería impedir por cualquier medio que se hiciera un memorial de agravios cometidos por el régimen franquista”

No existió ninguna “reconciliación nacional” como preconizaba el PCE. El continuismo de las instituciones franquistas al lado de un parlamentarismo descafeinado, supuso que la clase obrera “olvidase” los crímenes de los represores, mientras estos y su base social, el llamado “franquismo sociológico”, mantenía intacta su conciencia de «vencedores» de la guerra y los privilegios que ello conllevaba.

Los sucesores de los vencedores se sientan hoy en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35 y en la jerarquía militar, mientras ese “franquismo sociológico” da al régimen del 78 esa apariencia de fortaleza social sobre la que mantienen intactos aparatos ideológicos impensables, en estados como Alemania o Italia, donde nunca admitirían la financiación pública de una «fundación Adolf Hitler» o «Benito Mussolini».

Más de 100.000 víctimas de la barbarie franquista continúan enterradas en fosas comunes, mientras militares o gestas fascistas dan nombre a numerosas calles españolas. Los jueces neofranquistas dominan con impunidad el aparato judicial y es común que cada cierto tiempo salgan a la luz la actuación de militares y policías de extrema derecha, mientras instituciones como los servicios de inteligencia campan a sus anchas.

En conclusión, el régimen del 78 es la cristalización de una correlación de fuerzas en un momento histórico concreto, en el que la burguesía, dividida y a la defensiva, y la clase obrera y el pueblo, paralizada por sus dirigentes, dieron lugar a un régimen donde un «bonaparte» (el rey) ejercía de «árbitro» en el enfrentamiento entre las clases sociales y, al mismo tiempo, mediaba en los conflictos entre las diferentes fracciones de la clase dominante. Es el gran instrumento de dominio de la oligarquía del Ibex 35.

La Transición fue parte, asimismo, de un proyecto global del gran capital español que incluía la privatización de las grandes empresas públicas, la entrada en la OTAN y la integración en la UE como capitalismo subordinado a las grandes potencias europeas, con el ojo puesto en el desembarco y pillaje en Latinoamérica.

Lo llaman democracia y no lo es

Bajo la trampa de oponer “dictadura” a “democracia” y “libertad”, las instituciones centrales de la dictadura franquista, esto es la Jefatura del Estado, el Ejército/fuerzas del orden y el Poder Judicial se mantuvieron sin cambios o con pequeños cambios cosméticos, hasta hoy. El régimen actual que en su génesis nunca fue una verdadera democracia burguesa, ha sufrido una deriva bonapartista cada vez mayor por los sucesivos gobiernos de la “democracia”, lo que ha supuesto un ataque a las ya de por sí muy recortadas libertades democráticas

El **derecho a huelga** continúa regulado por una norma pre-democrática de 1977 que permite el uso abusivo de los servicios mínimos que utiliza tanto el poder político como la patronal, como si de un piquete anti-huelga se tratara. Igualmente, la Ley de Partidos es preconstitucional

La **Ley electoral** se apoya en una Ley heredera de la norma preconstitucional en base a la cual se llevaron a cabo las Elecciones del 77. Aunque la Constitución habla de representación proporcional, **ni se ajustan los escaños a los votos, ni se defiende el orden que los votantes otorgan a los partidos**, ocurriendo que una formación con menos votos, logra obtener más escaños. El otro mecanismo de las elecciones es la Ley D'Hont, dirigida a facilitar la supremacía de pocos partidos, que niega la proporcionalidad y deja fuera todos los votos de las opciones que no superen el 3%.

La **Ley de memoria histórica** es un nuevo saludo a la bandera, más allá de la ilegalización de la Fundación Francisco Franco o la retirada de algunos títulos nobiliarios. **No deroga la Ley de amnistía anterior**, que era una Ley de punto final en la que se equipara a víctimas y verdugos y preserva la impunidad para los que durante 40 años de dictadura se beneficiaron de ella. Además, **aún no se ha resuelto el entramado de robo de bebés a madres mayoritariamente pobres**, en el cual la Iglesia católica jugó un papel clave. Se calcula que unos 300.000 bebés fueron sustraídos de sus madres durante el franquismo.



Trabajos de exhumación en la fosa común de la Guerra Civil Española que está localizada en el cementerio de Nerva (Huelva). Según cifras del (Ministerio de Justicia) hay registradas 2.567 fosas comunes en España. Se contabilizan ya 58.000 víctimas. Se calcula que puede haber más de 114.000 desaparecidos. Imagen de Onda Minera. CC BY 4.0 DEED.

También continúa el **Concordato firmado entre el Vaticano y el Estado español en 1979**. Es así como el **85% del patrimonio histórico y los beneficios que generan siguen en manos de la iglesia**, mientras los gastos de restauración y mantenimiento de este patrimonio cultural e histórico usurpado corren a cargo del Estado y gracias a la nueva Ley de educación, **la religión sigue en la escuela pública**. Se sigue financiando públicamente al profesorado de religión -aunque su contratación y destitución es controlada por la Iglesia- y la educación concertada religiosa.

En octubre de 2023 salió a la luz un informe realizado por el defensor del pueblo en el que se desvela que cerca de 400.000 menores han sufrido agresiones por representantes del ámbito eclesástico.

No hay memoria democrática sin reparación a las víctimas, y sin señalar la parte de responsabilidad que corresponde a la institución eclesiástica. **Es imprescindible la separación Iglesia-Estado y que el Estado español se declare como estado laico.** Que se pongan **al servicio del pueblo todos los recursos que la Iglesia posee, desde los servicios sociosanitarios, pasando por la educación, el arte y la cultura.**

La Ley Orgánica 14/2022 que reforma el código penal para eliminar el delito de sedición y modificar el delito de malversación, mantiene el de “rebelión” que tiene una pena máxima de 30 años de prisión. Con esta ley, se redujeron las penas de las y los dirigentes políticos independentistas que terminaron traicionando la lucha por la república catalana, mientras los y las más de 3.000 represaliadas en las 44 causas judiciales abiertas a raíz de la crisis catalana de 2017 quedaron abandonados a su suerte.

Al mismo tiempo, se creó un nuevo tipo de delito de desórdenes públicos agravados en el cual las penas van de los 3 a 5 años de cárcel y de 6 a 8 de inhabilitación, lo que supone la criminalización de luchadores/as y activistas, puesto que cualquier movilización u ocupación del espacio público puede ser considerada como desorden público agravado y, por lo tanto, sancionada. Una nueva ley represiva que se suma a la Ley mordaza que el gobierno de coalición PSOE UP no derogó pese a sus promesas

La judicatura franquista que se ha mantenido en estos años, sigue interfiriendo en la vida política cada vez que los privilegios de una minoría social y este orden injusto se ven amenazados. Un ejemplo es la llamada Operación Catalunya dirigida por el Ministerio del Interior desde el año 2012 para desacreditar al independentismo por medio de una organización integrada por miembros de la Policía, del Gobierno de Mariano Rajoy y del PP que, con ayuda de periodistas y medios de comunicación, urdió un plan contra el movimiento independentista catalán.

El mismo sistema judicial que deja sueltos o rebaja penas a violadores y maltratadores, haciendo un uso torticero de la Ley de Solo Sí es Sí, condena a raperos por dar su opinión o

a aquellos trabajadores y trabajadoras que luchan por defender su pan. Y aplica una vara de medir muy distinta, cuando se trata de juzgar políticos, empresarios, banqueros o miembros de la realeza. También en el aparato militar, el más leve intento de medidas democráticas es aún hoy día, imposible.

Entender este carácter del Régimen tiene mucha importancia para ser conscientes del peso que a día de hoy siguen teniendo las **tareas democráticas en el Estado español** y entender porqué la **lucha por el socialismo en el Estado español, es una combinación inseparable entre reivindicaciones democráticas y anticapitalistas.**







La cuestión nacional

El Estado español, una “cárcel de pueblos”

La opresión nacional es un elemento central en la configuración del Estado español. Tiene profundas raíces históricas y es un elemento clave que utiliza la burguesía para mantener dividida a la clase trabajadora. Esta división es esencial para la continuidad de la Monarquía, el instrumento clave del que se vale la oligarquía española (de la que también forman parte el gran capital catalán, vasco y galego) para perpetuar su dominio.

Luchar por el reconocimiento de los derechos de las nacionalidades oprimidas, significa luchar por su plena soberanía nacional y por su derecho a separarse de España, si esa es su voluntad. Esta reivindicación democrática sigue siendo parte central del programa de la revolución española. Es la base de una unión libre de pueblos libres, es un punto clave para quebrar la Monarquía y es un ariete contra la UE, sobre cuyas ruinas deberemos construir unos Estados Unidos Socialistas de Europa basados en la libre unión de los pueblos europeos.

No hay lucha real contra la Monarquía que no incluya como un punto capital el combate por el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades oprimidas. La unidad de la clase trabajadora sólo será posible en su lucha común contra la opresión española.

La cuestión nacional, el régimen franquista y el fraude de la Transición

El sanguinario terrorismo de estado franquista buscó no sólo destruir todo vestigio de organización obrera, sino también las lenguas propias y toda expresión política y cultural catalana, vasca o gallega. Por eso, el resurgir de la lucha antifranquista puso también en primer plano las reivindicaciones de las nacionalidades, en particular, el derecho a la autodeterminación. Hemos visto cómo los pactos de la Transición traicionaron esta aspiración. Sin embargo, sólo aplazaron los problemas.

Cuando se agotó el movimiento que se había expresado en Euskal Herria durante la Transición, expresado en 14 huelgas generales políticas, el protagonismo pasó, desde principios de los años 80, a los atentados de ETA. Esto aisló al movimiento nacional vasco del resto del estado, facilitó la contraofensiva represiva del régimen y permitió al PNV contener y sacar partido de la situación.

A pesar de esto, el rechazo de la Izquierda Abertzale a los pactos de la Transición supuso durante años, la continuidad de un movimiento masivo a favor de la autodeterminación. Después, en el último período, tras el abandono de las armas por parte de ETA (2011), el progresivo proceso de integración política de la izquierda abertzale en el cuadro del régimen, ha hecho que el movimiento nacional vasco pierda su fuerza y pase a ocupar un lugar secundario.

El resurgir del movimiento independentista catalán

Pero en el mismo momento en que Euskal Herria perdía protagonismo, lo ganaba el movimiento independentista catalán. Hasta 2010 el pujolismo, con el auxilio de la rama

catalana del PSOE y de los herederos del PSUC, había mantenido al movimiento catalanista dentro del redil del régimen monárquico. Esto comenzó a cambiar en julio de 2010, cuando más de un millón de personas salieron a la calle contra la sentencia del Tribunal Constitucional que desmochaba el ya cepillado Estatuto de Autonomía, aprobado en referéndum cuatro años antes.

El movimiento independentista se fue reforzando año tras año hasta llegar al punto álgido del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 y la huelga general del 3 contra la represión. El multitudinario movimiento reflejaba la indignación social de una abrumadora mayoría de las clases medias catalanas, de amplios sectores juveniles que ya se habían expresado en el movimiento del 15-M y de franjas importantes de la clase trabajadora, particularmente fuera de las grandes ciudades.

También se sumó un sector relevante de la mediana burguesía catalana, ajeno a los privilegios del Ibex 35, que se veía perjudicado en el reparto de la carga de la crisis. Este sector, fue el que, a través de la dirección oficial del movimiento independentista, marcó sus límites alrededor de la reivindicación de un “estado propio dentro de la UE”. Esta reivindicación no sólo era utópica y suicida frente al firme alineamiento de la UE con el Estado español. Era también la antítesis de la soberanía nacional catalana pues significaba someter el país a los intereses del capitalismo germano-francés.

La lucha por los derechos nacionales de los pueblos y las lecciones del referéndum catalán

El 1-O catalán reveló la naturaleza del Estado español, basado en la opresión nacional y la unidad forzada: un programa compartido, con variantes, por los herederos del franquismo (PP y Vox) y por el PSOE. No hay que olvidar tampoco el rol

de Unidas Podemos (UP), socio gubernamental del PSOE, que en todos los momentos importantes del proceso se disciplinó al centralismo españolista. El 1-O sirvió también para dejar en evidencia el papel cínico de la UE, convertida en el último baluarte de defensa del estado centralista.

El 1-O mostró que el Estado español no está en absoluto dispuesto a permitir ni a pactar ningún referéndum de autodeterminación. Éste solo podrá llevarse a cabo si el pueblo de Catalunya lo impone de manera unilateral, como hizo el 1-O y como lo tendrá que hacer de nuevo cuando el movimiento retome la lucha, con nuevas fuerzas, dejando de lado las falsas “mesas de diálogo” y las falsas ilusiones en las instituciones de la UE.

El 1-O puso también a la luz del día la incapacidad orgánica de los representantes políticos burgueses y pequeñoburgueses del movimiento independentista catalán, para proclamar y defender la República catalana. En verdad, nunca se creyeron la lucha por la independencia. Como declaró la exconsellera Clara Ponsatí: “estábamos jugando al póker e íbamos de farol”. Se negaron de manera obstinada a organizar la defensa de los centros de votación frente al salvajismo policial; se negaron luego a defender el resultado del referéndum; llamaron a no ofrecer resistencia al 155 y entregaron las instituciones de la Generalitat al gobierno central, sin ninguna clase de oposición.

El 1-O evidenció que la **lucha por el derecho a la autodeterminación de Catalunya es inseparable de la lucha por el fin de la monarquía heredera del franquismo**. Necesitamos de la unidad de toda la clase trabajadora en el Estado español, para lograr ambas reivindicaciones. **No hay lucha contra la monarquía digna de tal nombre que no incluya la lucha por el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos** y viceversa. No hay manera de separar lo uno de lo otro.

La clase trabajadora es la primera y la gran interesada en esta lucha democrática que, al quebrar el régimen monárquico, permitiría romper compuertas y dar paso a un **movimiento social impetuoso** que pusiera en cuestión las bases económicas y políticas sobre las que se asienta el dominio del

gran capital, despejando al mismo tiempo el camino para una salida socialista.

Los y las trabajadoras somos los primeros interesados en **oponernos a cualquier unión forzada**, lo que sólo refuerza al enemigo y provoca división entre nosotros. **Sólo mediante el derecho a la autodeterminación podemos garantizar la fraternidad entre los pueblos y unirnos como clase trabajadora frente al enemigo común.**

Quien tiene interés, un interés vital, en la unión forzada es la oligarquía financiera española y su monarquía. Uno de los pilares de su dominio es la condescendencia que encuentran entre sectores de la clase trabajadora y del pueblo español para su política de unión forzada. Una condescendencia que no es posible entender sin el papel canalla jugado por el PSOE y la burocracia sindical y sin la falsa “equidistancia” de UP.

Luchamos por el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades, por una **República catalana libre**, por unas **Repúblicas vasca y gallegas libres**. Si, en un momento dado, el **pueblo andaluz** quisiera andar este camino, estaría en su pleno derecho. Estas reivindicaciones, no son «separatistas» sino que **son la base para lograr una Unión libre de repúblicas socialistas ibéricas**, así como para luchar por una **Europa socialista de los y las trabajadoras y los pueblos**.

La defensa del derecho de autodeterminación, implica también seguir **exigiendo ¡amnistía total para todos y todas las presas políticas**. ¡Todo nuestro apoyo a las represaliadas, perseguidas, e inhabilitadas, tanto activistas como cargos públicos, en el proceso de lucha que se vivió en el 1-O! Asimismo, **¡depuración de responsabilidades y castigo a las responsables por las brutalidades policiales y político-judiciales que se cometieron!**

La defensa de las lenguas propias, una tarea democrática básica

El catalán ha perdido en 15 años más de medio millón de hablantes. Esto no es casualidad ni es achacable a la inmigración y constituye un rotundo mentís a la derecha y la extrema derecha españolista, que claman contra una supuesta “opresión” del castellano.

En verdad, la opresión sobre el catalán es una constante histórica desde los Decretos de Nueva Planta, los cuáles siguieron a la victoria borbónica del 13 de septiembre de 1714 sobre la resistencia catalana, que prolongó el conflicto después de haberse firmado el 11 de abril de 1713 el Tratado de Utrecht entre las potencias europeas implicadas en la Guerra de Sucesión que había comenzado en 1701, que siguieron a la victoria borbónica en la Guerra de Sucesión de 1714. Los ataques a la lengua catalana fueron continuados bajo los Borbones, siendo la dictadura de Primo de Rivera especialmente represiva.

Con la dictadura de Franco (apoyada por la gran burguesía catalana) la represión del catalán, y de toda lengua oprimida como el euskera y el galego, dio un salto cualitativo, al quedar prohibido en todo lo que no fuera el ámbito estrictamente privado. La reciente orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para imponer el 25% obligatorio de castellano en las escuelas es la continuidad, esperpéntica, de esta política.

Defender las lenguas propias de cada territorio es una parte sustancial de la lucha democrática contra la opresión nacional. Para garantizar la supervivencia de nuestras lenguas y promover el uso de estas, **es imprescindible que se garantice a todo aquel que viva y trabaje en un territorio con lengua propia** (Catalunya, Euskal Herria, Galiza, País Valencià, etc.) **cursos de dicha lengua, completamente gratuitos, a cargo de la empresa o institución**, si se trata de un cargo público, **y en horario laboral**.

ES PROHIBIDO EL USO DEL CATALÁN COMO IDIOMA OFICIAL

Barcelona.—Según Decreto especial firmado por el General Franco y que ha sido publicado el miércoles en esta ciudad ha quedado prohibido el uso del catalán en calidad de segundo idioma oficial de las provincias de Cataluña.

De ahora en adelante se usará el idioma español como único oficial en todas las provincias catalanas.

Todas las autoridades políticas catalanas que gozaban de autonomía dependientes de la Generalidad han quedado disueltas y sustituidas por las autoridades del Gobierno Nacional.

Extracto del Diario de Navarra del 17 de febrero del 1939, de título «Se prohíbe el uso del catalán como idioma oficial».

HABLE BIEN

Sea Patriota - No sea bárbaro

Es de cumplido caballero, que Vd. hable nuestro idioma oficial o sea el castellano. Es ser patriota.

VIVA ESPAÑA Y LA DISCIPLINA Y NUESTRO
IDIOMA CERVANTINO

¡ARRIBA ESPAÑA!

Octavilla. Imprenta Sindical. A Coruña. 1942

Extracto de una octavilla de la Imprenta Sindical de A Coruña impresa en 1942.

El derecho a la autodeterminación en Galiza

Galiza tiene reservado por la fuerza del Estado español y desde hace siglos, el papel de aportar mano de obra -la emigración que hace de ella una sociedad envejecida- y materias primas para el resto del Estado y Europa, sobre la base de los bajos salarios, la precariedad y la emigración forzada. Cualquier análisis serio de la realidad galega tiene que tener en cuenta este marco, de las políticas que desde Bruselas y Madrid tienen respeto de los sectores productivos y la repercusión que tienen sobre el pueblo trabajador gallego.

2. Es la principal productora de la leche, cerca del 40% de la producción española. Pero las políticas europeas que favorecen a los productores de Alemania, Holanda o Francia, junto con la negativa sistemática de la Xunta de fomentar un Grupo Lácteo Cooperativo y Público Gallego, que diversificara la transformación de la leche, resulta en un monocultivo basado exclusivamente en la producción de leche, no en su transformación, que depende en un 75% de empresas multinacionales, y con unos precios más bajos que la media española.

El sector pesquero es un eslabón fundamental del tejido social y económico de Galiza, y uno de los más importantes de Europa. Constituye más del 10% de su PIB, y es uno de los principales generadores de empleo; se puede decir que por cada empleo en el mar hay cuatro en la tierra, entre conserveras, astilleros, transporte o comercio. Los repartos de cuotas que todos los años negocian en la UE, basado en el “principio de estabilidad relativa”, que favorece los estados más poderosos de la UE en el reparto de las cuotas, hace que la pesca gallega viva permanentemente en el filo de la balanza, pues sus intereses son representados por el Estado español, donde el mar supone un eslabón secundario en su economía; mientras que como vimos, en Galiza es una de las columnas vertebrales de la sociedad.

El sector del naval gallego es uno de sus sectores industriales estratégicos; desde la reconversión de los años 80 se

destruyeron entre Vigo y Ferrol, 27 mil empleos, y entre 1998 y 2003, 16 mil. Fue la UE, con la colaboración de los gobiernos españoles, la que permitió este destrozo al servicio de los intereses de los competidores alemanes y holandeses.

Galiza es conocida cómo el “país de los mil ríos”, lo que supone que produce el 10% de toda la energía del estado, que mayoritariamente va a la exportación y está en manos de empresas multinacionales, como la vasca Iberdrola, dueña de los cánones del Sil, la italiana Endesa, o la catalana Naturgy. Ellos deciden sobre el agua, el aire, los embalses y las centrales térmicas gallegas, contaminando ríos y tierras.

En la actualidad, estas mismas multinacionales han dado un salto con los planes eólicos que suponen una expoliación de las tierras al servicio de la instalación de decenas de parques eólicos, hasta convertir a Galiza en el segundo exportador de energía del estado (el 40% de su producción va a la exportación), mientras han cerrado las fábricas de componentes para los molinos (Vestas y Simens Gamesa), que supone la destrucción de miles de puestos de trabajo.

Galiza es de los pocos territorios en el Estado español que no dispone de un tren de cercanías. Esto es expresión de la voluntad de no reconocer a Galiza como nación. Nos negamos a seguir siendo colonia en el Estado español y **exigimos la implantación de una red ferroviaria pública que conecte las diferentes comarcas, villas y ciudades del territorio gallego.**

Esta realidad de imposición de unas condiciones sociales, económicas y laborales concretas se traducen en un **freno sistemático de las posibilidades de crecimiento** de una sociedad, impuestas históricamente por un aparato de estado ajeno y la UE. Por eso, **la lucha por el derecho a la soberanía nacional gallega que rompa con el régimen del 78, es una parte inseparable del programa de la clase obrera y el pueblo trabajador.**

Государственной Думы.



Ассамблея del Съвет de Петроградo en 1917.



Por una Asamblea Constituyente libre y soberana

Las alternancias en el gobierno en el cuadro del régimen monárquico, sólo han servido para perpetuar el actual estado de cosas, que no cambiará mientras no echemos al cubo de la basura este régimen monárquico

La corrupción de la institución monárquica, con su impunidad constitucional, su íntima vinculación con las grandes fortunas, su protagonismo en la brutal represión del movimiento independentista catalán y su papel como pieza angular del régimen, hacen de la reivindicación de la Tercera República, una consigna democrática central. De ahí que exijamos la celebración ya de un referéndum para que el pueblo decida entre monarquía y república.

Pero la batalla por la República es inseparable de la lucha por una Asamblea Constituyente libre y soberana. Una Constituyente, es el máximo de democracia dentro del sistema burgués, ante una crisis del régimen de turno. Por esto los y las revolucionarias, la utilizamos de forma transitoria para estirla al máximo, en la lucha por el poder, y hasta ese punto, la defendemos.

En Chile, la constitución aún vigente, fue redactada al estilo español: pactada con la dictadura, preservaba los intereses de la oligarquía, la sumisión a las multinacionales y la continuidad intacta de los aparatos militar, represivo y judicial pinochetistas. Este pacto dio lugar al llamado “régimen

de la concertación” que unió a estos, al partido socialista y a la democracia cristiana, en gobiernos que se alternaban al servicio de las grandes familias del país y las multinacionales mineras.

Pero todo tiene un límite y en octubre de 2019, el pueblo chileno se alzó en masa al grito de “Chile despertó”, decidido a acabar con el régimen. Obligados a ganar tiempo ante la insurrección popular, los oligarcas y sus partidos se vieron forzados a aceptar la convocatoria de una Constituyente que elaborara una nueva Constitución. Se aseguraron, sin embargo, de limitar los poderes de la Constituyente y de que durante el período en que tuvieran lugar sus sesiones, se mantuvieran los poderes de las instituciones rechazadas por el pueblo.



Protesta en Chile en el marco de la revuelta de octubre de 2019. Se pueden leer varias pancartas con los lemas: “Heredamos la historia pero no el miedo”, “Nos cansamos, nos unimos”, “Si evades 25\$ te llaman delincuente, si evades millones te llaman presidente”.

Finalmente, la Convención Constituyente elaboró una constitución, que no respondía a las necesidades inmediatas ni históricas del pueblo y por eso fue rechazada en referéndum por las masas, desilusionadas y defraudadas además con el nuevo Gobierno burgués de Boric, que apoyaba dicha constitución

Al igual que en Chile, la convocatoria de una Asamblea Constituyente libre y soberana es una exigencia democrática elemental en el Estado español: una Constituyente convocada sobre una ley electoral democrática, es decir, basada en los criterios de una persona, un voto, proporcionalidad directa, iguales derechos de concurrencia y donde los electos puedan ser revocados por sus electores. Una Constituyente que elabore una nueva Constitución poniendo fin a la Monarquía corrupta, a sus aparatos de estado antidemocráticos y al dominio escandaloso que a través de ella ejerce el Ibex 35. Una Constituyente que, a diferencia de la de Chile, sea soberana, es decir, que pueda decidir sobre todo y no haya poder alguno sobre ella.

El problema con que nos encontramos es el enorme engaño colectivo perpetrado por los grandes poderes que, para justificar sus desmanes, inculcan en el pueblo la idea de que vivimos en una “democracia plena”. En este engaño no sólo participan la derecha y la extrema derecha y sus medios de comunicación. Participa también de lleno el PSOE, que es uno de los grandes baluartes del régimen, y con él también UP, su actual socio de gobierno, y las grandes burocracias sindicales.

El 15-M quebró en 2011 por primera vez este engaño colectivo y, con su lema “le llaman democracia y no lo es”, apuntó abiertamente la necesidad de acabar con el régimen del 78. Pero el movimiento acabó neutralizado y reconducido al redil con la ayuda imprescindible de Podemos, hoy parte de la “casta” que entonces denunciaba.

Como ha mostrado Chile y apuntó el propio 15M, la batalla por imponer una Asamblea Constituyente libre y soberana, exige una lucha extraparlamentaria masiva de grandes proporciones, que deberá combatir las trampas

políticas de los partidos del régimen y defenderse de las agresiones policiales y de la extrema derecha. Cabe señalar que de esta constatación, no se desprende una postura abstencionista ante las convocatorias electorales oficiales, pues será necesario -venciendo la antidemocrática legislación electoral- acceder a los foros parlamentarios para denunciar su naturaleza, defender una salida democrática y socialista y poner todo el peso en la lucha extraparlamentaria.

Una Constituyente libre y soberana deberá levantarse sobre el respeto del derecho a la autodeterminación y acometer la depuración de jueces y mandos militares y policiales reaccionarios

La lucha por una Asamblea Constituyente en el Estado español debe garantizar el respeto escrupuloso al derecho de autodeterminación de las nacionalidades. El régimen monárquico está construido sobre la unión forzada de pueblos, perpetuando una opresión histórica que alcanzó extremos criminales bajo el franquismo y que luego quedó enmascarada en la Transición. No hay, por lo demás, otra manera de conseguir una unión voluntaria de repúblicas libres. Karl Marx, hace siglo y medio, ya advirtió a los trabajadores ingleses en relación a Irlanda que “un pueblo que oprime a otro no puede ser libre”.

Asegurar las tareas de una Constituyente libre y soberana también va a exigir inevitablemente, acometer una depuración general de los jueces destacados por su actuaciones antidemocráticas, machistas y corruptas, así como de los mandos fascistoides del ejército, policía y guardia civil, al tiempo que se garantizan plenos derechos democráticos para la tropa. Del mismo modo, cuerpos especiales de represión como los Antidisturbios deberán ser disueltos.







Enfrentar los aparatos de represión del Estado

Los estados actuales no tienen ningún carácter “neutral” sino que tienen como misión asegurar el orden social capitalista. Lo hacen a través de los gobiernos, parlamentos, leyes, tribunales, prisiones o policía y, cuando los procedimientos habituales ya no sirven, utilizan el ejército, que es su último argumento. Detentan el monopolio de la violencia. El régimen monárquico surgido de la Transición es la forma que asume el estado entre nosotros, siendo el gran instrumento de dominio de la oligarquía del Ibex 35.

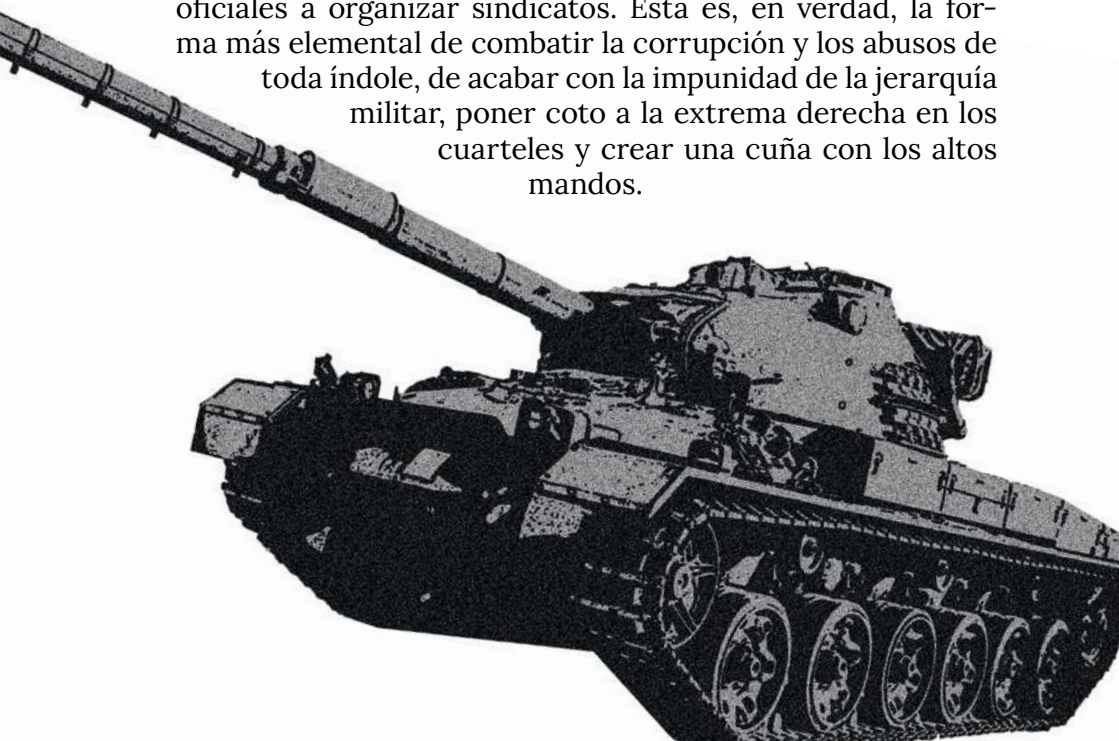
El ejército

Ya desde la Restauración borbónica del siglo XIX, el ejército español fue configurado como un ejército diseñado para la represión interna y para las aventuras coloniales. Su papel contrarrevolucionario en las guerras del Rif y contra los levantamientos obreros y populares, fue esencial a lo largo del siglo XX, culminando en el levantamiento fascista de 1936, la guerra civil y el régimen de terror del franquismo.

La Transición no hizo ninguna depuración militar y preservó enteramente el cuerpo de generales, jefes y oficiales franquistas. Tampoco hubo purga alguna cuando el golpe de estado del 23F.

La sustitución del reclutamiento obligatorio por tropa profesional y la entrada en la OTAN no ha “democratizado” en absoluto al ejército español ni a sus mandos. Cada vez que han surgido choques políticos graves, en particular en relación con las nacionalidades, han emergido generales, coroneles y oficiales que se reclaman del franquismo y que siempre han estado ahí. No es extraño el apoyo de Vox en este sector. El ejército español, líder mundial en cantidad de generales sin tropa, lava sus trapos sucios fuera de la vista del público, valiéndose de tribunales militares propios que eximen a los mandos de someterse a la justicia ordinaria y extienden el clima de impunidad en los cuarteles.

Combatimos por la depuración de la oficialidad franquista. Reclamamos el reconocimiento de las libertades democráticas de expresión, asociación, manifestación y huelga para la tropa. Reivindicamos el derecho de soldados y suboficiales a organizar sindicatos. Esta es, en verdad, la forma más elemental de combatir la corrupción y los abusos de toda índole, de acabar con la impunidad de la jerarquía militar, poner coto a la extrema derecha en los cuarteles y crear una cuña con los altos mandos.



Frente al monopolio de la violencia por parte del Estado con las FFAA y los ejércitos profesionales del mundo, oponemos un **criterio militar democrático**, nacido de la larga historia de las revoluciones democráticas de la humanidad: **la organización del pueblo en armas**, basada en la instrucción militar universal y permanente, donde no puedan existir mandos que no cuenten con el visto bueno de la tropa y en el que se reconozca la **objeción de conciencia**. Acabar con los ejércitos no deja de ser una utopía, porque mientras siga existiendo la burguesía, seguirán existiendo sus ejércitos.

Las fuerzas policiales

La policía y la Guardia Civil tampoco fueron depuradas en absoluto durante la Transición. Se cambió su aspecto exterior y más tarde fueron reforzadas. Corcuera, el ministro del Interior de Felipe González, fue quien (además de aprobar el decreto de la “patada en la puerta” y tener un papel destacado en la organización de los GAL), creó las UIP, las Unidades de Intervención Policial o, lo que es lo mismo, los Antidisturbios de la Policía Nacional, para reprimir las manifestaciones y huelgas. Pronto, la formación de estos cuerpos especiales se extendió a la Guardia Civil, los Mossos y la policía vasca.

Exigimos la **disolución de estos cuerpos especiales de represión: Antidisturbios, ARS de la Guardia Civil, BRIMO y Beltzas**. Reivindicamos la **derogación de la Ley Mordaza**, la **retirada de los piquetes de huelga del código penal** y de toda legislación contra los derechos democráticos. Reclamamos, al igual que lo hacemos con los soldados, **el reconocimiento de las libertades de expresión, asociación, manifestación y huelga** para los miembros de la policía, así como su pleno derecho a **organizar sindicatos**.



...SCISMO Y LA REPRESIÓN
¡NO PASARÁN!
VEGÍN@ DEFIENDE TU BARRIO



VIII

La ultraderecha y el fascismo

Una de las principales expresiones de la larga crisis capitalista, con la decadencia de amplias franjas de las capas medias, la frustración de crecientes sectores de trabajadores y la polarización social resultante, es el auge de la extrema derecha a escala mundial. Si bien tiene características propias en cada país, sus diferentes expresiones se asientan en la xenofobia y el racismo, en un nacionalismo chovinista agresivo, en la reivindicación de un "orden" policial y en la defensa de los valores más reaccionarios contra los derechos de las mujeres y otros sectores oprimidos, como el colectivo LGTBI

No se trata, por ahora, de movimientos directamente fascistas, que se caractericen por los métodos de guerra civil contra las organizaciones obreras y populares con el fin de aniquilarlas y de imponer una dictadura totalitaria arrasando cualquier traza de parlamentarismo burgués. No podemos, sin embargo, subestimar a la extrema derecha, porque el aumento de su influencia, en particular si accede a los gobiernos, se traduce en medidas a favor de los más ricos y contra los derechos sociales, contra las libertades, los trabajadores migrantes, las minorías y, en general, contra la clase trabajadora. Son fuerzas que, si bien se mueven dentro de los regímenes de democracia liberal, tienden a transformarlos en

regímenes bonapartistas, como sucede en Hungría y Polonia o incluso a propiciar cambios de régimen más radicales aún, como vimos con Trump o con Bolsonaro. Los grupos abiertamente fascistas, además, medran a la sombra de esta ultraderecha "institucional".

En el Estado español, donde Vox obtiene más votos, es en los colegios electorales donde existen emplazamientos militares y comandancias de la Guardia Civil. En El Goloso en Madrid (donde se ubica la principal fuerza acorazada del Ejército), obtuvo el 41% de los votos. También en San Gregorio (Zaragoza) se llevó el 25%. En el 85% de los cuarteles, Vox supera el promedio de los votos que obtiene a nivel provincial. En las principales comandancias de la Guardia Civil, Vox pasó del 0,2% de los votos en las elecciones generales del 2016 a un 16,7% en 2019, eso sí, a costa de una estrepitosa caída del PP. Esa dinámica se aprecia también en las elecciones internas de la Policía Nacional de junio de 2019, donde triunfó ampliamente Jupol, el sindicato impulsado por JUSAPOL, la organización que promovió Vox, con apoyo de Ciudadanos y PP, agitando diferencias salariales con los cuerpos policiales autonómicos.



En el auge de la extrema derecha, es importante señalar el nefasto papel de las izquierdas institucionales, que cuando llegan al gobierno, se someten a los designios del Ibex 35 y de la UE, llevando a la clase trabajadora a la frustración y la desmovilización y abandonando a su suerte a las clases medias empobrecidas. Es así como abren la puerta a que la demagogia populista de extrema derecha, con sus discursos y proclamas reaccionarias, pueda calar en sectores populares, sin que haya una fuerza organizada que la enfrente y la contrarreste.

La alternativa a la extrema derecha y al fascismo solo puede construirse desde la calle, apelando a la movilización y organización de la juventud, la clase trabajadora y los y las vecinas de los barrios populares. Defendiendo un **programa social de choque y medidas políticas conducentes a la ruptura con el régimen del 78.** Y, por supuesto, **organizando la autodefensa de las acciones colectivas** tanto frente a la violencia policial como frente a las provocaciones de la extrema derecha y los fascistas. La actuación de los vecinos de Vallecas en abril de 2021 frente a la provocación de Vox, fue un buen ejemplo.







El Estado español, un país imperialista de segunda

El Estado español es parte de la cadena de dominación imperialista, así sea como uno de sus eslabones débiles. En realidad, es un imperialismo de tercera división. La entrada del Estado español en la UE, con el beneplácito de EE.UU., fue estratégica para la gran burguesía española, pues además de aportarle estabilidad económica también legitimaba el régimen monárquico como miembro de un club "democrático". Su subordinación económica y política al capitalismo alemán y francés, con grandes intereses en el Estado español, tenía como contrapartida que estos respetaran los negocios españoles del Ibex 35 y dieran su aval al desembarco de éste en Latinoamérica, donde también ejercía de cabeza de puente del imperialismo europeo.

Las garras del Ibex 35 en América Latina

El pillaje inversor sobre Latinoamérica se vendió como una restauración democrática de la "comunidad iberoamericana" y un reforzamiento de los lazos con la "madre patria". Esta

ideología imperial burda intenta ocultar que, en verdad, no hubo «descubrimiento de un Nuevo Mundo», porque ya había en el continente civilizaciones muy avanzadas, con mucha población, organización social y económica, estados y ciudades. Tampoco se dio ningún «encuentro de culturas», a no ser que dicho encuentro fuera el arrasamiento de la cultura de los conquistadores sobre la de los conquistados.

Fue una invasión con superioridad de armamento que, manipulando conflictos internos, sometió militarmente a estas sociedades y después dio lugar a un enorme genocidio. Fue un saqueo basado en la imposición de relaciones de producción esclavas o semiesclavas que condenaron al atraso a un continente, al mismo tiempo que alimentaban el desarrollo del capitalismo comercial y manufacturero europeo.

América Latina es hoy la zona de expansión privilegiada de las grandes empresas españolas. El propio lugar del capitalismo español en el mundo está asociado a ello. Las multinacionales del Ibex 35 vinculadas a la energía, la banca, las comunicaciones, la construcción y el turismo, extraen una parte sustancial de sus ganancias de sus inversiones latinoamericanas. Participan, al lado de las multinacionales americanas, alemanas o francesas, en primera línea del pillaje del continente.

Existe una clara relación entre el racismo y el imperialismo. El racismo tiene su origen en los periodos de colonización, en los que unos pueblos se establecieron en el mundo como dominantes sobre otros. Durante la expansión colonial de Europa, se racializó a las poblaciones colonizadas, con el propósito de justificar ideológicamente su dominación total. El papel imperialista, que sigue jugando el capitalismo español en América Latina y otros lugares del mundo, está relacionado con la xenofobia y el racismo estructural e institucional que sufren hoy la clase trabajadora migrante de esos países cuando llegan al Estado español.

El Estado español, peón sumiso de la OTAN, brazo armado del imperialismo

La Transición al régimen monárquico incluyó también la entrada española en la OTAN, la alianza militar imperialista dominada por los EE. UU. Esta integración fue obra de un enorme engaño. Cuando Calvo Sotelo (UCD) incorporó el Estado español en la OTAN sin consultar en 1982, el PSOE se manifestó en contra y prometió un referéndum. Una vez llegó al Gobierno, el NO se convirtió en SÍ. Obligado a celebrar el referéndum prometido, el gobierno de Felipe González lo hizo con una pregunta trampa, en la que el “sí” se condicionaba a no participar en la estructura militar de la OTAN, prohibir la instalación de armas nucleares y a reducir la presencia militar de EE. UU.

A pesar de la tremenda campaña propagandística oficial, el “No” consiguió el 40%. Y, por supuesto, las tres condiciones de la pregunta, fueron totalmente incumplidas. Fundada en 1949, la OTAN es la alianza militar que los Estados Unidos impusieron tras la IIª Guerra Mundial para asegurar su hegemonía y hacer frente a la URSS. Tras la desaparición de la URSS, la OTAN, lejos de disolverse, amplió su campo de actuación a territorios como Afganistán y se amplió con los países del Este europeo que habían pertenecido al Pacto de Varsovia.

Actualmente, utilizando la guerra de Rusia contra Ucrania, la OTAN, bajo dirección norteamericana, ha desatado una colosal carrera armamentista y prepara nuevas incorporaciones. En este marco, el gobierno de coalición PSOE-UP decidió elevar el gasto militar oficial (el real es mucho mayor) a la friolera del 2% del PIB español en 2023.

La OTAN es un símbolo del intervencionismo imperialista, como demostró en las guerras de Yugoslavia, Afganistán, Irak o Libia. El Estado español participa como peón disciplinado de EE.UU. en las operaciones internacionales de la OTAN. Más de 2.000 militares y guardias civiles españoles están presentes en 17 misiones en el exterior.

**¡Retirada española de la OTAN! ¡Disolución de la OTAN!
¡Cierre de las bases americanas en territorio español!
¡Vuelta a casa de las tropas españolas! ¡Reducción drástica
del gasto militar! ¡El dinero para los gastos sociales, no
militares!**

¡Alto al negocio armamentista!



La entrada en la OTAN no solo fue una muestra de sumisión estratégica a EE. UU. y un acto de sometimiento a la industria armamentística norteamericana y franco-alemana, fue también la apertura de compuertas a una extraordinaria ampliación del negocio armamentista propio, en el que fabricantes, banqueros y altos mandos militares se lucran con ganancias escandalosas. La industria armamentista española se ha convertido, además, con aval gubernamental, en el séptimo país exportador de armas del mundo.

Entre sus principales clientes están dictaduras sangui-narias que aplastan cualquier resquicio de libertades democráticas. También lo son las petromonarquías, con estrechos vínculos corruptos con la monarquía española. Arabia Saudí, es responsable de los criminales bombardeos en su guerra contra Yemen, en la que utiliza armamento español. Añádase

a la lista Turquía, que reprime y bombardea a la población kurda, y el estado sionista de Israel, con su política genocida hacia la población palestina.

Las burocracias sindicales y la izquierda oficial, en vez de levantar una posición independiente de solidaridad internacionalista y exigir la reconversión civil del sector manteniendo los puestos de trabajo,



aceptan servilmente la política armamentista del capital financiero español y sus gobiernos. Hasta el alcalde de Cádiz, Kichi, apoyó, en nombre del “empleo”, la construcción de una corbeta para Arabia Saudí que iba a ser usada en su guerra contra Yemen (2018).

Los enclaves militares de Ceuta y Melilla, frontera sur de la UE ante la presión migratoria

La UE, como Europa fortaleza imperialista, no respeta los acuerdos humanitarios sobre refugiados que ella y sus estados miembros han firmado, a la vez que dispersa a los y las migrantes en el mar Mediterráneo, condenando a cientos de ellos a morir ahogados. También establece campos en condiciones infrahumanas en Grecia e Italia y subcontrata las tareas más sucias a Turquía y a la mafiosa guardia costera oficial de Libia.

En el reparto de tareas, los enclaves militares de Ceuta y Melilla, cuya hispanidad no tiene otra base que la conquista militar, han llegado a ser fronteras de gran importancia frente a la migración generada en África por la violencia y la pobreza que provoca el dominio imperialista en el continente. La valla mortífera de Ceuta y Melilla y los criminales protocolos

fronterizos deben ser eliminados. **¡Ceuta y Melilla deben ser devueltas a Marruecos!**

Igualmente, exigimos el **fin de la ocupación colonial británica en Gibraltar** convertida en un paraíso fiscal, **el desmantelamiento de la base militar británica y la restitución de todo el territorio de Gibraltar al Estado español.**

El Sahara es de los y las saharauis

Asegurar la “españolidad” de Ceuta y Melilla, precaverse de las maniobras del gobierno marroquí jugando con el acceso de migrantes a la frontera de los enclaves, proteger las importantes inversiones de empresarios españoles en territorio marroquí y complacer a EE. UU., Francia y Alemania, han llevado al gobierno de coalición de Sánchez (con protesta verbal de UP) a traicionar, esta vez de manera abierta y descarada, al pueblo saharauí, legitimando la ocupación marroquí.

Con ello, el gobierno viola sus propias obligaciones como “potencia administradora” y sustituye el prometido referéndum de autodeterminación, por la aceptación de una “autonomía interna” integrada en el régimen marroquí. El Sahara no es de Marruecos, sino de los y las saharauis, que como colectivo nacional tienen todo el **derecho a tener un estado independiente. ¡Autodeterminación para los saharauis! ¡Por un Sahara independiente! ¡Apoyo a la lucha armada del pueblo saharauí por su independencia!**



Hombre sujetando bandera saharaui por Michele Benericetti - Pròind. CC BY 4.0.

Primera manifestación del Orgullo LGBTI del Estado español en 1977, en las Ramblas de Barcelona. En la pancarta se puede leer el lema: "Nosotres no tenemos miedo, nosotres somos."





La respuesta marxista a las opresiones

La crisis económica capitalista, la pandemia, la violencia y las consecuencias de la guerra ruso-ucraniana, golpearon sobre todo a los sectores más oprimidos de nuestra clase. Bajo el capitalismo hay un protagonismo cada vez mayor de la lucha contra las opresiones: contra el machismo, en defensa de las mujeres y el colectivo LGTBI, contra el racismo y la xenofobia, en defensa de los derechos nacionales de los pueblos. Una lucha en la que la juventud es vanguardia en todo el mundo. La interpretación y respuesta marxista a la lucha contra las opresiones, que es parte sustancial de la batalla contra el capitalismo y por la revolución socialista, es más vigente que nunca.

Explotación y opresión en el marxismo

La clase trabajadora, mayoría social, está a la vez explotada y oprimida. El capitalismo es un sistema de opresión y explotación. La explotación es el robo de trabajo ajeno, lo que

en el capitalismo se concreta alrededor de la extracción de plusvalía. Las opresiones son relaciones de desigualdad entre individuos y sectores sociales.

Las opresiones, que son anteriores al capitalismo, están al servicio de mantener la explotación del conjunto de la clase trabajadora, sobreexplotar a sus sectores más oprimidos y mantener a nuestra clase dividida y enfrentada entre sí. La explotación, el corazón del capitalismo, está a su vez condicionado por las relaciones de opresión que el sistema reproduce y de las que se beneficia. Hay una relación dialéctica permanente entre explotación y opresiones, que se combinan formando una totalidad.

El capitalismo excluye una igualdad social real y, en cuanto a los derechos democráticos, mientras exista el capitalismo, serán limitados y estarán amenazados. Las conquistas políticas y avances en derechos democráticos, reflejados en leyes que garanticen la igualdad de derechos y combatan la discriminación, la violencia y los efectos de cualquier ideología que justifique la opresión son esenciales. Es vital luchar por conquistar esos derechos, mantenerlos y ampliarlos. La falta de estos derechos afecta a los diferentes sectores sociales, pero de manera especialmente grave a los sectores más oprimidos de la clase trabajadora.

Al mismo tiempo, igualdad formal, legal, no es lo mismo que igualdad real, efectiva. Por eso, además de la igualdad jurídica, queremos la igualdad real ante la vida. Por otro lado, en este sistema, los derechos democráticos, igual que las reivindicaciones económicas, sólo pueden ser conquistados de forma parcial, incompleta y temporal y mientras exista el capitalismo, estarán siempre amenazados. Es lo que estamos viendo en los EEUU o en países de la UE como Polonia y Malta, con el derecho al aborto. Es también lo que podemos encontrarnos aquí en un tiempo.

Las opresiones son expresión de las relaciones sociales de producción y reproducción de la vida, en un modo de producción social concreto. La clase dominante, las justifica y naturaliza mediante ideologías y leyes. Sin embargo, el marxismo nos ha permitido entender que las opresiones no son

“naturales” sino parte de la historia y que, por tanto, podremos acabar con ellas y con la explotación a la que van inseparablemente asociadas.

Las luchas de les oprimidos son una parte sustancial de la lucha de clases, donde intervenimos activamente impulsando el movimiento con una posición de independencia de clase frente a la burguesía.

La lucha contra las opresiones, inseparable de la lucha por las reivindicaciones económicas y por medidas socialistas, se integra plenamente en la lucha de conjunto

por la toma del poder por la clase trabajadora organizada para iniciar la construcción del socialismo.

Las opresiones atraviesan, con incidencia desigual, las diferentes clases sociales y son un arma de la burguesía para dividir y debilitar al conjunto de la clase trabajadora. No es posible unir a nuestra clase, sin dar una batalla firme contra estas. Quien oprime a otro no puede ser libre. Por eso hay que dar un combate duro y persistente a todas las opresiones, en las organizaciones obreras, estudiantiles y populares, en todas las luchas de nuestra clase.

Batallamos para que las organizaciones obreras y populares hagan suyas las demandas y reivindicaciones de los sectores oprimidos y tengan una política especial para ganarlos. Para los y las marxistas, la lucha contra toda forma de opresión no es solo una cuestión fundamental de programa, sino también un principio básico de nuestra moral revolucionaria.

“Por un mundo en el que seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” -

Rosa Luxemburgo

El marxismo y las diferentes teorías sobre la opresión

Diferentes corrientes e ideologías, mantenemos una disputa en el movimiento sobre cómo surgieron las opresiones, cómo se manifiestan en el sistema actual y cuál es la salida para liberarnos de ellas.

En la lucha contra las opresiones, a la vez que defendemos una política de independencia de clase, estamos por la más amplia unidad de acción para enfrentar a los sectores reaccionarios y de ultraderecha que atacan nuestros derechos. Pero al mismo tiempo, combatimos a la burguesía liberal y a los sectores reformistas, que defienden una estrategia de "unión de todes les oprimides".

Grandes empresas capitalistas utilizan hoy el "discurso de la igualdad" y cooptan líderes, con el objetivo de debilitar y deconstruir la conciencia de clase y dividirnos, mientras la clase capitalista profundiza la explotación y sobreexplotación de la clase trabajadora en su conjunto.

Además de las mujeres, la juventud, las personas inmigrantes o el colectivo LGTBI, existen sectores minoritarios de la clase trabajadora, que sufren una opresión específica por razones culturales y otras. Nos referimos a las personas con diversidad funcional por causas físicas, psíquicas, mentales o sensoriales de distinto tipo. Nos solidarizamos con su lucha y apoyamos sus demandas y reivindicaciones a nivel laboral, sanitario, social, etc, para acabar con las múltiples discriminaciones que aún sufren, pese a las leyes y medidas aprobadas en estos años por los gobiernos.

Las teorías feministas del Patriarcado, afirman que, lo que define el antagonismo central en la sociedad, es la división entre hombres y mujeres y no entre clases sociales. Su principal estrategia política es el "separatismo" de género y la lucha de un sexo contra el otro para acabar con un "sistema de dominación" llamado patriarcado, abogando por una revolución feminista. El término "sororidad" es utilizado para predicar la unidad y hermandad de las mujeres de todas las

clases sociales. Si el machismo divide a la clase trabajadora, los sectores feministas que defienden que el enemigo a combatir son los hombres, actúan para ampliar esta división.

Las teorías de las llamadas políticas de identidad, teoría queer y democracia radical, Argumentan que mujeres, negros, personas LGBTI o de otros sectores deben por sí mismos, cada uno por su lado, definir y combatir su propia opresión. Defienden que el estilo de vida y las relaciones personales son las formas centrales de resistencia política, argumentando que "lo personal es político". El objetivo no es propiamente el fin de la opresión sino crear espacios culturales donde los grupos oprimidos puedan expresarse libremente.

Para los defensores del concepto de "racismo estructural", el problema no está en el "orden social" capitalista, sino en el hecho de que las personas oprimidas por motivos racistas no ocupan "lugares de poder y prestigio" en las instituciones. Su solución es insertarse en el sistema y/o establecer alianzas con instituciones capitalistas, ya sea en forma de "empoderamiento individual", "emprendimiento negro" o asociaciones con sectores privados e instituciones estatales.

Las llamadas feministas socialistas o anticapitalistas, creen que el marxismo no responde plenamente al tema de la opresión y debe complementarse. Sostienen que la definición marxista de que la base del capitalismo reside en la extracción de plusvalía al trabajador es incompleta y que el "trabajo reproductivo" es una categoría fundamental sin la cual, el capitalismo no podría perpetuarse. Aunque cuestionan la teoría del patriarcado como "dualista", rechazan la centralidad de la clase trabajadora como el único sujeto social que, por el lugar que ocupa en la estructura capitalista, puede destruir el sistema, liderando a les oprimides y poniendo fin a las opresiones. Para ellas, la lucha anticapitalista es una suma de luchas y movimientos e insistir en la primacía del proletariado, debilita la solidaridad.

Las organizaciones neoestalinistas que en el pasado defendieron las dictaduras totalitarias del llamado "socialismo real" y argumentaban que luchar por los derechos de los

oprimidos dividía a la clase trabajadora, falsifican hoy la historia omitiendo la brutal opresión que el aparato estalinista, tras la sangrienta contrarrevolución política en la exURSS, ejerció contra mujeres, LGTBI y nacionalidades oprimidas.

En síntesis, si las ideas posmodernas no solo niegan una política de clase, sino también un análisis materialista del mundo y, en verdad, renuncian a cambiarlo, tesis como las del racismo estructural o la del patriarcado como sistema por su parte, rechazan considerar el capitalismo como base material de las opresiones. Todas ellas transmiten la falsa idea de que es posible superar el racismo, el machismo, la LGTBFobia o la xenofobia, bajo el sistema capitalista. Esto las esteriliza para liderar una lucha real y hasta el final, por el fin de todas las opresiones.

Frente a estas teorías, reafirmamos la idea de que **no es posible poner fin a la opresión sin destruir las bases de la explotación**, mediante la **toma del poder por la clase trabajadora y la construcción de una sociedad socialista** en todo el mundo. Y para que ello pueda ser una realidad, es una tarea central hoy la construcción de un partido socialista y revolucionario nacional e internacional.







¡Paso a la mujer trabajadora!

Si la dictadura franquista supuso un retroceso histórico en la situación de las mujeres y en los avances legales conseguidos durante la Segunda República, durante la Transición, sectores de mujeres participaron en primera fila de las movilizaciones antifranquistas, incorporando sus propias demandas y contra la discriminación que sufrían en todos los ámbitos. Los cambios logrados y las conquistas legales arrancadas fueron beneficiosos para las mujeres, pero pronto aprendieron que, en esta sociedad, la igualdad formal ante la ley no significa igualdad en la vida real.

¡Por nuestros derechos laborales!

La incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral a partir de los años 60 fue la base material para lograr su emancipación pero, al igual que en otros países, esta incorporación se hizo en una situación de enorme desigualdad, concibiendo desde un primer momento el salario femenino como un “complemento a la economía familiar”. Si la crisis

del 2007 profundizó la desigualdad laboral femenina”, la Covid-19 agravó la precariedad laboral que las trabajadoras sufrían desde la última crisis. Gran parte de sus empleos se volvieron “esenciales” durante la pandemia pero, lejos de ver mejorar sus condiciones laborales, muchas pasaron a ser las primeras despedidas por la lógica machista del capitalismo.

La explotación laboral se agravó para quienes estuvieron en primera línea contra el coronavirus en la Sanidad o los servicios sociosanitarios, sectores muy feminizados, lo que se tradujo en un número mayor de contagios. Las empleadas por medio de subcontratas, como las trabajadoras de limpieza y otros servicios, quedaron fuera de los planes de vacunación del personal sanitario y no se les reconoció la Covid-19 como enfermedad profesional. También fueron mujeres la mayoría de personas mayores que murieron abandonadas en residencias durante la primera ola.

Pasada la crisis sanitaria, ni en la Sanidad, ni en las residencias o centros de día, gestionados a golpe de precarización laboral femenina, se han hecho refuerzos ni se han adoptado medidas para suspender los conciertos con empresas privadas y pasar los servicios a manos públicas.

La Educación es otro sector con fuerte presencia de mujeres. El cierre de centros en la primera ola supuso para las docentes tener que compaginar empleo y cuidados familiares. La enseñanza a distancia en secundaria se reveló igualmente como un desastre.

En el comercio, el turismo y la hostelería, duramente afectados por ERTes, la crisis económica ha agudizado el mayor paro femenino y elevó al 90% los contratos a tiempo parcial. Actualmente, las mujeres siguen siendo también mayoría en la economía informal o irregular. Solo entre las empleadas de hogar, la esclavitud del siglo XXI, se calcula que un 36% trabaja sin contrato. Todas estas discriminaciones laborales han aumentado la brecha salarial de género, lo que se traduce en unas pensiones de miseria.

Necesitamos políticas públicas para lograr el pleno empleo femenino y de calidad. **¡Reducción de jornada sin reducción salarial! ¡Pensión mínima de 1.700€ brutos!**

**¡Exigimos el cumplimiento de los planes de igualdad!
¡Que los sindicatos y las organizaciones obreras y estudiantiles tomen en sus manos las reivindicaciones femeninas!
¡A igual trabajo, igual salario y pensión!**

La violencia machista sigue sin ser una prioridad pública

Ni las medidas del Pacto de Estado ni ninguna ley podrán acabar con la violencia machista, porque no van a la raíz de las causas materiales que hacen a tantas mujeres vulnerables a ella. La violencia machista, estructural al sistema capitalista, es una lacra social a la que ningún gobierno ha dedicado el presupuesto público necesario. Un ejemplo de ello fue el confinamiento tras la pandemia, que obligó a miles de mujeres y menores a convivir a tiempo completo con su agresor y disparó en todo el mundo la violencia machista.

El gobierno PSOE-UP aprobó medidas que recogen de forma limitada y parcial algunas de las demandas en las calles y de años de lucha. Es el caso de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (Ley del “Solo sí es sí”), que acaba con la distinción que existía entre agresión y abuso sexual, poniendo en el centro el consentimiento a la hora de juzgar el delito.

Pero las continuas rencillas electoralistas entre ambos socios de gobierno, con esta y otras leyes y convirtiendo el feminismo en territorio de disputa institucional, han provocado incomprensión y rechazo ante medidas que, si bien son conquistas parciales, no están sirviendo para cambiar la realidad de les más oprimides porque no van a la raíz de los problemas y por la absoluta falta de recursos con las que se han puesto en marcha.

Exigimos un aumento drástico del presupuesto para prevención, atención y protección contra toda forma de

violencia machista, incluyendo formación especializada para las/os profesionales que atienden a las mujeres y menores víctimas de ésta. **¡Más casas de acogida, vivienda y empleo garantizado para las mujeres maltratadas! ¡Depuración del sistema judicial que victimiza a las mujeres y protege a maltratadores y violadores!**

Pese a la ley actual, los derechos sexuales de las mujeres siguen sin estar garantizados para todas. Como por ejemplo, el aborto en la Sanidad Pública, que no está garantizado a la población migrante. **¡Aborto libre, universal y gratuito en la Sanidad pública! ¡Educación sexual y en igualdad en la escuela pública!**

La prostitución es un negocio que se construye sobre la pobreza femenina y la cultura de la violación. Además, la mayoría de las mujeres en situación de prostitución son migrantes y una gran parte está en situación irregular. Estamos en contra de la legalización pero, sin recursos para las mujeres en situación de prostitución, las medidas prohibicionistas de los gobiernos burgueses resultan inútiles. Las mujeres en situación de prostitución tienen que ser integradas en la amplia lucha del conjunto de la clase trabajadora para exigir vivienda y empleo público, **¡Por la regularización de la población migrante y la derogación de la Ley de Extranjería. ¡Medidas reales y efectivas para perseguir la trata y acabar con la prostitución, que es violencia machista!**

¡No a la doble jornada laboral!

Las tareas domésticas y de cuidados, que aumentan para las mujeres cada vez que hay una nueva crisis económica, se mantienen en el ámbito privado porque así, el Estado y los empresarios/as se ahorran millones de euros. También con

ello logran dividir por la mitad a la clase trabajadora, al hacer recaer estos trabajos fundamentalmente sobre las mujeres.

¡Servicios públicos y de calidad gratuitos que descarguen a las mujeres trabajadoras de las tareas de cuidados de personas mayores, menores o dependientes. ¡Lavanderías, guarderías y comedores públicos!







XII

¡Paso a la juventud!

La juventud lleva mucho tiempo perdiendo derechos históricos que fueron conseguidos antaño con mucho esfuerzo por el movimiento obrero. Para reconquistarlos, nada mejor que retomar el ejemplo de aquella juventud que se forjó en los años de la lucha contra la dictadura franquista y fue su vanguardia. Nada le debemos al régimen monárquico, que ha demostrado ser una gran estafa.

¡Empleo estable con salarios dignos y derechos políticos!

Gran parte de la juventud trabaja en B, sin derechos o incluso sin garantía de cobrar el salario. Las sucesivas reformas laborales, incluida la protagonizada por el gobierno de coalición PSOE-UP, y la connivencia entre patronal y burocracia sindical de CCOO-UGT, han abierto una profunda brecha en la clase trabajadora, creando una vergonzosa discriminación de los y las más jóvenes.

Por la vía de la doble escala salarial, los falsos autónomos, las subcontrataciones o la utilización de las empresas de trabajo temporal (ETTs), legalizadas por primera vez por un gobierno del PSOE, se tienen sueldos distintos y diferentes condiciones laborales en una misma plantilla. **¡A igual trabajo, igual salario! ¡Fuera la doble escala salarial! ¡Prohibición de las ETTs y las empresas multiservicios! ¡Basta de temporalidad y precariedad!**

Exigimos una formación real y aplicada que no suponga trabajar gratis para obtener el título. Si producimos no es formación ¡es trabajo y debe ser remunerado! El voluntariado no es trabajar gratis disfrazándolo de solidaridad. **¡Fuera el contrato en prácticas y de voluntariado!**



¡Educación 100% pública y de calidad!

La educación no debe ser una mercancía ni un negocio, sino un derecho y un servicio público digno y de calidad. Todas las reformas en secundaria, el Plan Bolonia y el 3+2 en la universidad, tienen el objetivo de expulsar a la clase trabajadora de la educación superior e insertarla en un mercado laboral con precariedad y salarios miserables. **¡Por un mínimo del 7% del PIB en la educación pública! ¡Incorporación de la escuela concertada y privada a la red pública, sin enriquecimiento alguno de la patronal del sector! ¡Plazas públicas suficientes en todos los niveles educativos! ¡Suspensión de la selectividad y las pruebas de acceso!**

La asignatura de religión se sigue financiando con dinero público y la escasa educación sexual que existe, invisibiliza la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género. **¡Exigimos una educación laica, afectivo-sexual, inclusiva y en igualdad en la escuela pública!**

La Iglesia no solo está presente en la asignatura de religión, ni tampoco exclusivamente en las escuelas privadas y/o concertadas. Muchas editoriales de los libros de texto, tanto de escuelas públicas como privadas, pertenecen a órdenes religiosas, como por ejemplo SM, Grupo Edebé, Editorial Edelvives o la Editorial Bruño. **Es necesario poner todos los recursos de estas editoriales al servicio de la red de escuelas públicas y acabar con la influencia ideológica de la Iglesia en la educación.**

Necesitamos planes educativos que contemplen la **diversidad étnica y cultural y la integración, la acogida y el refuerzo educativo** de la población migrante para combatir el fracaso escolar.

Las nacionalidades deben tener pleno derecho a establecer planes educativos propios que promuevan su cultura e identidad, aseguren una enseñanza integral en sus lenguas nacionales y la inmersión lingüística. **¡Escuelas, institutos y universidades que respeten, promuevan y eduquen en la lengua propia de cada territorio!**



¡Por un movimiento estudiantil masivo y democrático!

Actualmente, las organizaciones estudiantiles no son organismos unitarios, sino que funcionan como colaterales de fuerzas políticas. Esto no sirve para convocar y organizar la

lucha estudiantil de forma masiva, ni para movilizar al alumnado con menos conciencia de sus problemas cotidianos.

Es imprescindible batallar por una organización estudiantil unitaria en cada territorio y coordinada estatalmente, construida democráticamente desde la base, con una presencia sindical real que surja del trabajo cotidiano en cada instituto y facultad.



¡Por nuestra emancipación y por los derechos políticos para la juventud!

La Ley de Vivienda no resuelve de ninguna manera la grave crisis habitacional que llevamos años sufriendo la juventud. Exigimos un plan de emergencia que dé respuesta real a las necesidades de vivienda y nos permita emanciparnos.

Si podemos trabajar y ser explotados desde los 16 años, también debemos poder contar con nuestros derechos políticos! **¡Derecho a voto a los 16 años!**

¡Libre acceso al ocio, la naturaleza y la cultura!

Exigimos la creación y financiación pública de centros juveniles autogestionados democráticamente.

¡Acceso gratuito a Internet, a museos, teatros y auditorios!

Una juventud en vanguardia de la lucha por una revolución socialista

Nuestra lucha forma parte de la lucha general de la clase trabajadora contra la precariedad, el paro, la emergencia climática, los ataques a los servicios públicos y a las libertades democráticas, por una transformación radical de las bases económicas, ambientales y sociales para ponerlas al servicio de la inmensa mayoría.

Nos negamos a escuchar a quienes nos dicen que debemos conformarnos con el futuro miserable que nos ofrece el capitalismo. Nuestro lugar está en la vanguardia de la lucha por cambiar de raíz el actual estado de cosas, en la vanguardia de la lucha por una salida socialista.







La lucha LGBTI

En los largos y oscuros años del franquismo, el colectivo LGTBI fue perseguido y reprimido, estuvo invisibilizado e intentó sobrevivir como pudo. Cualquier disidencia sexual fuera de la monogamia en el matrimonio católico heterosexual podía ser duramente castigada o tratada como enfermedad mental.

La Transición significó un resurgir del movimiento LGTBI en la lucha por derogar las leyes represivas, como la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, que no se derogó con la Constitución del 78, y con la que juzgaron entre 1970 y 1978 aproximadamente a cinco mil “homosexuales” (con seguridad, entre “ellos” había gente trans). Hasta prácticamente los años 90, las personas LGTBI podían ser detenidas en la calle por “escándalo público”.

Pese a las distintas leyes aprobadas desde entonces, el colectivo sigue siendo objeto de múltiples discriminaciones mientras el avance de la ultraderecha amenaza los derechos conseguidos en los últimos años. Aún hoy, los acosadores tienen impunidad ante una ley que contempla de forma desigual el delito de odio por LGTBIfobia en cada comunidad autónoma. Además, hay miedo a denunciar ante un sistema judicial y policial reciclado del franquismo. **¡Fuera jueces machistas**

y LGTBIfóbicos, del Sistema Judicial! ¡Basta de impunidad a las agresiones hacia el colectivo!

La Ley Trans estatal (Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI), aprobada por el gobierno de coalición, sigue cuestionada por un sector del feminismo. Esta Ley, reconoce el derecho de autodeterminación de género, eliminando el requisito del diagnóstico psiquiátrico y los dos años de hormonación para hacerla efectiva, pero no recoge les menores ni las personas no binarias. Se trata de una victoria parcial que es solo el primer paso para seguir luchando por una vida digna, contra la sobreexplotación, la desigualdad y la discriminación social y laboral que sufren muchos trabajadores del colectivo. **¡Defendemos una Ley Trans estatal dotada de garantías y recursos, que reconozca el derecho de autodeterminación de género, también para menores, no binaries y migrantes.**

El colectivo LGTBI es uno de los más afectados por el paro y la precariedad, sobre todo en el caso de las mujeres transmigrantes que, por la transmisoginia que las hipersexualiza y el racismo que les niega el estatus de trabajadoras regulares, muchas se ven abocadas a la prostitución. No puede haber liberación sexual posible bajo el capitalismo mientras millones de personas en todo el mundo, en especial mujeres y menores, se vean obligadas a vender su cuerpo para sobrevivir. Contra el paro y la discriminación laboral, **¡exigimos que la creación de empleo público incluya un cupo laboral para las personas trans! ¡Por el reparto del trabajo sin reducción salarial!**

La lucha LGTBI no tiene nada que ver con el negocio de la gestación subrogada. Esta asociación se utiliza como propaganda LGTBIfóbica por sectores del estalinismo y el feminismo reaccionario cuando la realidad es que la gestación subrogada tiene como clientes principales a parejas cisheterosexuales (Entre un 80% y un 85% en el caso del Estado español). Estamos en contra de la legalización de este negocio que mercantiliza los cuerpos de mujeres y personas trans.

Actualmente sigue sin haber suficientes recursos sanitarios públicos para atender las necesidades de salud del colectivo y atender sus necesidades específicas **¡Necesitamos mayor inversión social en investigación y en la Sanidad Pública para atender la salud LGBTI!**

También faltan recursos en el sistema educativo público. Mientras este Gobierno sigue financiando directamente, o a través de la Educación concertada, a la Iglesia Católica con su ideología machista y LGTBIfóbica, en ningún momento ha planteado derogar los Acuerdos de la Santa Sede, por los que la Iglesia Católica está presente con la asignatura de Religión en todos los colegios e institutos públicos. **¡Exigimos educación sexual y en valores de igualdad, curricular y obligatoria en la escuela pública y en todas las etapas educativas! ¡Ni un euro a la concertada! ¡Derogación de los Acuerdos con la Santa Sede!**

Las siglas LGBTI representan identidades de género/sexuales muy diversas con opresiones específicas, cuya solución no se halla en el consumo, ni en la liberación individual, sino en la **lucha organizada junto al resto de la clase trabajadora**. Para combatir la opresión LGTBIfóbica, debemos enfrentar este sistema económico, que se apoya y crea a su paso nuevas formas de opresión para poder perpetuarse **¡No a la mercantilización del Orgullo! ¡Por un Orgullo de clase y combativo!**



Manifestación en junio de 2020 en Madrid por la muerte de George Floyd y en contra del racismo policial





¡Contra el racismo y la xenofobia!

En 1985, el gobierno del PSOE de Felipe Gonzalez aprobó la xenófoba Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros (la primera Ley de Extranjería). Esta ley ha sido mantenida por los distintos gobiernos desde entonces, y fuerza a las personas migrantes a sobrevivir durante tres años en la más extrema vulnerabilidad, sin derecho legal a trabajar, para poder conseguir “papeles”.

A esta Ley le siguió la construcción de los primeros Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), que aumentaron y se mantienen hasta ahora, pese a la promesa de Unidas Podemos de cerrarlos si llegaba al gobierno, la reconstrucción de la valla entre Ceuta y Marruecos (1996) o la instalación de concertinas en las vallas (2004).

Todas estas medidas están al servicio de reforzar una Europa fortaleza que explota los recursos de los países de origen de la inmigración, al tiempo que afianzan el rol del Estado español como frontera sur de la UE, cada vez más infranqueable y asesina. Miles de migrantes, incluyendo menores, mueren cada año en diferentes rutas migratorias, huyendo del hambre o de la guerra.

¡Derogación de la Ley de Extranjería! ¡Liberación inmediata de las personas internadas y cierre de los CIEs y CETIs!

Cada año, los y las temporeras que llegan a nuestro país aun teniendo los “papeles en regla,” padecen múltiples abusos laborales, empezando por estar de alta en la Seguridad Social menos días de los que realmente trabajan. Las trabajadoras domésticas, que en su gran mayoría son migrantes, no tienen mejor escenario. En el Estado español hay algo más de 600.000, y cerca del 40% no están dadas de alta en la Seguridad Social y realizan un trabajo socialmente desvalorizado. Gracias a su incansable lucha, en septiembre de 2022 lograron el derecho al desempleo para quienes sí están dadas de alta, aunque aún sufren múltiples discriminaciones laborales.

Esta situación no cambió con la llegada del Gobierno de coalición. La pandemia evidenció la negligencia administrativa del Gobierno PSOE-UP, que no reforzó con personal las comisarías de extranjería que colapsaron, provocando que un trámite sencillo como es renovar la tarjeta de residencia, se paralizase durante meses, con consecuencias en el empleo. Bajo este Gobierno, las olas de contagio de la Covid-19 y el empobrecimiento tras la pandemia se cebaron especialmente con la clase trabajadora y juventud migrante sin papeles.

Además, sufrieron confinamientos en condiciones deplorables y sin garantías sanitarias, y se produjo un crecimiento de los delitos de odio impunes, un incremento de su precarización laboral y el aumento del racismo institucional. En el caso de las trabajadoras de hogar, cerca de 20.000 fueron despedidas, aunque lograron arrancar al Gobierno de coalición un miserable subsidio de desempleo, que dejó a muchas fuera y se gestionó con meses de retraso.





Este gobierno ha invertido casi siete millones de euros en la implantación de sistemas tecnológicos de ‘frontera inteligente’. Es responsable de que hayan seguido las devoluciones en caliente de personas refugiadas y menores de edad y, en definitiva, del trato inhumano y degradante a las personas migrantes y solicitantes de asilo. Y fue igualmente cómplice, junto a las autoridades marroquíes, de la masacre del 24-J del 2022 en la frontera de Nador-Melilla en la que al menos al menos 37 personas fallecieron y el número de desaparecidas sería al menos de 76.

Junto a ello, se ha negado a regularizar a la población migrante, pese a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la campaña de Regularización Ya, presentada por más de 800 organizaciones, que consiguió recaudar más de 700.000 firmas y que fue presentada en el Parlamento el 21 de diciembre de 2022. **¡Regularización extraordinaria de las personas migrantes que viven en territorio español!**

Esta política migratoria contrasta fuertemente con la que han afrontado la crisis humanitaria provocada por la guerra en Ucrania. Celebramos la diligente acogida a las personas refugiadas de Ucrania por parte del Estado español y la política de fronteras abiertas con la que pudieron desplazarse libremente dentro de la UE en los primeros meses de la invasión de Putin. Pero, por desgracia, no es este el trato que la UE y los Gobiernos, incluyendo el español, dan a quienes llegan huyendo de conflictos similares y a quienes se impide ejercer su derecho de asilo.

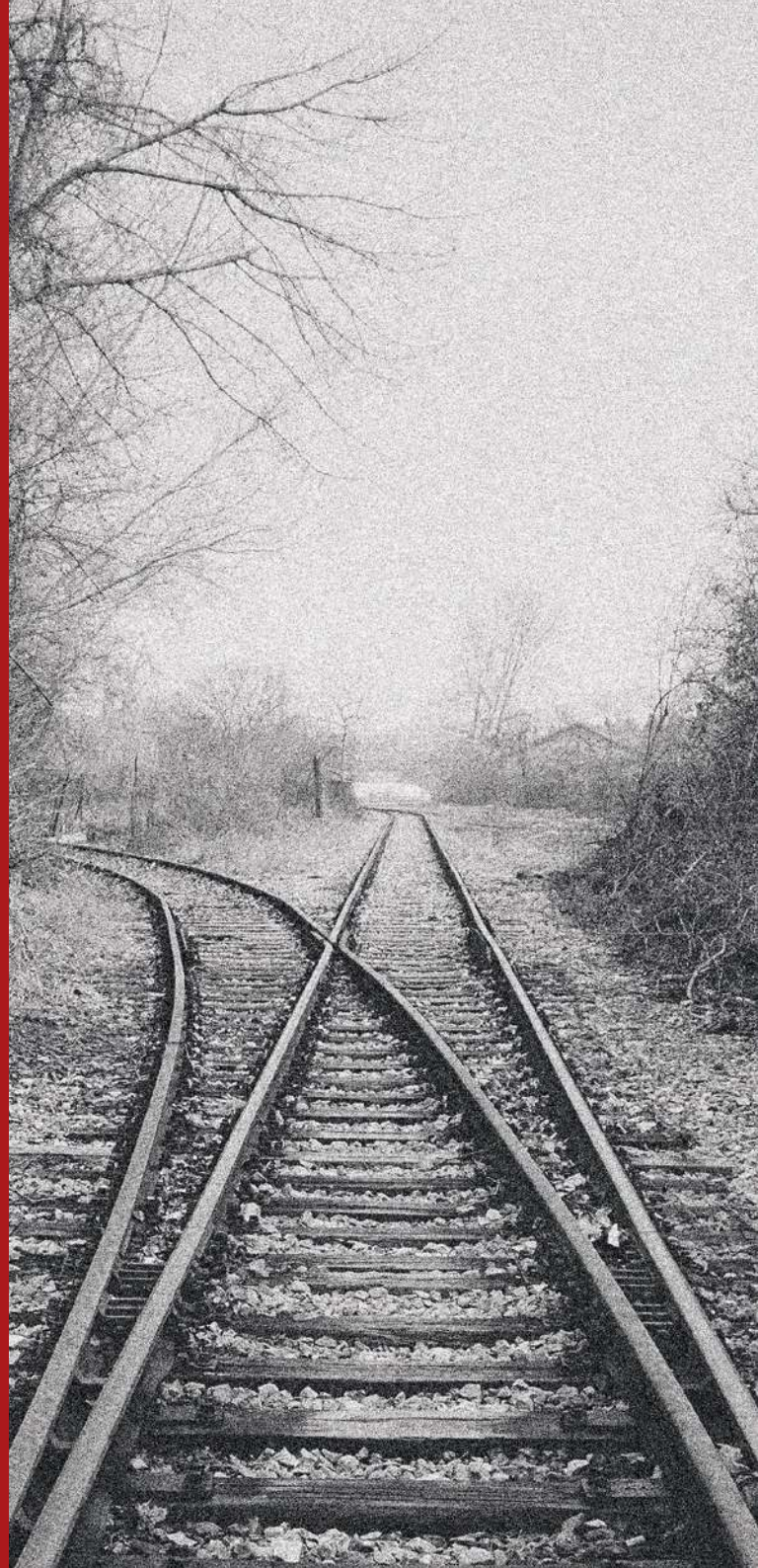
¡Exigimos una acogida digna para todas las personas, sin discriminación de ningún tipo! ¡Atención a las solicitudes y expedientes de asilo y refugio! ¡Derechos sociales y laborales para la infancia y la juventud migrante! Denunciamos la hipocresía de la UE que vulnera incluso sus propias leyes.

El racismo y la xenofobia sirven a la clase capitalista y sus gobiernos para conseguir un doble objetivo: por un lado, sobreexplotar a un sector de la clase trabajadora y presionar a la baja los salarios y condiciones laborales generales. Por el otro lado, pretende dividirnos como clase, haciendo que una parte de la clase culpe de la crisis a los y las que más la padecen, y exculpe, de paso, a los verdaderos culpables: la patronal y los gobiernos que favorecen la crisis y atacan y degradan los servicios públicos. **¡Disolución del Frontex! ¡Suspensión de todos los acuerdos y prácticas ilegales de devolución en caliente con Marruecos, Libia y Turquía!**

La clase trabajadora migrante, incluso quienes residen en el Estado español de *forma regular* (sic), tienen el derecho a sufragio pasivo y activo enormemente limitado o directamente negado. **Llamamos a plenos derechos de voto y sufragio pasivo para toda la clase trabajadora del Estado, independientemente de su nacionalidad y situación administrativa o legal.**









XV

La inevitable batalla contra el centrismo y el reformismo

Polemizar con otras corrientes políticas de la izquierda puede parecer un ejercicio sectario a ojos de activistas poco familiarizados con el marxismo, pero desde Marx y Engels, el marxismo revolucionario siempre vivió polemizando con las corrientes reformistas y centristas (llamamos así a las que están en medio de los revolucionarios y los reformistas). Los y las marxistas vivimos peleando para que la clase obrera se identifique a sí misma y construya su conciencia de clase, pero en esa pelea no nos encontramos solos, sino que estamos como en una estación de metro en hora punta. Ahí tenemos en primer lugar a la burguesía, con sus partidos e instituciones, pero también a un gran número de organizaciones que representan a clases y sectores sociales intermedios, todos ellos disputando la conciencia de la clase trabajadora en un sentido opuesto.

Qué era ayer y qué es hoy el “reformismo”

Marx fue quien estableció las bases teóricas, estratégicas y programáticas de la clase obrera. Lo hizo polemizando con otras corrientes del movimiento obrero, algo que el marxismo consideró necesario para construir partidos y una Internacional revolucionaria de vanguardia. El Manifiesto Comunista no es solo un alegato contra la burguesía y en defensa de la independencia de la clase obrera, es también una polémica con Proudhon y con los llamados socialistas utópicos. Más tarde polemizarían con Bakunin, uno de los referentes del anarquismo.

Lenin y sus partidarios construyeron el partido bolchevique y la Tercera Internacional luchando contra el reformismo de la Segunda Internacional, es decir, contra los "socialistas de palabra y chauvinistas de hecho", que traicionaron su compromiso internacionalista y se alinearon con la burguesía imperialista de sus propios países en la carnicería de la Guerra Mundial de 1914. La batalla de Lenin tenía en el centro de la diana al Partido Socialdemócrata alemán (SPD), la organización más poderosa de la Segunda Internacional. Antes de la Guerra Mundial, los reformistas de la Segunda Internacional ya habían renunciado a la vía revolucionaria para alcanzar el socialismo. Defendían, por el contrario, que llegarían a él por medio de un largo camino de reformas pacíficas logradas a través de mayorías parlamentarias y municipales, combinadas con el peso de los sindicatos, las cooperativas, las casas del pueblo o los clubes deportivos obreros. No hacía falta derrocar el régimen capitalista. La principal figura de esta corriente era Bernstein, que definía la socialdemocracia como: “un partido democrático de reformas socialistas que lucha por el progreso social y la conquista de la democracia con la finalidad de impulsar el desarrollo de una sociedad socialista”.

Este reformismo se apoyaba en los sectores más acomodados de la clase obrera, lo que se conoce como "aristocracia obrera", y era sostenido por la burocracia sindical

y los representantes socialdemócratas en las instituciones parlamentarias. Fue tomando fuerza a lo largo de las tres décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial, en las que el capitalismo aún mantenía un curso ascendente, mientras se constituían, al mismo tiempo, los grandes monopolios bancarios e industriales y avanzaba la expansión colonial de las grandes potencias. La fuerza de atracción del reformismo eran las importantes conquistas parciales que la clase obrera había ido arrancando al capitalismo en ese período, que acabó abruptamente con el inicio de la Primera Guerra Mundial.

Más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la socialdemocracia europea ya no reivindicaba el socialismo ni siquiera como un lejano objetivo final y pasó a asumir abiertamente el capitalismo (la "economía social de mercado"). Su bandera entonces pasó a ser el llamado Estado de Bienestar (Welfare State), es decir, la preservación del sistema capitalista con concesiones sociales, que fueron arrancadas a la burguesía por los procesos revolucionarios tras la derrota del nazismo (por ejemplo, la Seguridad Social, las pensiones, la sanidad pública, las prestaciones de desempleo, el derecho a la educación, etc.). Era el "capitalismo democrático", el "camino intermedio entre el comunismo y el laissez-faire". Este reformismo socialdemócrata se sustentó en la excepcionalidad de un período histórico marcado por la reconstrucción de una Europa devastada por la guerra. Un período excepcional que permitió reformas materiales tangibles, aunque fueran logradas en buena medida a costa del expolio de los pueblos de los países coloniales y semicoloniales.

Este cuadro de concesiones fue menguando aceleradamente a partir de la crisis capitalista de los años 70 del siglo pasado. El reformismo fue siempre un aparato para salvar el sistema capitalista y los regímenes burgueses, una maquinaria al servicio de la conciliación de clases y contra la independencia de la clase obrera. Al mismo tiempo, al reivindicarse como defensor de los y las trabajadoras y, sobre todo, mantener una fuerte base de apoyo entre la

clase obrera, era necesario aplicar tácticas que tuvieran en cuenta esa realidad, con el objetivo de desenmascararlo y combatirlo mejor.

Reformistas ayer y hoy directamente partidos burgueses

Los reformistas de ayer ya no son los de hoy. Partidos que continuamos llamando socialdemócratas, como el PSOE, han pasado a ser partidos social-liberales. Ya no podemos definirlos como partidos obrero-burgueses reformistas como hacíamos antes. Ahora son ya directamente partidos burgueses que se alternan con la derecha al frente de gobiernos patronales e imperialistas, ejecutores de planes de austeridad y recortes democráticos. Se entrelazan íntimamente con los bancos, las energéticas, las constructoras y las grandes multinacionales, y están vinculados al aparato diplomático y militar imperialista y a la industria armamentista.

Este proceso de transformación en partidos directamente burgueses sufrió un salto cualitativo con la llamada globalización. Esta significó una deslocalización general de fábricas a Asia, la subcontratación industrial, el deterioro generalizado de salarios y condiciones de trabajo, el subempleo y una fuerte fragmentación de la clase obrera. En el caso español, la globalización vino asociada a la entrada en la Union Europea (UE), que significó el desmantelamiento de sectores industriales enteros (la "reconversión industrial" de Felipe González) y afianzó el predominio del minifundismo industrial.

La globalización, además, vino de la mano de la restauración del capitalismo en la exURSS y el Este de Europa a

manos de las burocracias estalinistas. Las consecuencias socioeconómicas de la restauración desencadenaron un proceso de enormes movilizaciones obreras y populares que golpeó fuertemente al aparato estalinista mundial. Estos hechos fueron tergiversados por el imperialismo para orquestar una campaña gigantesca contra el socialismo, que estuvo en la base de un impetuoso giro a la derecha de los partidos reformistas y, en general, de toda la izquierda.

En el Estado español, hace poco más de 40 años que el PSOE llegó por primera vez al gobierno desde el final de la Guerra Civil. El primer Ejecutivo de Felipe González (1982-1986) promovió una gran remodelación urbanística con planes de reordenación en muchos barrios como el de Vallecas en Madrid, donde decenas de miles de familias pasaron de las chabolas a las viviendas. Así mismo, en 1986 se inició la universalización de la asistencia sanitaria, un hecho que se convirtió en una piedra angular del precario "Estado de bienestar" español.

Estas reformas tardías sirvieron al PSOE para afianzar su ascendencia entre muchos trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, no solo su alcance quedaba muy lejos de las reformas del "Estado de Bienestar" de Europa occidental en la posguerra, sino que, además, éstas iban acompañadas de recortes en los derechos laborales, de la "reconversión industrial" y de la privatización de las empresas públicas, elementos clave que hipotecaban el futuro del país y alimentaban una profunda y creciente desigualdad social. Al mismo tiempo, el Gobierno González ejercía como un pilar central de la monarquía, montaba los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y nos metía en la OTAN a traición.

Desde entonces, no pueden presentar ni una sola reforma social de la que vanagloriarse. Por el contrario, han sido protagonistas, alternándose con el PP, de los peores planes de austeridad, de contrarreformas laborales y de pensiones, o de la privatización de la sanidad. Estos partidos hace mucho que ya no reivindican el socialismo ni siquiera los domingos, y solo palabrean de "democracia", mientras recortan libertades, igual que hace la derecha. Se presentan como

partidos de orden que reclaman el voto popular con el argumento de que son el muro de contención de la extrema derecha. Siguen manteniendo aún un sustento electoral en sectores importantes de la clase trabajadora y cuentan con el apoyo y complicidad de la burocracia sindical, pero ni se apoyan en la clase obrera ni se referencian en ella. Su referencia pasó a ser la gente, la ciudadanía o como últimamente les gusta decir, las “clases medias trabajadoras”.

Los reformistas de hoy: reformistas sin reformas

Entre los que aún podríamos llamar reformistas hoy en día, tenemos a herederos de las rupturas y crisis del estalinismo (PCE), como Unidas Podemos (UP). Estos tampoco reivindican el socialismo y se presentan como los verdaderos socialdemócratas que reclaman la vuelta al Estado de Bienestar traicionado por el PSOE. Su drama es que, en el actual estado de decadencia del capitalismo y del régimen, no pueden asegurar ninguna reforma social digna de tal nombre. En verdad, son reformistas sin reformas, como lo muestra su propia experiencia aquí y, de manera dramática, la de Syriza en Grecia. Este partido, que se había presentado como alternativa socialista al PASOK (el PSOE griego), cuando llegó al gobierno en 2015, en medio de la esperanza popular, traicionó el resultado del referéndum que él mismo había convocado y entregó las riquezas del país y su soberanía a las multinacionales y el gobierno alemán, a costa de la miseria del pueblo.

UP, lejos de ser una alternativa real al PSOE, se convirtió en su auxiliar, cubriéndolo por la izquierda y correspondiéndose de la gestión de gobierno. Quizá lo más sorprendente del caso español es la velocidad supersónica de la evolución de Podemos: su paso de apóstoles de la “Nueva

Política” a rescatadores del régimen y ayudantes del PSOE en tiempo récord. En el camino, liquidaron su partido, convertido ahora en un cada vez más precario aparato electoral. De cacarear sobre democracia y transparencia pasaron al caudillismo extremo. Abandonaron sus promesas y ahora son ya parte de la historia del gobierno de las vallas de Melilla, de la OTAN y de la reforma laboral más aplaudida por la CEOE. Son también, como el PSOE, gentes de orden que alientan el desclasamiento de la clase trabajadora. Para ellos no hay obreros y patronos sino gente, personas, ciudadanos/as. También se asientan, como el PSOE, entre sectores de la aristocracia obrera, la pequeña burguesía y las clases medias pauperizadas.

“Los obreros, que han comprendido la falsedad del reformismo, utilizan las reformas para desarrollar y ampliar su lucha de clase.” - V. I. Lenin

En el prólogo de un reciente libro, Alberto Garzón, exministro de UP, presumía de que Izquierda Unida "encuentra su principal apoyo entre los profesionales socioculturales". El predominio político de la pequeña burguesía y las clases medias ayuda a explicar las características de fenómenos como Podemos-UP. En relación al vertiginoso ascenso inicial que experimentó Podemos, viene como anillo al dedo aquello que escribió Marx sobre las revoluciones europeas de 1848, refiriéndose a estos sectores sociales intermedios que “encuentran sus jefes políticos en los escritores y profesores universitarios. Ilusiones de un pueblo políticamente virgen y fraseología de una casta profesional a mil leguas de las masas trabajadoras parecen conjugarse admirablemente”.

Las organizaciones que se encuentran entre el reformismo y la revolución

Pero no solo tenemos a los partidos burgueses de origen reformista o los "nuevos" partidos reformistas. Existe también un importante sector social y político a la izquierda que mantiene una posición de rechazo al PSOE y a UP, así como a las burocracias sindicales de CCOO-UGT, convertidas en un engranaje del Estado. Este sector es enormemente diverso y heterogéneo, mantiene diferentes grados de radicalización social y política y en él proliferan las "construcciones identitarias", consecuencia de la ausencia de protagonismo social y político del movimiento obrero.

Por un lado, rechaza la izquierda burguesa y reformista integrada en el régimen monárquico y busca una alternativa al sistema capitalista, pero por otro, sucumbe a las ilusiones parlamentaristas y al posibilismo conservador y la inmediatez y, en toda una serie de casos, se organiza en torno a "proyectos alternativos" (cooperativas de consumo, redes de economía alternativa, centros sociales autogestionados...) perfectamente compatibles con el sistema capitalista. En este sentido, al igual que decíamos en relación a los nuevos reformistas, la influencia del predominio político de la pequeña burguesía en este campo tiene enorme importancia.

Hoy, son numerosas las organizaciones y los sectores de vanguardia que se pueden encontrar en ese espacio socio-político que el marxismo tradicionalmente hemos caracterizado como "centrista", es decir, que está entre el reformismo y la revolución. Un espacio que se halla en continuo movimiento y en el que encontramos a quienes evolucionan hacia la izquierda y a los que lo hacen a la derecha. En ese espacio se pueden encuadrar hoy desde organizaciones de las nacionalidades oprimidas que pugnan por la "la independencia y el socialismo", hasta los numerosos colectivos ecologistas, en especial los vinculados al llamado *ecosocialismo*.

Habría que ubicar también aquí a no pocas variantes anarquistas, incluidos aquellos que proponen la utópica fórmula de "cambiar el mundo sin tomar el poder". Tampoco se pueden obviar organizaciones que se reclaman del marxismo revolucionario y oscilan entre los principios y la política revolucionaria y la adaptación a los aparatos reformistas.

Desde el punto de vista de la construcción del partido revolucionario hoy, merece destacarse el numeroso sector de activistas que ha encontrado en el sindicalismo combativo una herramienta desde donde seguir la lucha contra el sistema capitalista. A este sector nos referiremos en el siguiente capítulo. Así mismo, cabe señalar el activismo, en especial el más joven, vinculado a las organizaciones de los colectivos oprimidos.

En este escenario general es muy importante no amalgamar estas organizaciones y sectores con el reformismo y huir de la descalificación política, que sería de un sectarismo imperdonable. Pero, al mismo tiempo, debemos combatir sus flaquezas y sus tendencias oportunistas y evitar mimetizarnos. Porque, mientras prosiga la ausencia de protagonismo social del proletariado y predomine el peso de la democracia burguesa y de la propaganda contra el socialismo, la tendencia general de estos sectores será sucumbir a la izquierda burguesa y/o reformista. De ahí la importancia capital de la propaganda revolucionaria. Debemos prestar la mayor atención al surgimiento y desarrollo de estos grupos e individuos. Seguir sus movimientos, a través de sus declaraciones y documentos y a través de su actuación práctica, en particular cuando evolucionan hacia la izquierda, combinando la batalla ideológica con una política de **frente único para la acción**.

Manifestación de las Marchas de la Dignidad,
mayo de 2017.





XVI

El trabajo en los sindicatos y la lucha por la organización independiente de la clase obrera

El papel actual de la burocracia sindical

El capitalismo monopolista está cada vez menos dispuesto a conciliar con la independencia de los sindicatos. Le reclama a la burocracia reformista y a la aristocracia obrera, que recogen las migajas caídas de su mesa, que se transformen las dos en su policía política a los ojos de la clase obrera”. “La consigna esencial en esta lucha es: completa e incondicional independencia de los sindicatos frente al estado capitalista. Esto significa: luchar para transformar los sindicatos en órganos de las masas explotadas y no en órganos de una aristocracia obrera”.

Estas afirmaciones escritas por León Trotsky 90 años atrás mantienen hoy su plena vigencia. Convertidos por sus dirigentes en garantes de la Paz social, en una maquinaria de división de la clase obrera y subvencionados generosamente por el Estado al que sirven, los sindicatos son sentidos por millones de trabajadores/as como organismos ajenos cuando no como culpables directos de sus penurias.

Es esta burocracia dirigente quien avala y alimenta la división entre la clase trabajadora, apoyándose en los sectores (cada vez más reducidos) con mejores condiciones salariales y laborales, frente a una masa creciente de trabajadores/as precarizados/as: subcontratados/as, mujeres, jóvenes y migrantes. Vía las reformas laborales, los convenios o acuerdos de empresa normalizan de forma vergonzosa las dobles escalas salariales, las subcontrataciones y el uso generalizado de ETTs, abriendo una enorme brecha entre los “fijos de plantilla” o de la “empresa principal” y el resto de trabajadores/as. Su papel resulta decisivo para la desmovilización y la desmoralización de sectores enteros de la clase obrera que ven cómo los sindicatos “más representativos” actúan de guardaflancos de los gobiernos patronales sean estos “progresistas” o “liberales.”

Junto a los viejos y nuevos aparatos políticos, la burocracia sindical es la mayor fuente de generación de una falsa conciencia, supuestamente “pragmática”, “moderna” y “realista”. Si te opones a los EREs o despidos, te tildan de utópico y fuera de la realidad, porque lo “realista” es vender el puesto de trabajo, no defenderlo. Si les señalas los datos y hechos manifiestos que hacen vergonzosa su última Reforma Laboral responderán con un manido: “pues peor sería si no se pactara y la hiciera el PP”. Si les recuerdas su incondicional y sumiso apoyo al “gobierno patronal progresista” apelarán al recurrente: “¿Y qué queréis, que venga la derecha?”

Todo esto genera el desapego creciente de la clase obrera más precarizada, en especial de la juventud, que ve a los sindicatos como aparatos ajenos cuando no cómplices de su precaria existencia. Desgraciadamente, ese rechazo se extiende en muchos casos a cualquier forma de organización sindical y hoy apenas alrededor del 13% de la clase trabajadora asalariada está sindicalizada.

La diáspora sindical y el sindicalismo alternativo

El creciente repudio a la burocracia sindical ni es nuevo ni ha seguido un curso lineal o independiente de las variaciones en la situación política o social, sino que su desprestigio ha ido creciendo en estos años, a la par que las luchas esporádicas que se han dado. Aunque CCOO y UGT conserven la dirección del movimiento obrero en bastiones fundamentales de la clase obrera, su relación con la clase trabajadora es cualitativamente diferente y en algunos sectores hace tiempo que dejaron de ser la dirección (nacionalidades como Galiza y Euskal Herria, sectores como el transporte...).

Miles de trabajadores/as, y en especial sus sectores más combativos, han ido rompiendo con estos aparatos. Sin embargo, la falta de un referente solido de clase ha ido generando una diáspora sindical, que se expresa en la existencia de multitud de sindicatos que van desde los de corte nacionalista (ELA-STV; LAB; CIG...) hasta las innumerables organizaciones sindicales de empresa.

Las opciones sindicales que por su dimensión y desarrollo estaban llamados a ser el referente del sindicalismo alternativo frente a la burocracia (ELA, LAB, CIG, CGT) han desertado de esa tarea. Para los primeros, el legítimo derecho a la autodeterminación nacional (independencia incluida) se ha traducido en una independencia férrea y consciente del resto de la clase obrera, al tiempo que crecía la colaboración con su burguesía nacional.

La CGT por su parte, ha acentuado progresivamente sus rasgos aparatistas y sectarios desarrollándose como una franquicia donde es posible encontrar desde sectores obreros combativos a burócratas reconvertidos que reproducen los viejos hábitos que aprendieron en CCOO o UGT. Su papel en las huelgas de automoción, en especial la lucha de Nissan, dejó patente esta contradicción en la que se mueve la central anarcosindicalista. El acuerdo que cerró aquella lucha fue la enésima demostración de cómo se abandona a su suerte a miles de trabajadores/as de contratas y subcontratas para

acabar negociando “despidos dignos” para los de la empresa matriz.

La CGT, con el resto de la burocracia sindical, vendieron como “una gran victoria” tan triste derrota. Como señalaron entonces los y las camaradas de Corrent Roig: “En nombre de la «unidad» por arriba con los burócratas, CGT ha firmado todos los comunicados de los comités de empresa, no ha organizado la lucha de las subcontratas, no ha trabajado por organizar una gran manifestación central, ni por bloquear la Zona Franca, ni por impulsar una huelga general. Por el contrario, en el comunicado final donde da su apoyo al acuerdo de cierre, la Federación estatal del Metal se muestra «orgullosa de la ejemplar lucha» que se ha llevado desde los comités de empresa de Nissan y de la «unidad de acción» con los jefes de CCOO-UGT-USO”.

Por referirnos tan solo a los últimos años, el papel de CGT en luchas y huelgas como la de los celadores/as del Hospital Puerta de Hierro, en la lucha de los trabajadores/as de la Administración Pública contratados en fraude de ley o de la logística (Amazon) acabó generando rupturas de la propia organización. Una parte nada desdeñable del peso que siguen manteniendo CCOO y UGT hay que imputárselo, sin duda, a la incapacidad o la lamentable política de estos sectores del llamado sindicalismo alternativo.

La lucha por reconstruir los sindicatos de clase y la organización independiente de la clase obrera, gobierne quien gobierne

En 2023 se cumplían 20 años de la fundación del Sindicato de Comisiones de Base, que nació de la tenaz lucha contra la burocracia sindical, desde las bases obreras y del activismo

que durante muchos años formó parte de CCOO o UGT. No nos cabe a los trotskistas de Corriente Roja ningún mérito en su gestación y aparición. Esa virtud lo es enteramente de los y las trabajadoras de Telefónica y, en particular, del grupo de dirigentes que se negaron a traicionar la lucha de sus compañeros/as y la propia historia de los orígenes de las Comisiones Obreras.

El posterior desarrollo de este agrupamiento sindical surgido en medio de la resistencia a los EREs, despidos y desmantelamiento de los derechos obreros fue perfilando lo que hoy es co.bas, haciéndolo crecer en más sectores, empresas y territorios.

A diferencia de los que siguieron apegados al aparato de CCOO o alegando que "hay que seguir en los sindicatos "de masas" para cambiarlos" y tildaban de error sectario y de construir "sindicatos rojos", cualquiera de la rupturas cada vez más extendidas con los grandes aparatos burocráticos, la militancia de Corriente Roja resolvimos incorporarnos a apoyar, desarrollar, extender y construir co.bas.

Pese a su actual desarrollo y dinamismo, co.bas sigue siendo un pequeño agrupamiento sindical de algunos miles entre afiliación y activistas. Pero la diferencia cualitativa de co.bas con respecto al resto del sindicalismo alternativo nace de sus propios principios fundacionales: **“Co.bas no nació para auto-proclamarnos un nuevo sindicato alternativo más a añadir a la dispersión sindical. Co.bas somos un agrupamiento sindical cuyo objetivo es ser un instrumento que motorice el reagrupamiento de la oposición de clase a la burocracia. Entendemos que el proyecto estratégico, la recomposición de la unidad de la clase obrera, la conformación de una Central Unitaria de los Trabajadores regida por el principio de la democracia obrera, es a todas luces inviable si no se comienza por reagrupar a la oposición de clase a la burocracia”.** (Primer Congreso de co.bas).

Ha sido ese mismo criterio estratégico, lejísimos de cualquier autoproclamación sectaria, lo que le ha llevado a mantener una constante búsqueda y concreción de acuerdos unitarios con el sindicalismo alternativo y la unidad de

acción con todas las luchas y organizaciones obreras y/o populares. Es por ello que hemos dado prioridad en nuestro trabajo sindical al apoyo, impulso, construcción y organización de co.bas. Hoy co.bas sigue siendo para nosotros y nosotras la herramienta privilegiada para reconstruir los sindicatos de clase para la lucha y la organización independiente de la clase obrera, gobierne quien gobierne.

La lucha por transformar los sindicatos en órganos de los sectores más explotados y precarizados de la clase obrera

La batalla cotidiana por la independencia de la clase obrera y la construcción de su conciencia como clase exige construir los sindicatos como organismos independientes, sindical y materialmente, de los gobiernos de turno y del Estado mismo.

En estas casi cuatro décadas desde la legalización de los sindicatos la burocracia sindical se fue desarrollando en medio de la conciliación con la patronal, el desmontaje de derechos obreros y formando sindicalmente a sus cuadros y delegados/as en la paz social, en la conciliación de clase y la desmovilización obrera.

Miles de delegados/as y activistas fueron educados en que eso es "sindicalismo". Formados en tomar decisiones a espaldas de la plantilla, cuando no contra su voluntad expresa. Educados en firmar EREs, cierres, despidos, convenios con dobles y triples escalas salariales, en medrar en consejos de administración o de las Cajas de Ahorro... cuando no directamente en la creación, junto a los bancos, de empresas gestoras de fondos de pensiones. La defensa de los intereses de la clase obrera exige construir los sindicatos como orga-

nismos para la lucha y la organización independiente de las y los trabajadores sosteniendo su desarrollo y funcionamiento en la democracia obrera.

La burocracia sindical sostenida desde el Estado no puede ejercer su función social conciliadora sin contar con un "ejército" de funcionarios y delegados/as sindicales que controlan los Comités de Empresa y le garantizan las políticas de paz social y de división de las plantillas. Derechos de toda la clase trabajadora y conseguidos con años de lucha, como la garantía sindical de los delegados/as a no ser despedidos por el ejercicio de su representación o las horas sindicales para realizar su función representativa, son utilizados como un derecho privado y una fuente de privilegios frente a los despidos que ellos mismos firman para sus compañeros/as. Su papel en preservar la burocracia sindical no es menor. No en vano CCOO y UGT mantienen aún oficialmente más de 184.000 delegados/as en los Comités de Empresa y Delegados/as de personal.

Es del repudio a esta actuación en los comités de empresa de donde nacen nuevos activistas que organizan listas alternativas y/o rupturas en las filas de CCOO y UGT de los delegados/as y activistas más combativos y honestos. En la medida en que los elementos de la crisis económica ahonden la desigualdad social y las luchas obreras recuperen protagonismo, la tendencia a la ruptura con estos grandes aparatos se seguirá desarrollando.

Se trata de atraer a los sectores más combativos de la clase obrera a la tarea de reconstruir un sindicalismo que no se discipline a ningún gobierno burgués, que tenga como principio impulsar las asambleas de trabajadores/as, que no adopte decisiones que no estén asumidas por los trabajadores/as en asambleas democráticas y soberanas. Un sindicalismo autofinanciado y no subvencionado, sin ataduras con el Estado y la patronal.

Esa ardua y difícil tarea de reconstruir el sindicalismo de clase y la lucha obrera, la falta de experiencia de miles de nuevos delegados/as sindicales que no conocen más que los largos periodos de paz social, la falta de medios económicos

y materiales que impone la independencia económica y material del Estado presiona en ocasiones a la búsqueda de atajos y soluciones rápidas. Pero sustituir los principios por las maniobras, construir Sindicatos de "servicios", asesorías laborales low cost, buscar subvenciones del Estado o hacer acuerdos con gobiernos o patronales para disponer de liberados sindicales, abocará a repetir la historia como farsa y hacer de los "nuevos" sindicatos caricaturas decadentes y efímeras de los viejos y sobradamente conocidos.

Corriente Roja alentaremos entre la juventud obrera, las mujeres y los sectores oprimidos su incorporación a esta batalla. Se trata de que desde las empresas, los barrios obreros y los pueblos se preste especial atención en que, junto al apoyo a las luchas y necesidades más inmediatas de la clase obrera, se avance en la **organización, afiliación y construcción** de sindicatos obreros alternativos a la burocracia sindical, **como hoy es co.bas**.

El Frente único (FU) y la unidad de acción

Rescatando y aprendiendo de la tradición del marxismo revolucionario, entendemos los sindicatos obreros como organismos de Frente único, es decir, como una forma esencial de unidad de la clase obrera para luchar por sus intereses, en el que conviven trabajadores y trabajadoras con distintos orígenes, creencias religiosas, tendencias políticas o sin ninguna en particular.

El estalinismo, en cambio, más allá de sus propias actuaciones y legado, dejó marcada su impronta en muchas organizaciones que incluso se reclaman antiestalinistas o trotskistas. En no pocas ocasiones trabajan en el interior de los sindicatos obreros como "asesores de los dirigentes" y, cuando son ellos quienes tienen la responsabilidad dirigente,

lo convierten en una colateral de su partido, en su particular "correa de transmisión".

Por su parte, el anarcosindicalismo en nombre de su anti-partidismo, acaba convirtiendo al sindicato en una suerte de partido político no declarado, donde los Estatutos vetan el acceso a los organismos a la afiliación que milite en alguna organización política. Unos y otros, quiebran la esencia de un sindicato obrero democrático como organismo de Frente Único.

Esta lógica es también lo que hace que tanto la burocracia sindical como la mayor parte del llamado sindicalismo alternativo no tenga en el horizonte estratégico, la formación de una Central Unitaria de Trabajadores/as. Este desprecio u oposición a entender el sindicato como un Frente Único se expresa también de forma cotidiana en el papel que se le da a las asambleas obreras, o más exactamente a su falta de convocatoria. Se expresa en los comités de empresa, negando su rol unitario y electo por los trabajadores/as o condenándolos al ostracismo, cuando no son "controlados". Es esa lógica también, la que lleva a extender el divisionismo consciente hasta negar la más elemental unidad de acción en las luchas.

Además del sindicalismo combativo, en las actuales circunstancias cobra gran importancia la construcción de otro tipo de organismos estables de Frente Único, a la hora de enfrentar las agresiones patronales y gubernamentales y para combatir las maniobras de la burocracia de CCOO-UGT. Desde Corriente Roja hemos apoyado y seguiremos apoyando todas las iniciativas que apunten tanto a la unidad de acción como a mantener este tipo de organismos obreros y populares de Frente Único, de los que son ejemplo en estos años experiencias como la Xarxa contra Tancaments; Hay que Pararles los Pies, las Marchas de la Dignidad, el Bloque de Clase o la Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones.

Somos conscientes de que estos organismos, para lograr resultados y avanzar, necesitan tener una política de independencia de clase y empeñarse en ampliar el movimiento por abajo y darle una base democrática. Una de sus tareas

ha de ser organizar la autodefensa de las acciones ante agresiones policiales y ataques de la ultraderecha. Cuanto mayor sea la movilización, mayor será la necesidad de organizar la autodefensa.

Por último, cuando la movilización alcanza una dimensión masiva, como ocurrió durante la lucha antifranquista, las luchas contra la reconversión industrial o más recientemente, en el período que siguió al 15-M, hay que impulsar decididamente la autoorganización democrática del movimiento, más allá de los marcos sindicales, mediante **asambleas democráticas de todo el activismo**, con representantes electos y coordinados entre sí, como ejes de la dirección del movimiento, apoyados por el sindicalismo combativo.

El Partido revolucionario y el trabajo en los sindicatos

El argumento de que los sindicatos obreros deben interesarse únicamente en los problemas económicos sin mezclarse en política alienta la vana ilusión de resolver los problemas de la existencia cotidiana de la clase obrera, limitando la acción sindical a las cuatro paredes de la empresa o pretendiendo resolver las expresiones de la explotación capitalista y las injusticias burguesas apelando sin más a los juzgados, es decir a la justifica que domina y dirige esa misma burguesía.

Así, la presencia de los militantes de un partido revolucionario en la vida del sindicato es cuestionada explícita y estatutariamente por el anarcosindicalismo, pero en forma más velada también lo es en no pocos sectores del sindicalismo alternativo.

En esta época de crisis y decadencia del sistema capitalista, los sindicatos obreros están obligados a tener una política frontalmente anticapitalista. Su papel como

organismos para la lucha y la organización independiente de la clase obrera es fundamental e insustituible. Para la militancia de Corriente Roja el trabajo en los sindicatos obreros, y en especial en los que, como co.bas, asumen la tarea de la reconstrucción del sindicalismo de clase, es una tarea vital de primer orden.

Mantener una actitud pasiva o ultimatista respecto al trabajo en los sindicatos es volver la espalda a la clase obrera, es negar el derecho y la obligación de un partido obrero revolucionario a ganar influencia en su clase, es renunciar a formar a su militancia en aprender a dirigir junto y con la clase obrera.

No se puede obviar sin embargo, que como organismos que agrupan a los y las trabajadoras tal como son y por el peso de su actividad cotidiana "reformista" (la lucha por mejoras en el marco del sistema mismo), el sindicato, aun los más clasistas y combativos, no pueden sustituir la acción y la necesidad de una partido revolucionario.

Un sindicato obrero, aún llegando a ser sólido y grande, carece y carecerá de una base teórica y programática sólida acerca de la naturaleza del Estado y la necesidad de la lucha por el poder para destruir ese estado burgués y llevar a la clase obrera al poder. Esa falta estratégica de una política para la toma del poder es lo que hace insustituible el papel del partido revolucionario de la clase obrera y un programa estratégico para esa revolución que, reiteremos, son tareas que exceden la naturaleza de los sindicatos.

Siguiendo las enseñanzas de la tradición obrera revolucionaria que marcaron los primeros congresos de la Tercera Internacional, Corriente Roja no pretendemos atarnos organizativamente a ningún sindicato ni atar éste a la disciplina de nuestro partido. Participamos dentro de ellos, impulsando su desarrollo y construcción, defendiendo su independencia frente a los gobiernos y su funcionamiento en base a la democracia obrera, al tiempo que nuestro derecho, como el de cualquier afiliado y afiliada, a la influencia ideológica y política, sin perturbar la unidad de la organización.





XVII

Por un gobierno de la clase trabajadora

Hemos hablado de los grandes ejes de un programa de transformación radical que dé respuesta cabal a los ataques a los derechos democráticos y al desastre social, ecológico y sanitario. Hemos señalado, así mismo, la necesidad de desembarazarnos del régimen monárquico, el gran instrumento de dominio de la oligarquía española, para abrir las compuertas a un levantamiento general por las reivindicaciones. Debemos añadir, finalmente, que una rebelión de estas características solo se coronará con el éxito, si acaba estableciendo la dictadura revolucionaria del proletariado, un gobierno de la clase trabajadora por medio del cual podamos cambiar las bases de este sistema social y político que nos aplasta y, con ello, abrir camino a un futuro socialista.

Por supuesto, un gobierno de los y las trabajadoras nada tiene que ver con los distintos gobiernos del PSOE, ni tampoco con gobiernos como el de coalición PSOE-UP. Llamarlos gobiernos de "izquierda" es degradar el significado de las palabras. Al PSOE hace muchos años se le cayeron las letras "O" de obrero y "S" de socialista, y es un pilar del régimen monárquico adherido al Ibex 35. En cuanto a UP, lejos de "asaltar los cielos", ha acabado convertido en pieza auxiliar del PSOE.

Estos gobiernos de "izquierda" juegan el juego de la alternancia con la derecha bajo las reglas del régimen monárquico. Son, parafraseando el Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, "la junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa".

Los gobiernos capitalistas se apoyan en una mezcla de combinaciones parlamentarias y coacción de los aparatos judicial, policial y militar del estado burgués. Un gobierno de la clase trabajadora, en cambio, ha de estar sustentado en los organismos democráticos de masas, levantados por los propios trabajadores y trabajadoras y el pueblo en su lucha. La tarea de un gobierno de la clase trabajadora no es "gestionar" el estado burgués, sino sustituirlo por un estado de nuevo tipo, es decir, por una democracia de los y las de abajo, fundada en representantes elegidos y revocables en todo momento, con salarios similares a los de un trabajador cualificado.

Un gobierno de la clase trabajadora es el que comienza por la generalización del control obrero de la producción o directamente con la expropiación a las grandes compañías energéticas, a los bancos y a los sectores y empresas estratégicas; instaura la planificación democrática de la economía al servicio de las necesidades sociales y del restablecimiento del equilibrio metabólico con la naturaleza, y centraliza el monopolio del comercio exterior.

⁵ En el acto fundacional de Podemos en 2014, Pablo Iglesias, su fundador, dijo: "El cielo no se toma por consenso: se toma por asalto". Este concepto fue usado anteriormente por Karl Marx, en su carta al doctor Ludwig Kugelmann para explicarle la derrota de la Comuna de París de 1871. "De cualquier manera, la insurrección de París, incluso en el caso de ser aplastada por los lobos, los cerdos y los viles perros de la vieja sociedad, constituye la proeza más heroica de nuestro partido desde la época de la insurrección de junio. Que se compare a estos parisien- ses, prestos a **asaltar el cielo**, con los siervos del cielo del sacro Imperio romano germánico-prusiano, con sus mascaradas antediluvianas, que huelen a cuartel, a iglesia, a junkers y, sobre todo, a filisteísmo." - Karl Marx a Ludwig Kugelmann, 12 de abril de 1871.

Es seguro, tal como vimos en Grecia en 2015, que toda ruptura revolucionaria de un país con la UE se vaya a enfrentar desde el inicio al sabotaje más brutal. Por eso será necesario tomar medidas básicas de autodefensa, como el cierre de los mercados financieros o la implantación de una nueva moneda. Igualmente se deberán tomar medidas como el armamento general de la clase obrera y de los sectores aliados, así como la instrucción militar, porque es altamente probable un escenario de guerra civil y/o intervención imperialista.

La Comuna de París, pese a su brevedad, fue el primer ejemplo de un gobierno de la clase obrera. Organizó la vida económica, el abastecimiento y la defensa y, aunque muchas de sus medidas no tuvieron tiempo de desarrollarse, pretendían transformar completamente la sociedad y que el poder estuviese en manos del pueblo y la clase trabajadora.



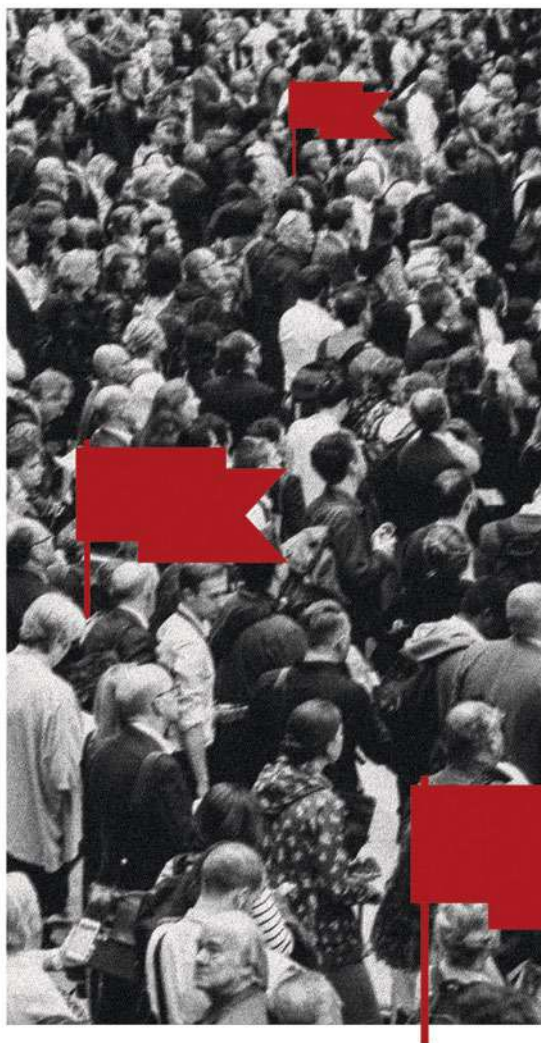
La barricada de la Place Blanche defendida por mujeres durante la Semana Sangrienta. Litografía. Mayo del 1871.

El Gobierno surgido de la revolución rusa de Octubre es el ejemplo más avanzado que ha existido: sacó a Rusia de la guerra, liberó las naciones oprimidas y tomó medidas para acabar con toda forma de discriminación, desigualdad y opresión en la clase trabajadora. Reconstruyó la economía expropiando a las grandes empresas y terratenientes y centralizando el comercio exterior. Y cuando la burguesía y el imperialismo desataron la cruenta guerra civil, los soviets organizaron de la nada el Ejército Rojo, compuesto por obreros y campesinos que defendió victoriosamente la revolución.

Experiencias como la del Comité Central de las Milicias Antifascistas de Catalunya (CCMA) entre julio y septiembre de 1936 son otro ejemplo arraigado en nuestra historia. Fueron los y las trabajadoras las que, después de derrotar el levantamiento fascista, organizaban la vida de los barrios a través de comités populares y constituían milicias con las armas incautadas para liberar las poblaciones en poder del ejército sublevado. Ante el derrumbe del gobierno catalán, el CCMA fue un órgano vivo, que asumió la organización de ejércitos, abastecimiento, transportes, etc.

Por supuesto, la batalla por un gobierno de la clase trabajadora va asociada a la construcción, al calor de la lucha, de una **fuerza revolucionaria arraigada en el movimiento obrero** y popular y entre la juventud, que luche conscientemente por ello.

Finalmente, cabe señalar que la lucha por un gobierno de la clase trabajadora en el Estado español solo puede entenderse como parte de **una lucha que es de toda Europa y también mundial**. Por si no estuviera claro, la experiencia en 2015 de la clase trabajadora y el pueblo griego, contra quienes se encarnizó salvajemente la UE, mostró con toda crudeza que para conseguir una transformación radical de las bases de la sociedad tendremos que enfrentar a la Europa del Capital, defendernos de sus ataques rabiosos y **unirnos con la clase obrera de otros estados para avanzar en la construcción de una Europa unida de los trabajadores/as y los pueblos**.







XVIII

¡No a la Europa del capital! Por los Estados Unidos Socialistas de Europa

El abanico de los partidos del régimen, es decir, la izquierda oficial (PSOE y UP), el PP y la extrema derecha de Vox, son todos ellos, cada uno a su manera, defensores de la Unión Europea (UE). Vox, al igual que el resto de la ultraderecha europea, como Georgia Meloni o Marine Le Pen, lo hace desde su “patriotismo”. Podemos, por su parte, hace tiempo que abandonó sus reticencias hacia la UE para volverse su devoto defensor.

La razón de esta coincidencia de fondo es que el capitalismo español, un imperialismo de segunda fila, necesita integrarse en la UE para -desde una posición de sometimiento al capitalismo alemán y francés- salvaguardar sus intereses dentro del país y en el exterior, en particular en Latinoamérica y el norte de África.

La UE, un conglomerado imperialista europeo dominado por Alemania y Francia

La UE es la culminación de un largo proceso de integración europea surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Este proceso fue inicialmente promovido por los EE. UU. que, convertidos tras la guerra en la potencia imperialista hegemónica mundial, necesitaban reconstruir la devastada economía europea como mercado para sus empresas y hacer frente a la situación revolucionaria que surgió en Francia e Italia al finalizar la guerra.

La absorción de Alemania del Este por la República Federal en 1990 y, más tarde, la implantación del euro, convirtieron a Alemania en la gran potencia europea al frente de la UE (junto con Francia, su aliada y competidora, poseedora de armamento nuclear y vieja potencia colonial en decadencia).

La UE es un conglomerado institucional y económico dominado por Alemania y Francia, en el que se integran imperialismos de segunda fila como el español y países cuyo verdadero estatus es el de semicolonias, como los países del Este o Grecia, tras el brutal "rescate" al que fue sometida. La UE es un instrumento clave para que Alemania y Francia puedan proteger sus intereses a escala mundial y competir para no quedar marginalizados en la pugna entre EE. UU. y China.

La institucionalidad de la UE es una parodia de democracia en la que el parlamento europeo, con los lobbies incrustados y sus escandalosas prebendas, es una institución de adorno que no decide nada relevante. Todas las medidas importantes las toman la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, junto a unos pocos gobiernos, los bancos y las grandes multinacionales. La UE, autopresentada como "baluarte de la democracia", tampoco ha tenido reparo alguno en dar el visto bueno al gobierno ultraderechista de Georgia Meloni en Italia.



La crisis de 2007-2008 mostró la verdadera cara de la UE

Cuando la crisis económica de 2007-2008, los principales países imperialistas europeos salvaron a sus grandes bancos rescatándolos con endeudamiento público, atacando los derechos laborales y sociales y asaltando con saña a los países de la periferia europea.

La clase trabajadora y el pueblo del Estado español lo sufrimos en nuestras carnes cuando, primero Zapatero y más tarde Rajoy, se dedicaron a aplicar los planes de ajuste dictados por Bruselas. Cada reunión del Consejo de ministros provocaba espanto. El resultado final fue una pérdida sustancial de derechos y la generalización de la precariedad, que llegaron para quedarse.

Grecia fue el ejemplo más claro y brutal de hasta dónde estaba dispuesta a llegar la UE para salvar a la gran banca europea. La economía griega fue devastada, los salarios y pensiones recortados bárbaramente, gran parte de los servicios públicos desmantelados y los principales activos económicos del país vendidos a precios de saldo a inversores extranjeros, particularmente alemanes. La soberanía de Grecia se convirtió en un papel mojado y el país se transformó en una nueva semicolonía donde ninguna decisión importante puede tomarse sin la aprobación de Bruselas y Berlín.

La UE no se volvió “social y solidaria” tras la pandemia

Pese al retroceso masivo de derechos y conquistas sociales que nos impusieron, los capitalismos europeos nunca lograron salir de la crisis de 2007-2008. Después, vino la pandemia (2020) y nos volvimos a sumergir en otra profunda recesión. Tras una primera reacción ante la pandemia en la que países miembros prohibían exportar material sanitario a los otros, la UE se presentó como ejemplo de "solidaridad europea" con la compra conjunta de vacunas y con los fondos de recuperación.

Pero fue la UE quien se opuso con más fuerza a liberar las patentes de las vacunas, para así abaratar sus precios escandalosos y permitir atender a los países más empobrecidos. La UE tiene una responsabilidad directa en la muerte de millones de personas, sacrificadas en el altar de los beneficios de las grandes farmacéuticas, entre ellas las alemanas.

En cuanto a los fondos de recuperación, son un dispositivo compuesto por créditos y por subvenciones supuestamente gratuitas, que acabaremos pagando a través del aumento de las aportaciones del estado a la UE y de una mayor deuda.

Los fondos están destinados principalmente a lo que llaman «transición verde y digital», cuyos grandes beneficiarios son -como siempre- los bancos, grandes constructoras, energéticas y otros oligopolios del Ibex 35, cuyos proyectos encajan con los planes de los grandes grupos capitalistas alemanes y franceses, mientras dan la espalda a la emergencia climática y a necesidades sociales imperiosas. El desembolso de los fondos se condiciona, además, a que los estados acometan nuevas "reformas estructurales". En el caso del Estado español, la laboral y una nueva vuelta de tuerca a las pensiones públicas.

La Comisión Europea, tras haber permitido a los gobiernos eludir los límites de déficit y deuda pública en el marco de la crisis económica motivada por la pandemia de la

Covid-19, ha vuelto a las andadas con la imposición del 3% de déficit, lo que solo puede significar más recortes para la clase obrera y los pueblos del continente. Entretanto, la deuda ha seguido aumentando. Todo esto preanuncia una gravísima crisis de pagos que el BCE ya no podrá diferir y que tendrá una profundidad superior a la de 2008. Una crisis que cargarán, de nuevo, sobre nuestros hombros.

La UE y la guerra de Ucrania

No habíamos salido de la pandemia y estalló la guerra de agresión de Putin contra Ucrania. Esta guerra ha desmontado una de las bases fundamentales de la economía de la UE: el suministro energético barato de Rusia a Alemania, la gran potencia económica europea. Solo faltaba el oscuro sabotaje de los gasoductos Nord Stream. La guerra de Ucrania está favoreciendo abiertamente a EE. UU. y debilitando a Alemania en la jerarquía imperialista.

El desabastecimiento ruso ha acelerado la crisis energética que venía de antes (asentada en el agotamiento de fuentes energéticas) y ha provocado una enorme subida de precios del gas y la electricidad y, de rebote, una inflación desconocida en décadas, que está arrasando con los salarios y las pensiones.

La crisis, con un retorno a las energías fósil y nuclear, está dejando asimismo en evidencia la llamada "transición verde". Entre los mayores beneficiarios de esta crisis (aparte de las empresas energéticas europeas) están las corporaciones norteamericanas que venden gas licuado (GNL) en el mercado europeo a precios mucho más caros que el ruso. Entretanto, el BCE sube los tipos de interés y la economía europea, comenzando por Alemania, se adentra en la rece-

sión, la cual, a su vez, agrieta la "cohesión" de la UE ;Denunciamos el hipócrita y tímido plan de la UE de poner un "tope" a los precios de la energía y exigimos la nacionalización de dichas empresas energéticas, poniéndolas bajo control obrero, como única salida para hacer frente a la crisis económica y medioambiental!

La guerra de Ucrania ha sido asimismo, excusa para una brutal carrera armamentista, en cuyo marco Alemania ha decidido convertirse en superpotencia militar. La UE, cuyo apoyo a Ucrania ha sido tardío, interesado y escaso, se apresta, junto con EE. UU., una vez acabe la guerra, a saquear Ucrania y, bajo el rótulo de la "reconstrucción", convertir el país en una semicolonía.

La batalla por los Estados Unidos Socialistas de Europa da sentido a la lucha contra la UE y una perspectiva revolucionaria a la lucha en cada país

La vida nos ha enseñado todos estos años que la lucha para derrotar los planes de austeridad y los "ajustes estructurales" de los gobiernos es inseparable de la lucha contra la UE, en la que dichos planes se sustentan. Los tratados de la UE y las imposiciones de la Comisión Europea son el gran argumento de los gobiernos para justificar sus planes antisociales. El desmantelamiento de la sanidad y de todos los servicios públicos que llevamos años sufriendo, es parte de las imposiciones de la UE para asegurar el pago de la deuda pública. La lucha contra los gobiernos de turno y contra la UE son, así, un pack indivisible.

Dada la interdependencia económica entre los países, no hay salidas "nacionales" para la clase trabajadora. Si la

conquista de las principales reivindicaciones obreras y populares es incompatible con la pertenencia del país a la UE, la ruptura con esta es parte del esfuerzo por extender la lucha revolucionaria al resto de Europa.

En ese sentido, la lucha por la Federación de Repúblicas Socialistas Ibéricas es parte de la lucha por levantar una Europa de la clase trabajadora y los pueblos, una Europa basada en la planificación democrática de la economía, en el trato entre los pueblos como iguales, una Europa donde no tengan cabida el racismo, la xenofobia, la opresión a las nacionalidades... **Por unos Estados Socialistas de Europa que unifiquen de verdad, sobre bases libres y solidarias, la economía y los pueblos de Europa.** No hay solución a escala de un solo país. O el proceso revolucionario se extiende o estará condenado a la derrota.

Sólo así podremos reorganizar la economía, mientras luchamos por articular la solidaridad internacional y en tanto nuevas victorias incorporan a nuevos países a la construcción de una Europa de la clase trabajadora y los pueblos. Es hora de recuperar la tradición de los revolucionarios de la Tercera Internacional, arruinada por la contrarrevolución de Stalin.



**Corriente
Roja**



Construir el Partido Revolucionario en el Estado español y una Internacional

Las crisis del capitalismo son cada vez más agudas. A la precarización que se extiende por todos los continentes, el azote del hambre que afecta a regiones enteras del planeta y la miseria que golpea a sectores crecientes en los llamados países ricos, se añade la emergencia ambiental, que está destruyendo las condiciones climáticas que han hecho posible la civilización humana, así como la carrera armamentista y el militarismo desatados tras la guerra de Putin contra Ucrania.

Si no logramos parar este curso brutal y revertir el desastre, arrebatando el poder a los capitalistas, vamos abocados inexorablemente a la barbarie en sus diferentes formas.

La verdadera fuerza del capitalismo imperialista y sus estados reside en la desmovilización y desorganización de la clase trabajadora y los sectores oprimidos, que somos, sin embargo, la inmensa mayoría de la humanidad. Su fuerza es nuestra debilidad. La gran tragedia que sufrimos es que los representantes oficiales de la clase trabajadora frenan sistemáticamente la respuesta revolucionaria y, cuando no consiguen evitar el estallido social, lo llevan al fracaso porque, como parte que son del sistema, se oponen

de lleno a luchar por el poder de la clase trabajadora y por una salida socialista. El drama se concentra en el **enorme retraso que arrastramos en la construcción de una fuerza revolucionaria que impulse la respuesta revolucionaria y consiga dirigir estos procesos de masas**, haciendo posible que la clase trabajadora se haga con el poder político.

¿Qué partido y para qué?

Un partido es una agrupación de personas alrededor de un programa y unos objetivos que responden a los intereses de una clase social o de una fracción de ésta. La clase trabajadora necesita construir su propio partido, con un programa delimitado para asegurar su independencia como clase frente a la burguesía y su estado.

El partido que aspiramos a construir no busca “unir a toda la izquierda” sino a **ganar al sector más consciente de la clase trabajadora y la juventud en torno a un programa y un método revolucionarios**. En esa tarea, la independencia financiera es un requisito básico.

El régimen del partido es la máxima expresión de su política y su programa. Un partido revolucionario se basa en el centralismo democrático, que es lo opuesto al centralismo burocrático en el que unos pocos mandan y el resto obedece

o donde caudillos indiscutidos hacen y deshacen por encima de los organismos partidarios. El centralismo democrático se basa en la mayor democracia interna a la hora de debatir la política y, una vez votada ésta, en la disciplina colectiva para aplicarla y cumplir las tareas votadas. Concluida la actividad, el partido debate democráticamente el balance de su actuación y saca las conclusiones colectivas.

El partido revolucionario debe sustentarse en una moral que rechaza tajantemente la doble moral hipócrita, así como el método de las difamaciones, calumnias y ataques entre revolucionarios/as, propio del estalinismo. El primer criterio moral de todo partido revolucionario es preservar su seguridad e integridad y la de toda su militancia. La moral revolucionaria exige combatir con la mayor firmeza, dentro y fuera del partido, toda forma de opresión, machista, racista, LGBTIfóbica u otra.

Así como el capitalismo es mundial, el socialismo ha de serlo con mucha más razón, pues debe basarse en una planificación económica mundial. No hay lugar para ningún "socialismo en un solo país". Los y las trotskistas solemos decir que la lucha por el poder político y la construcción socialista comienza en el terreno estatal, se extiende internacionalmente y culmina en el ámbito mundial.

En nuestro caso, un estadio fundamental de esta batalla es la construcción de unos Estados Unidos Socialistas de Europa. Pensamos, al igual que lo hicieron Marx, Engels y Lenin, que **una organización revolucionaria tiene que ser parte de un partido revolucionario mundial**, que se ha de construir simultáneamente en el terreno nacional e internacional. La Liga Internacional de Trabajadores, LIT-ci, a la que pertenecemos, está al servicio de **reconstruir programática, metodológica y moralmente, la Cuarta Internacional**.

La participación en las elecciones y en las instituciones parlamentarias está al servicio de la lucha extraparlamentaria, la difusión del programa y la construcción del partido revolucionario

Mientras la clase trabajadora no haya tomado el poder político, el criterio general de los y las marxistas es participar en las elecciones para dar a conocer el programa revolucionario, ganar influencia y fortalecer el partido. La participación en las instituciones parlamentarias tiene como objetivo principal el impulso de la lucha extraparlamentaria y la organización de la clase trabajadora.

Es un instrumento necesario para minar desde dentro estas instituciones corruptas, mientras impulsamos formas de organización democrática de la clase trabajadora que las sustituirán cuando llegue la hora.

Las organizaciones pequeñas tenemos que vencer las enormes trabas de una legislación electoral antidemocrática que proviene de 1977, cuya aplicación se ha ido endureciendo con el tiempo, y que no garantiza siquiera el principio democrático burgués, de “una persona un voto”.

¡Súmate a construir Corriente Roja y la LIT-ci!

Hoy, frenar la crisis climática y económica, la destrucción del planeta y el expolio de recursos, se resume en la lucha por la revolución socialista mundial. La razón de ser de Corriente Roja es la lucha por superar la crisis de dirección revolucionaria mundial, construyendo un Partido y una Internacional revolucionaria con influencia de masas. Esta crisis de dirección sólo será superada en el curso de la

movilización de masas y mediante acuerdos y fusiones con otras tendencias y organizaciones.

En el Estado español, ni el gobierno más progresista de la historia ha sido capaz de gestionar la crisis de la Covid-9, la inflación y la crisis económica, en favor de la clase trabajadora y el pueblo pobre. Muy al contrario, este gobierno ha puesto en marcha una operación de rescate a las empresas y grandes multinacionales, abandonando a amplios sectores de la población como las mujeres, los jóvenes y estudiantes pobres y los trabajadores/as.

Los y las militantes de Corriente Roja venimos defendiendo que, para salir de la crisis, hace falta construir un gobierno de la clase trabajadora, apoyado en la movilización y organizaciones de lucha del pueblo. Sabemos que esta lucha no es sencilla y exige combatir, no solo a los enemigos declarados, sino también a aquellos que son sus representantes en las filas del movimiento obrero y popular. Exige llevar adelante la autoorganización de los y las trabajadoras, y reconstruir el movimiento sindical, garantizando la más amplia democracia obrera.

Esta es nuestra propuesta programática. Con ella nos dirigimos a los y las activistas y a la juventud rebelde que buscan una salida estratégica a este régimen corrupto y a este sistema capitalista de opresión y explotación. Queremos sentarnos y debatir para construir con paciencia, pero con tesón, un agrupamiento de clase con un programa revolucionario, socialista e internacionalista, que dé respuesta a la necesidad más urgente y profunda que hoy tiene la humanidad: la revolución socialista. Una organización que aspire a ser un referente para quienes, como nosotros y nosotras, buscan una salida revolucionaria.

